

Santiago, veintitrés de julio de dos mil siete

Vistos:

Se instruyó en el proceso rol N° 2.182-98 el episodio denominado “José Domingo Cañas”(“**Lumi Videla y Sergio Pérez**”), iniciado en virtud de denuncia de fojas 1, de 3 de noviembre de 1974, en que se da cuenta que el Segundo Secretario Comercial de la Embajada de Italia expuso que alrededor de las 03;10 horas, dos asilados encontraron el cadáver de una mujer en los jardines, la cual fue identificada, por Parte N°176, de fojas 9, como Lumi Videla Moya; además, a fojas 37 Luz Moya Díaz denuncia el delito de homicidio en la persona de su hija y, finalmente, se deducen querellas interpuestas, a fojas 300, por Dago Emiliano Pérez Videla y Laura Luz Moya Díaz, por los delitos de secuestro, homicidio y otros en la persona de Lumi Videla Moya y, a fojas 519, por el mismo Dago Pérez Videla por los delitos de secuestro y otros de sus padres Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina.

Por resolución de fojas 1780 se sometió a proceso a:

I) Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko y Ciro Ernesto Torrè Sáez, en calidad de autores del delito de secuestro calificado en la persona de Sergio Pérez Molina y a

II) Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Cristoph Georg Paul Willeke Floel, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Marcelo Luís Moren Brito, Miguel Krassnoff Martchenko, Ciro Ernesto Torrè Sáez y Basclay Humberto Zapata Reyes en calidad de autores del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya.

A fojas 2389 se declaró cerrado el sumario.

Los demás antecedentes y pruebas acumuladas en el curso de la investigación, se encuentran debidamente individualizados en la acusación de oficio de fojas 2506 a 2524 y serán analizados en la parte considerativa de este fallo.

Se adhirieron a la acusación de oficio, en lo principal de fojas 2530, la abogada Secretaria Ejecutiva del “Programa Continuación Ley N°19.123” del Ministerio del Interior; Magdalena Garcés Fuentes e Hiram Villagra Castro, apoderados de los querellantes Laura Moya y Dago Pérez Videla, en lo principal de fojas 2549; Carlos Urquieta Salazar por los querellantes Lautaro Videla Moya y Eduardo Pérez Molina, en lo principal de fojas 2574 y, además, en el primer otrosí deduce demanda civil de indemnización de perjuicios en contra de Miguel Krassnoff Martchenko, Francisco Ferrer Lima, Cristoph Georg Paul Willeke Floel y del Fisco de Chile.

La Abogado Procurador Fiscal en lo principal de fojas 2630 contesta dicha demanda.

A fojas 3015 se estimó extemporánea la contestación a la demanda civil por parte del apoderado de Krassnoff (7° otrosí de fojas 2928) y a fojas 3139 se tuvo por evacuadas, en rebeldía, dichas contestaciones por parte de los apoderados de Ferrer Lima y de Willeke Floel.

El apoderado de Ciro Torrè Sáez en lo principal de fojas 2652 opone como excepciones de previo y especial pronunciamiento las de amnistía y de prescripción de la acción penal, previstas en los números 6 y 7 del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal y evacuados los traslados respectivos por los abogados de los querellantes y por la abogada del Programa “Continuación de la Ley N°19.123 del Ministerio del Interior, se desechan las excepciones por resolución de fojas 3080.

El apoderado de Basclay Zapata Reyes en lo principal de fojas 2697 opone excepciones de previo y especial pronunciamiento, previstas en los números 4, 6 y 7 del artículo 433 del

Código de Procedimiento Penal y evacuados los traslados respectivos por los abogados de los querellantes y por la abogada del Programa “Continuación de la Ley N°19.123 del Ministerio del Interior, se desechan las excepciones por resolución de fojas 3112.

El apoderado de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda en el segundo otrosí de fojas 2795, la de Francisco Maximiliano Ferrer Lima en el segundo otrosí de fojas 2833 y la de Christoph Georg Paul Willeke Floel, en el segundo otrosí de fojas 2865, oponen como excepciones de previo y especial pronunciamiento las de amnistía y de prescripción de la acción penal, previstas en los números 4 y 6 y 7 del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal y evacuados los traslados respectivos por los abogados de los querellantes y por la abogado del Programa “Continuación de la Ley N°19.123 del Ministerio del Interior, se desechan las excepciones por resolución de fojas 3096.

Por otra parte, las defensas de los acusados que se indican, contestan, respectivamente, la acusación de oficio y las adhesiones particulares, en el primer otrosí de fojas 2652 la de Ciro Torrè Sáez; en el primer otrosí de fojas 2697, la de Basclay Zapata Reyes; en lo principal de fojas 2725 la de Marcelo Moren Brito; en el tercer otrosí de fojas 2795 la de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda; la de Francisco Ferrer Lima en el tercer otrosí de fojas 2833; la de Christoph Willeke Floel en el tercer otrosí de fojas 2865 y la de Miguel Krassnoff Martchenko en el segundo otrosí de fojas 2928.

A fojas 3150 se recibe la causa a prueba.

En el término probatorio se agregan los siguientes antecedentes:

Informes del Decano de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile (3166 a 3167), del Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile (3168 a 3175), del Secretario General de la Armada (3177), del Ministro del Interior Subrogante (3178 a 3179), de la Ministra de Bienes Nacionales, adjuntando documentos (3180 a 3192),), del Conservador de Bienes Raíces Luis Alberto Maldonado (3194), de Ricardo García Rodríguez (3435 a 3439); Oficios N°1595/53 del Estado Mayor General del Ejército, relativo a Juan Manuel Contreras y a Francisco Ferrer Lima (3195 a 3218), N°1595/1520, relativo a Cristoph Willeke y a Francisco Ferrer Lima (3219 a 3235), N°1595/1546, relativo a Luis Ramírez Pineda, (3236), Minuta de Servicios de Basclay Zapata (3237); Oficios N°18248 del Departamento Control Fronteras de Investigaciones respecto de anotaciones de viajes de Francisco Ferrer Lima (3238 a 3240) y N°16732, respecto de Manuel Contreras Sepúlveda (3241), Oficio N°3643 de la Excma. Corte Suprema, transcribiendo certificado (3242), fotocopias de declaraciones de Marcia Merino Vera (3243 a 3271), de careo de la misma con Francisco Ferrer (3272 a 3275 y 3280 a 3283), y de careo con Ciro Torrè (3276 a 3279), de declaraciones de Daniel Valentín Cancino Varas (3284), de Luz Arce Sandoval (3288 a 3310), de María Alicia Uribe Gómez (3311 a 3324), de Emilio Hernán Troncoso Vivallos (3225 a 3328), de Amistoy Elías Sanzana Muñoz (3329 a 3330), de José Avelino Yévenes Vergara (3331 a 3334), de Osvaldo Pulgar Gallardo (3335 a 3337), fotocopia de careo entre Ciro Torrè y Marcelo Moren Brito (3339 a 3340), declaración jurada de Rosalía Martínez Cereceda (3341 a 3352) y declaración judicial de la misma (3353 a 3365 y 3369 a 3373), Parte N°1218 de Investigaciones (3376 a 3377), de los Informes evacuados por Sergio Fernández Fernández (3380), Carlos Cáceres Contreras (3288 a 3389), Sergio Diez Urzúa (3391 a 3392), Enrique Montero Marx (3394 a 3395), Extractos de filiación y antecedentes de Sonia del Carmen Acuña Chandía, Marieta Saavedra Arellano, Humberto Sotomayor Salas, Viviana Uribe Tamblay, Lautaro Videla Moya, Oscar Zarricueta Lagos, Luz Arce Sandoval, María del Carmen Castillo Echeverría y de Amada de Negri, Samuel Fuenzalida Devia, María Luz García Ferrada,

Nora Guillén Graf, Boris Lagunas León, Félix Lebrech Díaz-Pinto, Luis Lillo Ahumada, Rosalía Martínez Cereceda, Marcia Merino Vega, Gastón Muñoz Briones, Marion Ojeda Disselkoen, Patricio Paniagua Giannini y Enrique Pérez Rubilar(3397 a 3410).

Declaraciones judiciales de Marcela Rosa Vergara Cornejo(3420), Carmen Gloria Pizarro Hinestrosa (3422), Norman Alberto Partarrieu Padilla(3425), Erick Nelson Amigo Palacios(3427) y Andrés Pascal Allende(3430).

Fotocopias de: recorte de diario “La Segunda”; Recurso de queja N°5476 de 30 de enero de 1996(cuyo texto íntegro rola de fojas 3460 a 3462 vta.); y actas de visitas de Cruz Roja Internacional(3443 a 3446 y 3449 a 3452).

Oficio N°J/050/2007 del Subsecretario del Interior (3455).

Documentos proporcionados, a petición de los querellantes Lautaro Videla y Eduardo Pérez en el 4°otrosí de fojas 2574, enrolados en Cuaderno Separado(“*Documentos relativos al daño moral*”)sobre “Consecuencias de la desaparición forzada sobre la salud en familiares de detenidos desaparecidos”(1 a 36), “Informe del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos(37 a 62)”, “Acerca del traumatismo y del duelo en familiares de detenidos desaparecidos”(63 a 79), Seis informes realizados por la “Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad” sobre las secuelas que dejan en el plano de la salud mental las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar en Chile (80 a 188) y “Efectos familiares y sociales de las más graves violaciones a los derechos humanos”(191 a 257).

A fojas 3467 se decretan medidas para mejor resolver, cumplidas en las fojas que se indican respecto de las materias que se detallan:

Desde fojas 3469 a fojas 3549 certificaciones al tenor del artículo 350 bis del Código de Procedimiento Penal respecto de otros procesos seguidos en contra de los acusados.

Fotocopias de declaraciones prestadas por las siguientes personas;

Ricardo Víctor Lawrence Mires(3550 a 3556).

Silvio Antonio Concha González(3558 a 3561).

Rosa Humilde Hernández(3562 a 3565).

Claudio Enrique Pacheco Fernández(3566 a 3572).

Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda(3586 a 3588), el cual, además, acompaña documentos que se enrolan de fojas 3583 a 3585 y de fojas 3589 a 3638).

Ciro Ernesto Torrè Sáez(3639 a 3644).

Leonardo Alberto Schneider Jordán(3645 a 3654).

Pedro René Alfaro Fernández(3655 a 3659).

Marieta de las Mercedes Saavedra Arellano(3664 a 3666).

Nelson Agustín Aramburu Soto(3667 a 3669).

Berta del Tránsito Valdebenito Mendoza(3670 a 3671).

Boris Osvaldo Lagunas León(3672 a 3675).

Jorge Roberto Amador Amador(3676 a 3678).

Nibaldo Jiménez Santibáñez(3679 a 3693).

Fotocopias de informes evacuados por:

Hugo Salas Wenzel(3573 a 3575).

Odlanier Mena Salinas(3576 a 3578).

Gustavo Abarzúa Rivadeneira(3579 a 3581).

Hojas de Servicios de:

Miguel Krassnoff Martchenko(3660).

Marcelo Moren Brito(3662).

Hoja de vida de:

Ciro Torr  S ez(3697 a 3725) y su extracto de filiaci n y antecedentes(3728).

Certificado de nacimiento de Lautaro Robin Videla Moya(3695).

Adem s, deponen, los testigos Marcela Rosa Vergara Cornejo (3420), Carmen Gloria Pizarro Hinestrosa (3422), Norman Alberto Partarrieu (3425), Luis Erick Nelson Amigo Palacios(3427) y Andr s Pascal Allende (3430).

Se trajo los autos para dictar sentencia.

Considerando:

I) Delito de homicidio de Lumi Videla Moya.

Primero.- Que, a fin de acreditar el delito sealado en el  p rafe, materia del numeral 1  de la acusaci n de oficio de fojas 2506 a 2524 y de las adhesiones a ella, de lo principal de fojas 2530, de la abogada Secretaria Ejecutiva del “Programa Continuaci n Ley N 19-123”, de lo principal de fojas 2549 de Magdalena Garc s Fuentes e Hiram Villagra Castro, apoderados de los querellantes Laura Moya y Dago P rez Videla, y de lo principal de fojas 2574, de Carlos Urquieta Salazar por los querellantes Lautaro Videla Moya y Eduardo P rez Molina, se han reunido en el proceso los siguientes antecedentes:

1) Denuncia interpuesta a fojas 37 por Luz Moya D az por la muerte de su hija Lumi Videla Moya; al ratificarla, a fojas 41, explica que no viv a con ella, pero al enterarse que hab a sido detenida interpuso un recurso de amparo en su favor;

2) Querella deducida, a fojas 300, por Dago Emiliano P rez Videla y Laura Luz Moya D az, por los delitos de secuestro, homicidio y otros en la persona de Lumi Videla Moya y querella interpuesta, a fojas 519, por el mismo Dago P rez Videla por los delitos de secuestro de sus padres Lumi Videla Moya y Sergio P rez Molina; ambos libelos fueron ratificados por Laura Luz Moya D az a fojas 792 y por Dago Emiliano P rez Videla a fojas 793.

3)Declaraci n de Sonia del Carmen Ac  a Chand a de fojas 146, quien seal a que le era conocido el nombre de Lumi Videla Moya, ya que el 12 de octubre de 1974 la deponente fue detenida, por agentes de la DINA, al intentar asilarse en una Embajada, la trasladaron hasta un recinto de detenci n y all , a menudo, escuchaba el nombre de Lumi Videla, al “*pasarles lista*” antes de acostarse.

4)Testimonio de Mar a Luz Garc a Ferrada de fojas 148 en cuanto expone que supuso que Lumi Videla hab a sido detenida el 21 de septiembre de 1974 porque al reunirse con la declarante y su marido, Humberto Sotomayor, el c nyuge de aquella, Sergio P rez Molina, les inform  que Lumi no hab a llegado a la casa; al d a siguiente acompa   a Sergio P rez a su domicilio, pero al ingresar, ellos quedaron esperando afuera y escucharon disparos y una voz que les dec a

que se alejaran, enter ndose que aquel hab a sido detenido por agentes de seguridad. En la Embajada de Italia se enter  por dichos de una muchacha que hab a sido detenida por la DINA y trasladada hasta el recinto denominado “Jos  Domingo Ca as” y que all  a Lumi Videla Moya la llamaron en repetidas ocasiones.

5)Atestaci n de Gast n Lorenzo Mu oz Briones de fojas 194 quien fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y trasladado hasta el centro de detenci n de “Jos  Domingo Ca as”, donde mandaba un tal “Ronco”, al que, posteriormente, identific  como Marcelo Moren; otro agente que conoci  en este lugar fue Miguel Krassnoff, porque lo tortur  personalmente. En este recinto estuvo detenido junto a Lumi Videla.

6) Testimonio de Lautaro Robin Videla Moya, de fojas

207, quien señala que Romo, mientras estaba detenido en “Villa Grimaldi”, le contó que Lumi había

sido asesinada, mediante sofocación, por un oficial del

Ejército de apellido Willeke; hubo investigación en el Tercer Juzgado del Crimen y en un careo entre Willeke y Romo éste se desdijo de todo.”...*El fundamento por el cual Romo se retractó de sus dichos fue porque fue visitado en la Penitenciaría donde estaba privado de libertad por un General de Ejército de apellido Garín, quien le ofreció dinero para que obrara así. Esto lo supe porque el propio Romo me lo contó cuando yo le representé su actitud, dándome como explicación que estaba solo en Chile, que tenía problemas económicos y miedo...*”

7) Dichos de Félix Edmundo Lebrecht Díaz-Pinto de fojas 210 quien fue detenido el 1° de octubre de 1974 por Osvaldo Romo y otros agentes de la DINA y trasladado hasta “José Domingo Cañas”, lugar en que lo encerraron en un sector muy pequeño, tiene la impresión que era la despensa de una casa; estuvo allí hacinado, con otras 10 ó 12 personas, entre ellas, Lumi Videla; era muy morena, de labios gruesos y pelo negro, quien llevaba unos ocho días detenida. Posteriormente, supo que su cadáver fue encontrado al interior de la Embajada de Italia.”...*Me parece que fue asesinada y su cadáver tirado al interior de la Embajada de Italia como una venganza debido a que en esos días había habido un enfrentamiento entre gente del MIR y agentes de la DINA en el que murieron personas por ambos lados y Lumi, que era la más alta dirigente del MIR que tenía la DINA en ese momento, fue muerta en represalia a este hecho...*”. En fotocopia de Registro notarial de la ciudad de Ulm, Alemania, (720-721), consta una declaración jurada prestada por el mismo Lebrecht y su cónyuge Gilda María Teresa Bottai Monreal; el primero reitera haber sido detenido el 30 de septiembre de 1974 y llevado por la DINA al centro de torturas de “José Domingo Cañas” y durante tres días vio, entre otros, a Lumi Videla y ambos declaran haber hablado con ella.

8) Declaración de Samuel Fuenzalida Devia de fojas 240 el cual expone que fue agente de la DINA y enviado a diversos centros de detención, entre ellos, al de “José Domingo Cañas” y si bien no vio a Lumi Videla, por los dichos de Romo se enteró que ella y su marido, Sergio Pérez, habían estado detenidos en ese recinto; él se encontraba trabajando en “Villa Grimaldi” cuando ella apareció muerta en la Embajada de Italia el 03 de noviembre de 1974”*debido a que el día anterior un miembro de la DINA, de nombre Gerardo Urrich fue herido a bala en la calle Bilbao, frente a un supermercado...hecho este último que tiene relevancia debido a que, según se comentó, Lumi Videla, fue muerta en represalia por las heridas que sufrió Urrich...*” Además, recuerda que Marcelo Moren Brito le comentó, después que se supo que el cadáver de Lumi apareció en la Embajada de Italia, que “*los miristas se asilaban muertos*”.

9) Versión de Viviana Uribe Elena Uribe Tamblay (288), quien fue detenida, junto a una hermana y a un tío, el 13 de septiembre de 1974; los llevaron al centro de detención de “Cuatro Alamos”, permaneció allí unos catorce días y luego fue conducida hasta otro cuartel en “José Domingo Cañas”; fue torturada y dejada en una habitación en que había unas doce personas, entre ellas, Lumi Videla, quien fue muerta y su cadáver lanzado a la Embajada de Italia.

10) Atestación de Patricio Rubén Paniagua Giannini 459) quien permaneció detenido en el recinto de “José Domingo Cañas” y estuvo, un día viernes, con Lumi Videla, con quien conversó, pues la conocía por haber sido compañeros de Liceo y ella le prestó un chaleco.”...*El día sábado Lumi fue sacada de la celda y llevada a interrogatorio y desde ahí nunca más regresó. Yo escuché cuando la “Flaca Alejandra” preguntaba por Lumi ya que su ropa permanecía en*

“José Domingo Cañas”...Cuando ya me encontraba... en “Tres Álamos” supe que Lumi había sido asesinada...”

11)Antecedentes proporcionados por el “Programa Continuación Ley Nº19.123” del Ministerio del Interior, de fojas 690 relativos a la detención y muerte de Lumi Videla Moya, consistentes en:

a)Fotocopia de declaración prestada por Luis Humberto Lillo Ahumada(706-707)quien fue detenido el 28 de octubre de 1974 y conducido a un lugar en que había otros detenidos, entre ellos, Lumi Videla, sindicada como del MIR, la cual llevaba allí unos dos meses con torturas diarias.

b)Fotocopia de declaración prestada por Graciela Scarlett Mathieu Loguercio (708-715) la cual fue detenida el 15 de julio de 1974 y llevada hasta “Londres 38” y por los interrogatorios advirtió que la estaban confundiendo con Lumi Videla, pues le preguntaban sobre miembros de la Dirección del MIR.

c)Fotocopia de declaración jurada prestada por Hernán Roberto del Fierro Allende y su cónyuge Hortensia Patricia Glave del Villar(716-719); esta última explica que fue detenida el 4 de octubre de 1974 y llevada hasta la casa de “José Domingo Cañas” y allí la llevaron inmediatamente a “*la parrilla*”; ocurrió un día antes de la muerte de Miguel Henríquez y de esa misma casa salieron casi todos los agentes para el operativo. Permaneció unos 8 días, durante los cuales conversó con Lumi Videla, la cual le daba aliento después de ser torturada; la veía muy delgada porque no le daban comida, sólo la dejaban tomar agua; día por medio la torturaban, tenía quemaduras de “*la parrilla*” y estaba muy preocupada por su marido, el “chico Pérez”, ya que le habían dicho que estaba en el hospital.

d)Fotocopia de declaración jurada prestada por Rosalía Martínez Cereceda(733) quien fue detenida el 22 de septiembre de 1974 y llevada al recinto de “José Domingo Cañas”;allí escuchó gritos de una persona que era torturada y reconoció la voz de Sergio Pérez Molina, cónyuge de Lumi Videla, a la cual había conocido por ser ambas alumnas del Liceo Darío Salas; aquel la llamó por teléfono el 22 de septiembre para avisarle que “*Lumi cayó*” y le advirtiera a la gente “*para que se cambiaran de lugar*”. Estuvo en una pieza con Lumi quien le contó que había sido detenida, en la calle, por la delación de Marcia Merino. La última vez que la vio fue el 5 de octubre, cuando trasladaron a la declarante a “Cuatro Álamos”.

12) Dichos de Luz Arce Sandoval, de fojas 888, quien expresa que vio, en calidad de detenidos, a Lumi Videla y a Sergio Pérez en el cuartel de “José Domingo Cañas” y que Marcia Merino fue quien “*entregó*” a Lumi Videla. Explica, a fojas 3288, haber sido detenida el 17 de marzo de 1974 por agentes de la DINA y conducida a “Londres 38”, luego a “Tejas Verdes”, de nuevo a “Londres 38”, lugar en que recibe un balazo en su pie derecho, fue llevada al Hospital Militar y quedó en libertad el 10 de julio pero nuevamente fue detenida el día 18 y trasladada a “Villa Grimaldi”, siendo torturada y, para salvar su vida, con su hermano, redactaron una lista de “*compañeros socialistas*”; el 12 de septiembre la condujeron al recinto de calle José Domingo Cañas, denominado “Ollagüe”,cuyo jefe era Ciro Torrre, “*el que manejaba el cuartel como si fuere una Comisaría*”. El 5 de octubre murió Miguel Henríquez, en un operativo en que participaron todos los agentes de la DINA. A los detenidos se les amarró, ella estaba en una pieza con la “*Flaca Alejandra*”, Lumi Videla y otra detenida. Explica que “*Lumi Videla estaba en muy malas condiciones físicas, pensaba que la iban a matar y me regaló su chaqueta de cuero. Luego de eso su ropa fue repartida en José Domingo Cañas...Aproximadamente a fines de octubre de 1974 es sustituido Torrre de la jefatura de José Domingo Cañas por Francisco Ferrer Lima...El*

recinto de José Domingo Cañas se cerró como centro de detenidos el 18 de noviembre de 1974, después de la muerte de Lumi Videla, fecha en que soy trasladada a "Villa Grimaldi"...Con relación al trabajo operativo que desarrollaba la DINA, puedo señalar que en Santiago se encontraba a cargo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM)...agrupaba a las unidades "Caupolicán", "Purén" y hasta 1976 "Tucapel". La "Caupolicán" correspondía a una unidad operativa, que tenía como misión la detención y represión de las organizaciones políticas de izquierda...En el mes de agosto de 1974 se encontraba conformada por los siguientes grupos: "Halcón" y "Águila"...La agrupación "Caupolicán" entre agosto de 1974 y marzo de 1975 fue comandada por Marcelo Moren Brito, fecha en que es reemplazado por...Miguel Krassnoff Martchenko, quien entre esas fechas se encontraba a cargo del grupo "Halcón"..."

13) Declaración de Humberto Eduardo Sotomayor Salas, de fojas 126, quien expone que el 2 de noviembre de 1974 se encontraba asilado en la Embajada de Italia y como a Lumi Videla la conocía desde mucho tiempo antes, al igual que a su familia, al acercarse a su cadáver pudo identificarla inmediatamente y le consta que ella no estaba asilada en la Embajada. Agrega que el día 21 de septiembre de 1974, Lumi desapareció de su hogar y al otro día, a las 09:30 horas, en presencia del deponente, el esposo de Lumi, Sergio Pérez Molina fue detenido. Reitera sus dichos a fojas 763.

14) Versión de Marieta de las Mercedes Saavedra Arellano, de fojas 957, quien fue detenida en el mes de octubre de 1974 y llevada hasta "José Domingo Cañas", recinto en que permaneció en calidad de detenida por varios días, fue sometida a interrogatorios y torturas; en este lugar vio, en la misma calidad de detenidos, a Lumi Videla y a su marido, Sergio Pérez Molina.

15) Informe de la "Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación" -creada el 9 de mayo de 1990 mediante publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo N°355 del Ministerio del Interior, con el objeto *"de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, con el fin de colaborar a la reconciliación de los chilenos"*, en cuanto reseña lo siguiente: *"El 21 de Septiembre de 1974 fueron detenidos por agentes de la DINA en Santiago los cónyuges Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina, ambos militantes del MIR. Numerosos testigos dieron cuenta de su permanencia en el recinto de José Domingo Cañas. El 03 de Noviembre Lumi Videla murió en una sesión de tortura a la que era sometida en aquel recinto. La causa de su muerte fue Asfixia producto de obstrucción de la boca y nariz estando el cuerpo en decúbito ventral. Sergio Pérez desapareció desde ese mismo recinto. El 4 de Noviembre de 1974 se encontró el cadáver de Lumi Videla en el lado interior de una pared del jardín de la Embajada de Italia, en la comuna de Providencia. La prensa de la época informó que habría sido víctima de los asilados que se encontraban en la Embajada, en el marco de una orgía. La Embajada, por su parte, desmintió que Lumi Videla se hubiera encontrado asilada en el recinto. La Comisión llegó a la convicción de que Sergio Pérez desapareció por acción de agentes de la DINA, y que Lumi Videla Moya murió por efecto de la tortura que le inflingieron agentes del mismo organismo, en violación de los derechos humanos de ambos"*. (Página 515,Tomo 2).

16) Denuncia, de fojas 1, de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros de Chile, que da cuenta del hallazgo de un cadáver en el interior de la Embajada de Italia.

17) Informe de la Brigada de Homicidios de Investigaciones, de fojas 9, sobre la individualización de cadáver encontrado en la Embajada de Italia.

18) Set fotográfico N°1519/74 y croquis N°15.952,de fojas 13, correspondientes al hallazgo de un cadáver en la Embajada de Italia, remitido por el Laboratorio de la Policía Técnica de Investigaciones.

19) Plano, de fojas 30, de la Embajada de Italia.

20) Oficios de la Embajada de Italia:

a) De 4 de octubre de 1974 dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores relativo al ingreso de ciudadanos chilenos en búsqueda de asilo diplomático, lo que *“ha producido una situación de alta peligrosidad...reiterados pedidos de una mayor y más eficaz vigilancia...no han producido el efecto esperado...dicha vigilancia tendría que ser de tipo preventivo y no represivo...”*(Fojas 153 y 154).

b) De 3 de noviembre de 1974 del Segundo Secretario señor Roberto Toscano informando *“...a las autoridades chilenas competentes...que en la madrugada del día de hoy fue encontrado al interior de la muralla de la Embajada(Residencia)ubicada en Miguel Claro 1359, el cadáver de una persona de sexo femenino. Dicha persona no era de las que han ingresado en búsqueda de asilo en la Embajada de Italia, quienes son registradas por los funcionarios de la Embajada y cuyos nombres son entregados...al Ministerio de Relaciones Exteriores...”*(Fojas 155).

c) De 7 de noviembre de 1974 en que se expresa: *“3.-Confirmando que la muerte no pertenece al grupo de huéspedes de mi misión diplomática.4.Desmiento terminantemente haber opinado que “la mujer fue asesinada en la calle y que sus victimarios la habrían lanzado hacia el interior de la Embajada...”* (Fojas 157 a 159).

21) Testimonio de Omar Tordesilla Matus, de fojas 50,

Teniente Coronel del Carabineros, quien practicó las primeras diligencias en dicho recinto diplomático;

22) Declaración de Roberto Toscano, de fojas 62, Segundo Secretario de la Embajada de Italia, quien explica que el 3 de noviembre de 1974, a las 04:00 de la mañana, fue avisado telefónicamente, a su casa particular, que en la Embajada se había encontrado un cadáver; agrega haber autorizado a la Policía de Investigaciones y a Carabineros el ingreso al recinto a objeto de que practicasen las diligencias de rigor.

23) Orden de investigar N° 182 de la Brigada de Homicidios, de fojas 19, con testimonios de Roberto Toscano, Segundo Secretario de la Embajada de Italia, y de algunos vecinos del sector.

24) Deposition of Julio Enrique Navarro Labra de fojas 27, a quien le correspondió, en su calidad de Prefecto, dirigir la investigación realizada en la Embajada de Italia con motivo de haberse hallado un cadáver en dicho lugar.

25) Declaraciones de Mario Wilfredo Escárate Escárate de fojas 28 vuelta, de Armando René Oliva Laffont de fojas 29 vuelta, de Washington Daniel Barria Rodríguez de fojas 31 y de Juan Ignacio Cristo Díaz, funcionarios policiales que intervinieron en las labores de investigación en la Embajada;

26) Dichos de Herbert Aguilera Mena de fojas 150, Comisario de la 14ª Comisaría de Carabineros, quien estuvo a cargo de las diligencias en la Embajada.

27) Oficio Reservado N°4 del Ministerio de Relaciones Exteriores de fojas 161, que expresa que Lumi Videla Moya no figura en la nómina de asilados en la Embajada de Italia.

28) Documento remitido por Carabineros de Chile, de fojas 165, que dice relación con testimonios prestados por los funcionarios que efectuaron servicios de turno los días 02 y 03 de noviembre de 1974 en la Embajada de Italia.

29) Testimonios de Omar Gabriel Quezada Román de fojas 32; Benigno Hipólito Hernández Rocha de fojas 32 vuelta, de Mario Agustín Toro Aros de fojas 33; de Francisco Rafael Vivanco Escobar de fojas 33 vuelta; de Iván de la Cruz Cancino Salgado de fojas 34; de Germán Rodolfo Clare Vásquez de fojas 34, funcionarios de Carabineros que realizaron turnos en la Embajada de Italia el día de los hechos.

30) Preinforme de autopsia N° 3.002- 2.002 de Lumi Videla Moya, de fojas 403, y fotografías, de fojas 439 y 443. En ampliación del Informe de exhumación N° 3002-2002, de fojas 425, destinado a buscar y describir posibles lesiones en los restos óseos esqueléticos pertenecientes a Lumi Videla Moya, se concluye: *“3)Existen temporalmente tres grupos de fracturas: a)Fracturas costales...entre 4 a 6 semanas de evolución antes del deceso que no podrían ser fruto de la caída del muro en cuestión. b)Un segundo grupo de fracturas pre o perimorten que pudieron ser causadas por la caída del muro, pero por lo anteriormente discutido parece improbable por los mecanismos involucrados...c)Otro último grupo de fracturas llamadas fracturas osteocondrales de las extremidades inferiores...7)La variedad temporal y anatómica de las fracturas hacen imposible que todas sean fruto de la caída del muro”*.

31)Informe de autopsia N° 2432/74 del Instituto Médico Legal de fojas 5 concluyendo que la causa de la muerte de Lumi Videla Moya fue un estado asfíctico, cuyo mecanismo posible podría corresponder a una sofocación por obstrucción de la boca y narices, estando el cuerpo de decúbito ventral.

32)Informe Pericial Planimétrico de la Policía de Investigaciones de fojas 365.

33)Informe pericial fotográfico de la Policía de Investigaciones sobre exhumación del cadáver de Lumi Videla Moya de fojas 269 y siguientes.

34)Informe Histopatológico de Lumi Videla Moya, de fojas 390, emanado del Instituto Médico Legal.

35)Examen histológico en muestras de tejido pertenecientes a Lumi Videla Moya, de fojas 463.

36)Oficio N° 63 del Servicio Médico Legal remitiendo examen químico-toxicológico de unas muestras de vísceras de Lumi Videla Moya de fojas 163.

37)Certificados de defunción de Lumi Videla Moya(fojas 24 y 389) consignando como causa de la muerte *“estado asfíctico”*.

38)Lista con nombres de asilados en la Embajada de Italia en Santiago de fojas 68 y siguientes y declaraciones de Gladys del Carmen Bustos Morilla de fojas 76, de Sonia de las Mercedes Garrido Trujillo de fojas 76 vuelta, de Silvia Jovita Moraga Pérez de fojas 77 vuelta, de Pedro Juan Sotomayor Realini de fojas 78, de Fernando Velásquez Contreras de fojas 78 vuelta, de Yolanda Irene Ávila Velásquez de fojas 79, de María Verónica del Campo Casanueva de fojas 79 vuelta, de Isabel del Carmen Montenegro de fojas 80, de María Nelly Ramos Jorquera de fojas 81, de José Nicolás Yovane Montea de fojas 81 vuelta, de Daniel Avila Maureira de fojas 82, de Gladys del Carmen Escárate Reyes de fojas 83, de María Teresa Salinas González de fojas 83 vuelta, de Alicia Georgina Aguilera Pérez de fojas 84,de Carmen Silvia Rodríguez Zúñiga de fojas 84 vuelta, de María Elia López Gálvez de fojas 85, de Eliana del Carmen Burgos Llancapany de fojas 86, de Emiliano Antonio Zelada Salas de fojas 86 vuelta, de Inés Eliana Monett Hill de fojas 88, de Lidia del Tránsito Quinteros Maldonado de fojas 89, de Katiuska Enriqueta Coloma Norambuena de fojas 90, de Doris Rosa Saldamando Diaz de fojas 90 vta, de Eduardo Henry Sotomayor Campos de fojas 91 vuelta, de Bernardo Vega Dumas de fojas 92 vuelta, de Alejandro Eduardo Alvarado Briceño de fojas 93, de Sonia del Carmen Acuña Chandía de fojas 94, de David Eduardo Zarate Bernal de fojas 94 vuelta, de Fanny Florentina Acuña Pian de fojas 96, de Clara del Carmen Cortés Joo de fojas 96 vuelta, de María Eugenia Marabolí Correa de fojas 97, de Francisca Pihan Tascón de fojas 97 vuelta, de Ercilia Zúñiga Sánchez de fojas 98, de Orlando Ernesto Valdés Barrientos de fojas 98 vuelta, de Raúl Octavio Astudillo Zúñiga de fojas 99, de José Luís Bustos Morilla de fojas 99 vuelta, de Dionila del Tránsito Tapia Tapia de fojas 101, de Georgina del Tránsito Cabrera Chandia de fojas 102, de Brisalia de las Mercedes Hans Coloma de fojas 102 vuelta, de Zoila Amelia Moreno Pizarro de fojas 103, de

Raquel Rocha Gatica de fojas 103 vuelta, de Vicente Eduardo Taquias Vergara de fojas 104 vuelta, de Hernán Maximiliano Vergara Aguirre de fojas 105, de Antonio Bernabé Acuña Pihan de fojas 106, de Francisco José Barrachina Navarro de fojas 106 vuelta, de Juana Francisca Beausire Alonso de fojas 108, de Sonia Raquel Moraga Flores de fojas 108 vuelta, de Rosa del Carmen Rivera Rivera de fojas 109 vuelta, de Avelina Santibáñez Acevedo de fojas 110, de Manuela Adriana Herrera Bravo de fojas 111, de Ricardo Gustavo Suárez Martínez de fojas 111 vuelta, de Carlos Omar Villegas Jamett de fojas 112 vuelta, de Jaime Antonio Aliste Estrada de fojas 113, de Jorge Eduardo Berton Ocampo de fojas 114, de Norma Teresa Cid Figueroa de fojas 115, de Cecilia Sabina Encarnación Inostroza Castañeda de fojas 115 vuelta, de Lucila Ruth Muñoz Flores de fojas 116 vta., de Laura Eduvina Rodríguez Contreras de fojas 117, de Yenina Elena Villano Seguel de fojas 118, de Roberto Ulloa Olguín de fojas 118 vuelta, de Angel Patricio Vicente Escalante de fojas 119, de Rosa Eliana Arevallo Echeverría de fojas 120, de Hilda del Carmen Sandoval Cofre de fojas 120 vuelta, de Carlos José Ayres Moreno de fojas 121, de Clementina de las Mercedes Miranda Leiva de fojas 122, de María Luz García Ferrada de fojas 123, de Pablo René Bustos Morilla de fojas 123 vuelta, de Norma del Carmen Riquelme Riquelme de fojas 125, de Elías Acuña Pihan de fojas 127 vuelta, de Manuel Segundo Acuña Saldaña de fojas 129, de Nadia Jacqueline Araya Durand de fojas 130, de Raquel de las Mercedes Coloma Aguilera de fojas 130 vuelta, de Patricia Loreto Mayorga Marcos de fojas 131, de Alicia Gladys Ortiz Muñoz de fojas 131 vuelta, de María Salas Allende de fojas 132, de Jorge Humberto Sepúlveda Rodríguez de fojas 133, de Jorge Antonio Vasallo López de fojas 133 vuelta, de Tomás Rosamel Bascuñan Ochoa de fojas 134 vuelta, de Elías Antonio Acuña Tascón de fojas 136, de Bernardo Gabriel Bernal Ochoa de fojas 136 vuelta, de Jaime Antonio Aliste Estrada de fojas 139, de Guillermo Pérez Pinto de fojas 140, de Hugo Omar Sepúlveda Monsalve de fojas 141, de Julio César Salgado Needham de fojas 142, de Héctor Enrique Herrera Retamales de fojas 143, de Carlos Edgardo Caupolicán Lagos Reyes de fojas 147, todos asilados en la Embajada de Italia el día de la ocurrencia de los hechos, contestes en manifestar que la occisa no se encontraba al interior de la Embajada y que aquel día hubo total calma en el recinto.

39) Antecedentes fotocopiados (Hojas N°178 y 179) de las fichas incautadas en “Villa Baviera” en un proceso instruido por el señor Ministro de Fiero don Jorge Zepeda Arancibia y que permanecen en custodia en la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, consistentes en recortes periodísticos, y en cuyo margen se lee: “*El Sur 6-12-74 “Mujer de Embajada Italiana falleció por asfixia”; “La Tercera 7-11-74” con fotografía de restos de Lumi Videla; “La Tercera” 8-11-74, con el rostro de la misma persona; “La Tercera 21-12-74”, sobre proceso instruido por el Ministro en Visita Eduardo Araya; además, en la parte superior se lee: “Lumi Videla Moya. Mirista de Santiago. Trabajó en la Comisión de Educación Política del MIR, poco antes del 11-9-73. Esposa de Sergio Pérez Molina. Su profesión se desconoce (Matías 30-7-74)”* En la Hoja siguiente se lee: “*Lumi Videla Moya (3) Balance del MIR: Lumi Videla “Negra”, miembro volante del Comité Central, Encargada de Educación Política, muerta (Borrador Schlosser). Lumi Videla, miembro volante del Comité Central, Encargada de Educación Política, muerta (Versión TV 19-2-75)”*”

40) Testimonio de León Eugenio Gómez Araneda, (de fojas 235 de la causa rol N° 781-04 del 2° Juzgado Militar de Santiago) relativo a haber conocido al matrimonio de Lumi Videla y Sergio Pérez desde 1969, pues él trabajó con la madre de aquella, profesora de Estado. Fue detenido el 15 de agosto de

1974 y trasladado a “Londres 38”, a “Cuatro Álamos” y el 23 de agosto a “José Domingo Cañas”.

Al medio día del 20 ó 21 de septiembre estaba en “José Domingo Cañas” y llegó Romo, quien había salido en la mañana a “porotear” con la “Flaca Alejandra” y el “Troglo” y éste, eufórico, dijo, que habían agarrado a la mujer del “Chico Pérez”, Lumi Videla. El deponente estaba en la pieza-celda, con la vista vendada y le preguntó si era ella, llamándola por su apodo, “Negra”, y aquella le contestó. Al rato llegó el capitán Max (Francisco Ferrer Lima) quien verificó su identidad y se la llevaron a interrogatorios, uno de los mas largos que recuerda, desde las 15:00 horas hasta las 21:20 horas, mas o menos; ella volvió al lugar y se quejaba mucho porque la habían torturado en “la parrilla”. Al día siguiente, llegó otra vez, eufórico, Romo diciendo que habían agarrado al “Chico Pérez” (Sergio); sacaron a Lumi Videla diciendo que iba a ver a su marido, para que cooperara, pero ella no volvió a la misma pieza y a Pérez continuaron torturándolo. Escuchó un día a Lumi reclamar fuerte contra los agentes porque torturaban tanto al otro, decía que lo iban a matar porque sangraba mucho, se le había reventado una úlcera. Lo anteriormente relatado lo vivió personalmente. Luego reconstruyó los hechos con investigaciones, con las cuales publicó el libro “*Tras la huella de los Desaparecidos*” en que dejó constancia de lo indagado. En cuanto a Lumi Videla “*se les murió en una sesión de tortura porque gritaba mucho y le taponaron la boca entre Moren y Romo y se excedieron en el tiempo ya que la estaban “parrilleando” debido a que ella primeramente había aparentado que iba a cooperar y, en definitiva, no lo hizo, entonces, la sacaron a “parrilla” de nuevo y ocurrió esto*”.

41) Atestación de Ricardo Víctor Lawrence Mires (3550) quien con el grado de Subteniente de Carabineros fue destinado a la DINA en 1973. Cumplió funciones en “Londres 38” y en marzo de 1974 se cambiaron a “Villa Grimaldi”; allí existieron dos agrupaciones: “Brigada “Caupolicán” y “Brigada Purén”; la primera se subdividía en “Agrupaciones” que tenían como objetivo la represión del MIR. El declarante era el jefe de la llamada “Águila”. El cuartel de “José Domingo Cañas” funcionó desde 1974 a la par con “Villa Grimaldi” y “...a ese lugar se llevaba a los detenidos más importantes...” En cuanto a los detenidos que se le mencionan: “*Lumi Videla Moya fue detenida por la DINA, la trasladaron hasta “José Domingo Cañas”, en ese lugar la mataron, el día que murió Lumi Videla producto de la tortura se encontraba a cargo Miguel Krassnoff. Se rumoreaba que Willeke Floel había estado presente en la tortura en que murió Lumi Videla...*”. Añade a fojas 3557 que en “José Domingo Cañas” hubo varios jefes que rotaban; recuerda a Francisco Ferrer Lima, Marcelo Moren Brito; a Ciro Torrè lo vio en ese recinto.

42) Deposición de Osvaldo Romo Mena (fojas 215), relativa a que Lumi Videla fue detenida cerca del 18 de septiembre de 1974 en el paradero 11 de la Gran Avenida por un dato que dio Marcia Merino (“*Flaca Alejandra*”), con quien iba el deponente en una camioneta conducida por Basclay Zapata, quien, cuando Marcia le mostró a Lumi, la cual caminaba por la calle, hizo una maniobra, la otra arrancó, pero la siguieron y la aprehendieron. Fue llevada al cuartel de “José Domingo Cañas” donde permaneció varios días; fue sometida a diversas torturas. Una noche conversó con ella, quien le contó que le habían ofrecido la libertad y él le dijo que no creyera, por su posición política en el MIR. Al día siguiente, como a las 20:00 horas, “*fui al cuartel de “José Domingo Cañas” a hablar con Miguel Krassnoff, pero éste no se encontraba y al ingresar a un cuarto pequeño de madera, sobre una especie de camastro estaba tendida desnuda Lumi Videla y junto a ella los Oficiales de Ejército Cristoph Willeke Floel y Jara Seguel y el suboficial de Ejército Manuel Lucero Lobos. Este último tenía una jeringa en la mano. Lumi se encontraba inconsciente, no se movía. Yo ingresé a la habitación a preguntar por Miguel Krassnoff y me dijeron que no estaba, por lo que me fui de inmediato. Al día siguiente aparece en la prensa que una extremista que se había asilado en la Embajada de Italia había muerto al*

interior...asesinada por otros asilados...era Lumi Videla". A fojas 1647 relata detalles de la detención de integrantes del MIR, concluyendo respecto de Lumi Videla Moya (1659) que fue muerta y trasladada hasta la Embajada de Italia por los mayores Willeke y Jara del Regimiento de Tejas Verdes. A fojas 1677 se refiere a los detenciones de miembros del MIR y reconoce haber participado en la detención de Lumi Videla, junto con "Troglo", "Cara de Santo", "Negro Paz" y "Flaca Alejandra", quien fue la que la vio en la calle Llico; la entregaron a Tulio Pereira y éste a Krassnoff, quien puede haberla interrogado. Le llevaba pan todos los días porque había "pololeado" con ella y el día en que se perdió entró al cuartel buscando a Krassnoff, no lo vio y fue a buscar en las "Casas Corvi" y al abrir la puerta "veo al teniente Willeke y a Lumi, desnuda en la cama, inmóvil y el sargento Manuel Lucero Lobos en las manos tenía una jeringa; a la salida de la pieza estaba el Mayor Jara Seguel que era de Tejas Verdes. Luego se supo que habían lanzado el cuerpo al interior de la Embajada de Italia".

II) Delito de secuestro calificado en la persona de Sergio Pérez Molina.

Segundo.- Que, a fin de acreditar el delito señalado en el epígrafe, materia del numeral 2°, letra c) de la acusación de oficio de fojas 2506 y de las adhesiones a ella, en lo principal de fojas 2530, de la abogada Secretaria Ejecutiva del "Programa Continuación Ley N° 19.123" del Ministerio del Interior; en lo principal de fojas 2549, de Magdalena Garcés Fuentes e Hiram Villagra Castro, apoderados de los querellantes Laura Moya y Dago Pérez Videla y de lo principal de fojas 2574 por Carlos Urquieta Salazar por los querellantes Lautaro Videla Moya y Eduardo Pérez Molina, se han reunido en el proceso los siguientes antecedentes:

1) Querellas deducidas por Dago Pérez Videla, a fojas 300 con Laura Luz Moya Díaz, y a fojas 519, por el mismo Dago Pérez Videla, por los delitos de secuestro y otros de sus padres Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina, ratificadas por Laura Luz Moya Díaz a fojas 792 y Dago Emiliano Pérez Videla a fojas 793. Adhiere a dichos libelos Eduardo Enrique Pérez Molina a fojas 1832.

b) Declaración de Samuel Fuenzalida Devia de fojas 240 quien expone que era agente de la DINA y fue enviado a diversos centros de detención, entre ellos, el de "José Domingo Cañas" y si bien no vio a Lumi Videla, por dichos de Romo se enteró que ella y su marido Sergio Pérez habían estado detenidos en ese recinto; recuerda que incluso, en una ocasión, en "Villa Grimaldi", Marcelo Moren Brito le ordenó cavar una fosa para sepultar allí al "Chico" Pérez y Osvaldo Romo comentó "para qué cavábamos un hoyo tan grande si el "Chico Pérez" era tan "rechico"..."

3) Antecedentes proporcionados por el "Programa Continuación Ley N° 19.123" del Ministerio del Interior de 806 relativos a la detención y muerte de Sergio Pérez Molina, consistentes en:

a) Copia del Informe de la "Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación" (808-809) (cuyo extracto se detalla en el numeral 7) siguiente.

b) Copia de Informe de la Vicaría de la Solidaridad (810-812) en cuanto señala que Sergio Alfredo Pérez Molina, dirigente del MIR, fue detenido por agentes de la DINA el 22 de septiembre de 1974 en su propio domicilio, en que se encontraban el médico Humberto Eduardo Sotomayor y su esposa María Luz García Ferrada; el día anterior se había arrestado a su cónyuge Lumi Videla. Los mismos antecedentes se agregan de fojas 781 a 786.

c) Copia de declaraciones prestadas por:

I) Lilia Mireya Molina Godoy (813), madre de Sergio Pérez, a la cual le avisaron de la detención de éste unos 10 días después de ocurrida.

II) Fresia Alicia Sepúlveda Cifuentes (815) en cuanto a que por su cuñado, Luis Pincheira Llanos, supo que Sergio Pérez al llegar a su casa fue detenido por personal militar que lo esperaba.

III)Reinaldo Antonio Erick Zott Chuecas(820)relativa a haber permanecido detenido en “Villa Grimaldi” y por encontrarse enfermo, el 22 de septiembre de 1974, fue conducido a una clínica clandestina de la DINA, en calle Santa Lucía 162. Permaneció varios días vendado y encadenado de pies y manos al catre y el guardia le confidenció que en esa misma cama, en que él estaba, había muerto el ”Chico Pérez” (Sergio Alfredo Pérez Molina).

IV)Copia de declaración judicial de Gilda María Teresa Bottai Monreal(832) relativa a haber sido detenida en varias ocasiones por agentes de la DINA por haber conocido a Lumi Videla, a cuyo marido le brindaron ayuda. El 30 de septiembre de 1974 fue detenida la deponente con su marido y su cuñado por un grupo de agentes que llevaban a Lumi Videla. Los trasladaron a “José Domingo Cañas”. En otra ocasión al volver a ser detenida y llevada a ese recinto Lumi Videla se le acercó para darle explicaciones “*ya que ella había entregado a mi familia*”, ella la abrazó y no la dejó decir nada más. También se enteró que en ese recinto había estado prisionero Sergio Pérez, en pésimas condiciones físicas, no podía caminar.

4)Dichos de Luz Arce Sandoval de fojas 888 quien expresa que vio, en calidad de detenidos, a Lumi Videla y Sergio Pérez Molina en el cuartel de “José Domingo Cañas”. Se refiere a su libro, publicado en 1993, llamado “El Infierno”. *”En la página 370 explico que tuve un careo con Marcelo Moren Brito donde en un momento me señaló que Sergio Pérez Molina no murió en el cuartel “Ollagüe” (José Domingo Cañas) sino que al ser trasladado a la clínica de la DINA...Lo cierto es que....estaba en poder de la DINA desde el 21 de septiembre de 1974. Yo, por lo demás, lo vi en el cuartel “Ollagüe” puesto que el mismo Krassnoff me hizo llevar a la oficina, donde él lo interrogaba, lo que hacía con frecuencia para demostrarle a Sergio Pérez, o al interrogado que fuere, que yo me encontraba viva. Ello porque yo los conocía a ellos y ellos a mí y al verme viva, continuaban colaborando...”*

5)Declaraciones de Humberto Eduardo Sotomayor Salas, de fojas 126, quien expone que el 21 de septiembre de 1974 Lumi Videla desapareció de su hogar y al día siguiente a las 09:30 horas, ante su presencia, el cónyuge de ésta, Sergio Pérez Molina fue detenido. Reitera sus dichos a fojas 763.

6)Versión de Marieta de las Mercedes Saavedra Arellano de fojas 957 quien fue detenida en el mes de octubre de 1974 y llevada hasta “José Domingo Cañas”, recinto en que permaneció en calidad de detenida por varios días; en este lugar vio, en calidad de detenido, a Sergio Pérez Molina.

7)Informe de la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, creada el 9 de mayo de 1990 mediante publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo N°355 del Ministerio del Interior, con el objeto la “*de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, con el fin de colaborar a la reconciliación de los chilenos*”, en cuanto reseña lo siguiente: *”El 21 de Septiembre de 1974 fueron detenidos por agentes de la DINA en Santiago los cónyuges Lumi Videla Moya y Sergio Pérez Molina, ambos militantes del MIR. Numerosos testigos dieron cuenta de su permanencia en el recinto de José Domingo Cañas....Sergio Pérez desapareció desde ese mismo recinto.... La Comisión llegó a la convicción de que Sergio Pérez desapareció por acción de agentes de la DINA, en violación de los derechos humanos...”*. (Página 515, Tomo 2).

8)Declaración de Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, de fojas 218, quien manifiesta haber sido detenida el 1° de mayo de 1974 y trasladada hasta Londres N°38; el 15 de agosto de ese año fue llevada hasta “José Domingo Cañas”, lugar en que Miguel Krassnoff la torturó, obligándola a “*colaborar*”. En este recinto había piezas pequeñas y en una de ellas se encontraba el “*chico*

Pérez”, a quien vio agonizando y escuchó a los agentes de la DINA decir “*¡se nos fue cortao este huevón!*”.

9) Inspección ocular de la causa rol N° 781-04 del Segundo Juzgado Militar de Santiago instruida por detención arbitraria de Sergio Pérez Molina y otros, y de la cual se fotocopian antecedentes (conformándose los Cuadernos de Documentos, Tomos I), II) y II), relativos las declaraciones judiciales prestadas por:

a) Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, de fojas 58, relativa a que el recinto secreto de “José Domingo Cañas” comenzó a funcionar a fines de agosto de 1974 cuando se cerró el cuartel “Yucatán”, de Londres 38. Era una casa de un piso, con antejardín, con una cochera. Externamente nada denotaba que fuera lugar de detención. Calcula que había unas 30 personas, hombres y mujeres, juntos. Hacia atrás había dos piezas como cajoneras que se utilizaban como celdas de castigo, en una de ellas estuvo Sergio Pérez. La última dependencia era la oficina de Miguel Krassnoff y la pieza de torturas estaba frente a ella; había dos catres de “parrilla”. Vio a Lumi Videla y a Sergio Pérez en distintas oportunidades, después de haber sido torturados. En cuanto a la estructura orgánica, a la cabeza estaba Marcelo Moren, luego seguía como comandante del cuartel el Oficial de Carabineros Ciro Torré, que después fue reemplazado por el capitán de Ejército Francisco Ferrer Lima. Mas abajo estaban los grupos operativos “Halcón”, dirigido por Krassnoff; “Águila”, por Ricardo Lawrence; “Tucán”, por Gerardo Godoy. Luego llegó Fernando Lauriani quien en “Villa Grimaldi” se hizo cargo del grupo “Vampiro”. Cada grupo operativo contaba con sub grupos.

b) Félix Edmundo Lebrecht Díaz-Pinto, de fojas 92, relativa a haber estado detenido en “Cuatro Alamos”, después de haber permanecido en otro recinto clandestino de detención de la DINA en “José Domingo Cañas”. Añade a fojas 245 haber ocultado, entre octubre y noviembre de 1973, a Sergio Pérez en casa de su suegra, pues corría peligro por ser del Comité Central del MIR; a la casa iba continuamente Lumi Videla a visitarlo. Se fue del lugar y mas o menos en septiembre del año siguiente alguien le contó que Pérez había sido aprehendido y que el declarante tuviera cuidado, no obstante fue detenido con su cónyuge, su hija de tres años y un primo por un grupo comandado por Osvaldo Romo; los condujeron al centro de torturas de “José Domingo Cañas”, fueron sometidos a una rueda de reconocimiento estando con la vista vendada y escuchó a Lumi decir que él era un actor de teatro. Habló varias veces con ella, la cual le explicó que estaba tratando de salvarle la vida a su esposo, también detenido, que estaba gravísimo, le habían reventado una úlcera. Los demás prisioneros le contaron que Pérez estuvo allí y “*lo habían sacado*”.

c) Lautaro Videla Moya, (fojas 226 del Cuaderno de Documentos Tomo I), quien expresa ser cuñado de Sergio Pérez Molina y, por dichos de Humberto Sotomayor, supo que aquel fue detenido el 22 de septiembre de 1974 porque le habían “*montado una ratonera*” y fue trasladado a “José Domingo Cañas”, recinto de detención de la DINA. Allí lo vieron muchos testigos (Luz Arce, Marcia Merino, Rosalía Martínez, Cecilia Jarpa, María Teresa, Edmundo Lebrecht y Enrique Pérez), le contaron que fue torturado en varias formas, le reventaron los testículos, “*al pasarle una camioneta*”, aplicación de corriente, el “*pau de arara*” y otros. Añade que, en un careo con Moren, éste reconoció su estadía y contó que aquel nunca confesó el paradero de Miguel Henríquez; que tenía un problema estomacal y pulmonar y ordenó su traslado a la Clínica Santa Lucía, pero no había médico y por eso se murió. En careo de fojas 472 con Basclay Zapata expresa que a éste, a Krassnoff, Moren, Romo y a Espinoza les preguntó por Lumi Videla y por Sergio Pérez y contestaron que a aquella la habían detenido, pero “*se había asilado*” y Krassnoff le dijo que Pérez se les había muerto porque

tenía una úlcera. Además, a fojas 207(Tomo I), explica que en un careo realizado en el Tercer Juzgado del Crimen con Marcelo Moren Brito, éste reconoció que había tenido detenido a su cuñado Sergio Pérez Molina.

d) Luz Arce Sandoval, de fojas 201, en cuanto a que

en el centro de detención de “Ollagüe” (“José Domingo Cañas”) vio detenido a Sergio Pérez, estaba muy mal, se notaba que le habían aplicado corriente, ya que tenía los síntomas típicos, un hilo de sangre en la boca y botaba espuma. Escuchaba los lamentos de Sergio Pérez, quien pedía, a gritos, que lo mataran; cree que murió el 4 de octubre de 1974, porque escuchó un quejido diferente y nunca más lo volvió a ver. En ese tiempo, el jefe del lugar era el comandante del grupo “Caupolicán”, capitán de carabineros, Ciro Torrè Sáez y que después fue reemplazado por Ferrer Lima. Reitera sus dichos a fojas 320 y a fojas 327.

e) Cecilia Orieta Jarpa Zúñiga, de fojas 2286, en cuanto

haber sido detenida por la DINA el 2 de octubre de 1974 y trasladada a “José Domingo Cañas”, ella era el enlace entre Miguel Henríquez y Humberto Sotomayor; allí permaneció dos meses; la interrogaron sobre el paradero de Miguel Henríquez, torturándola en “*la parrilla*”. A fojas 2294 añade que el día en que aquel murió la trasladaron a otra sala, allí estaba Lumi Videla, la cual le contó haber sido detenida el 21 de septiembre y que al día siguiente habían detenido a Sergio Pérez, siendo muy torturado y días antes lo habían sacado de la pieza sin saber dónde lo llevaron.

f) Viviana Elena Uribe Tamblay, de fojas 224, relativa a

haber sido detenida y trasladada el 27 de noviembre de 1974 a “José Domingo Cañas” y la amenazaban con carearla con el “Chico Pérez”; la condujeron a otra pieza en que había varias personas, entre ellas, una a

la cual llamaban “*Negra*” y se trataba de Lumi Videla; concluye que Osvaldo Romo le dijo que estaba

presente cuando Lumi Videla y Sergio Pérez eran sometidos a torturas en “José Domingo Cañas”. A

fojas 334 describe los lugares de detención clandestinos en que estuvo reclusa y en cuanto a

“José Domingo Cañas” explica que le llamaban “Ollagüe”; era una casa de un piso, con garage y patio de luz, con un pasillo largo que comunicaba con las dependencias de servicio en que permanecían los prisioneros; había, además, un closet al que llamaban “*el hoyo*” en que se mantenía prisioneros; otra pieza era el lugar de los interrogatorios, con un catre metálico, “*la parrilla*”, en que eran torturados los detenidos con aplicación de corriente sobre el cuerpo desnudo, en la nariz, boca, genitales, lengua, senos; si la aplicación de corriente era mucha quedaban con los labios resecos y con espumilla y pequeñas heridas, también era común torturar a un prisionero en presencia de otro para intimidarlo.

g) Gastón Lorenzo Muñoz Briones, de fojas 228, en cuanto haber sido detenido y en octubre de 1974 fue

conducido a “José Domingo Cañas”. Conocía a Sergio

Pérez Molina y a Lumi Videla Moya por haber trabajado juntos en la Comisión Nacional de Organización del MIR. Osvaldo Romo le contó que en ese recinto estaban detenidos Sergio Pérez y Lumi Videla. Posteriormente, compartieron la “celda-pieza” y ella le contó haber sido detenida por el equipo de Romo y que Sergio estaba en el mismo recinto en mal estado, producto de las torturas. En cuanto a Sergio Pérez supo de él por Lumi Videla y los demás presos que confirmaron su paso por “José Domingo Cañas” y de su muerte, que estaba muy mal, que lo habían reventado con los golpes ya que tenía úlceras.

h) Luis Humberto Lillo Ahumada, de fojas 234, quien fue detenido el 28 de octubre de 1974 y llevado a “José Domingo Cañas” lugar en que, después de una sesión de tortura, se le acercó Lumi Videla y le contó que andaban desesperados detrás de su esposo, Sergio Pérez.

i) León Eugenio Gómez Araneda, de fojas 235, relativo a conocer al matrimonio de Lumi Videla y Sergio Pérez desde 1969, él trabajó con la madre de aquella, profesora de Estado y con Sergio estuvo en el dispositivo de seguridad del presidente Salvador

Allende, por ser miembros del GAP. Fue detenido el 15

de agosto de 1974 y trasladado a “Londres 38”, a “Cuatro Álamos” y el 23 de agosto a “José Domingo

Cañas”. Al medio día del 20 ó 21 de septiembre de 1974 llegó Romo, quien había salido en la mañana a “*porotear*” con la “Flaca Alejandra y el “Troglo” y éste dijo que habían agarrado a la mujer del “Chico Pérez”, Lumi Videla. Al día siguiente, llegó otra vez eufórico Romo diciendo que habían agarrado el “*Chico Pérez*” (Sergio), el que pasó directo a la tortura de “parrilla” porque era uno de los hombres más cercanos a Miguel Henríquez; sacaron a Lumi Videla diciendo que iba a ver a su marido, para que cooperara, pero ella no volvió a la misma pieza y a Pérez continuaron torturándolo; le consta porque escuchaba los gritos de él y de los torturadores, dentro de los cuales estaban Romo, Krassnoff, Ferrer y Zapata. Escuchó un día a Lumi reclamar fuerte contra los agentes porque torturaban tanto al otro, decía que lo iban a matar porque sangraba mucho, se le había reventado una úlcera. Lo anterior lo vivió personalmente. Luego reconstruyó con investigaciones, con las cuales publicó el libro “*Tras la huella de los Desaparecidos*” en que dejó constancia de lo indagado. Rosalía Martínez Cereceda le relató que escuchó a Pérez decirle a Moren que le entregaba “*los peones*”, no “*la reina*” (que era Miguel Henríquez). Pudo establecer que Pérez murió prácticamente reventado, le pasaron una camioneta por encima y murió en la Clínica Santa Lucía que era de la DINA.

j) Rosalía Martínez Cereceda, de fojas 239, en cuanto relata que fue detenida, como militante del MIR, el 22 ó 23 de septiembre de 1974, por agentes de la DINA y llevada a “José Domingo Cañas”; ahí escuchó los gritos de una persona que estaba siendo torturada, reconoció la voz de Sergio Pérez Molina, cónyuge de Lumi Videla, a la cual conoció en el Liceo Darío Salas. El día 22 Pérez la llamó por teléfono y le señaló “*Lumi cayó*” y que avisara a los demás para que se cambiaran de lugar. Luego recibió otra llamada de Humberto Sotomayor quien le avisó que había caído Sergio Pérez. Al día siguiente vio a Sergio Pérez quien estaba bastante mal físicamente; sufría de úlceras, pedía que lo ayudaran y le decían que lo podían ayudar siempre que diera el nombre del “*enlace*” de Miguel Henríquez. El 27 ó 28 se dio cuenta por los gritos de los guardias que Sergio Pérez se moría; lo sacaron del lugar y no supo más de él. Reitera sus dichos en declaración fotocopiada de fojas 1952 a 1964, agregando que el 24 ó 25 de septiembre los jefes del recinto convocaron a una reunión en que participaron su marido Julio Laks, Lumi Videla, Sergio Pérez y dos agentes de la DINA y al que llamaban “Abuelo” o “Mayor”; se tenía la percepción que se estaba cerca de detener a Humberto Sotomayor, uno de los jefes del MIR y con la certidumbre de haber asestado un golpe inmenso al Movimiento con la aprehensión de Sergio Pérez, el cual mostraba un estado físico calamitoso, producto de las torturas recibidas. Los jefes señalaron a los presentes que “*su deber*” era salvar la vida del “*Chico Pérez*” quien “*se moría*” y a cambio de la información del nombre del enlace de Humberto Sotomayor prometían dispensarle la debida atención médica y salvarlo de la muerte.

k) Humberto Eduardo Sotomayor Salas, de fojas 281, similar a la extractada en el numeral 13 del considerando primero del fallo.

- l)María del Carmen Castillo Echeverría, de fojas 365 (Cuaderno de documentos, Tomo II), relativa a haber sido detenida el 5 de octubre de 1974, en un enfrentamiento en calle Santa Fe, donde residía con Miguel Henríquez, jefe máximo del MIR y por ello conocía a Sergio Pérez, miembro de la Comisión Política del MIR y a Lumi Videla, miembro del Comité Central, quienes fueron detenidos entre el 21 y el 22 de septiembre de 1974. En el enfrentamiento murió Miguel y ella quedó herida con esquirlas de una granada. Ella preguntó por el “Chico Pérez” y Espinoza respondió que murió por una negligencia ya que habían llegado tarde al Hospital y agregó *“se nos fue”*. La condujeron al Hospital Militar para operarla; al día siguiente llegaron a verla Moren y Romo, ella les dijo que habían muerto a Pérez y *“Moren se pone furioso y protesta contra los jefes “que están hablando”*
- 10) Dichos de Samuel Enrique Fuenzalida Devia (385) en cuanto haberse desempeñado como guardia de la DINA en “Villa Grimaldi” y Marcelo Moren les ordenó hacer un hoyo para enterrar una persona; comenzó a cavar, con Yáñez y Venegas, en un sector, de las alamedas y rosales; sabían que estaba destinado al cadáver del prisionero Sergio Pérez porque mientras trabajaban se habían acercado los del grupo “Halcón”, “Troglo”, Osvaldo Romo, Tulio Pereira, Yévenes, “Negro Paz”, Osvaldo Pulgar, “Cara de Santo” y riéndose dijeron que *“no hiciéramos el hoyo tan grande porque el “chico Pérez” no eran tan grande”*. Ahí supieron a quien estaba destinada la excavación, ya sabían que Pérez había sido detenido por el grupo “Halcón”. Romo exhibió un reloj pulsera, marca “Seiko”, modelo 5, color metal, que llevaba puesto, diciendo que era del “Chico Pérez”; sabía que estaba detenido en “Ollagüe” (“José Domingo Cañas”). En definitiva, el hoyo no fue utilizado. Piensa que a esa fecha Pérez aún estaba vivo y si lo enterraron en Rinconada de Maipú fue tres días después.
- 11)Testimonio de Amanda Liliana de Negri Quintana, de fojas 731, (Cuaderno de Documentos, Tomo 3) relativa a que sabe que a Sergio Pérez lo detuvo el grupo de Romo, Zapata y otros y se lo contó la misma Lumi Videla. Aquel fue muy torturado y lo llevaron al Hospital.
- 12)Parte N°34 del Departamento V de Investigaciones, enrolado de fojas 254 a 299, (Cuaderno de Documentos, Tomo I) en cuanto contiene declaraciones de Luz Moya Díaz (270), Cecilia Orieta Jarpa Zúñiga(276), Humberto Eduardo Sotomayor (281), León Eugenio Gómez Araneda(284), Viviana Elena Uribe Tamblay(287), Gastón Lorenzo Muñoz Briones(288), Luis Humberto Lillo Ahumada(291), Edwin Patricio Bustos Streeter (293), Félix Edmundo Lebrecht Díaz-Pinto(295), similares a los antes extractados; se concluye (265) que Sergio Pérez Molina fue detenido el 22 de septiembre de 1974, alrededor de las 09,00 horas por agentes de la DINA(del grupo “Halcón” de Romo, Krassnoff, “Cara de Santo” y “Negro Paz”), quienes lo esperaban en su domicilio, en una operación denominada *“ratonera”*.
- 13)Oficios del Servicio de Registro Civil e Identificación de fojas 797 y 804(Tomo II) que informan que revisada la base de datos no fue posible ubicar la defunción de Sergio Alfredo Pérez Molina.
- 14)Extracto de filiación y antecedentes de Sergio Alfredo Pérez Molina, de fojas 802, sin anotaciones.
- 15)Oficio N°19.616 del Departamento Control Fronteras de Investigaciones, de fojas 841, informando que Sergio Alfredo Pérez Molina no registra anotaciones de viajes a contar del 22 de Septiembre de 1974 a Diciembre de 2.004.
- 16)Informe N° 333 del Departamento V de la Policía de Investigaciones, de fojas 934, en que se establece la dependencia orgánica de la DINA.

17)Antecedentes fotocopiados (Hojas N° 121,122 y 123) de las fichas incautadas en “Villa Baviera” en un proceso instruido por el señor Ministro de Fiero don Jorge Zepeda Arancibia y que permanecen en custodia en la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, consistentes en recortes periodísticos; en el margen de la Hoja se lee:”Sergio Pérez Molina. La Tercera 6-12-74: Guerra interna en MIR. Se matan unos a otros”.Al costado se aprecia una fotografía con su rostro y se explica que se trata “de un peligroso extremista y autor de asaltos a bancos”. En la parte superior junto a otra fotografía se lee:”Sergio Pérez Molina. Mirista de Santiago. Trabaja en tareas militares dentro del MIR. Pertenece al Comité Central del MIR. Debe ser estudiante. Hasta el 11-9-73 vivía en Santiago, entre Carmen y Lira, de 10 de Julio hacia Copiapó(Manuel A.)Tocornal al llegar a la esquinita. (Matías 30-7-74) Alias “El Chico” Talla 165 cms. (CdZ 13-8-74) Chico Pérez, Sergio Pérez pertenece al Comité Central del MIR, trabaja en cuestiones militares(Matías 6-9-94)....Sergio Pérez Molina está desaparecido desde hace meses(La Tercera 6-11-74) Lumi Videla es esposa de Sergio Pérez Molina (Matías 30-7-74)”. En la hoja siguiente se lee: ”Balance del MIR: Sergio Pérez, nuevo miembro de la Comisión Política, muerto (Borrador Schlosser). Sergio Pérez, nuevo miembro de la Comisión Política, muerto(Versión TV 19-2-75).Hace pocos días el S.R. ha informado a los jefes de GPM de la caída del compañero Sergio Pérez, miembro de la C.P. y cuadro de un valor político, militar y moral como los hay pocos. En su comunicado, el S. R. señala que la causa fundamental de la caída, estuvo en errores cometidos por el mismo compañero; Omar, en carta a miembros del SR detalla un poco más, diciendo que CHICOTE fue a casa casi con seguridad allanada, sin las medidas adecuadas...Se reconoce explícitamente además, que caída de CHICOTE ocasiona graves problemas en nuestra conexión con CR de provincia...”.- En seguida existen dos párrafos escritos en idioma alemán. Una tercera Hoja señala:”Sergio Pérez Molina(5)Lista Solidaridad I: Sergio Pérez Molina. Lista Solidaridad V: Sergio Pérez Molina. Carnet: Sin información. 21-9-74 en Santiago. Lista Solidaridad IV a: Sergio Pérez Molina 31 años 21-9-94 Sergio Pérez Molina detenido el 21-9-74 por la DINA(Análisis 20-5-86).”

18) Acta de Inspección personal del tribunal al episodio denominado “Antonio Llidó Mengual” de que conoce el Ministro de fiero señor Jorge Zepeda Arancibia en cuanto, a fojas 404, rola documento de la Inspectoría General de Investigaciones informando que los Jefes del Centro de reclusión denominado “José Domingo Cañas” u “Ollagüe” durante los meses de septiembre y octubre de 1974 fueron Ciro Torrè Sáez y luego Francisco Maximiliano Ferrer Lima. El documento se fotocopia a fojas 2039.En otro oficio del Ministerio de Defensa Nacional N°1139, fotocopiado a fojas 2041,se informa que la Policía de Investigaciones tiene antecedentes de que el comandante del Cuartel “Ollague” en septiembre de 1974 había sido el capitán de Carabineros Ciro Torrè Sáez, cargo que habría desempeñado hasta la llegada de Francisco Ferrer Lima, a principios de octubre de 1974.

19) Deposición de Osvaldo Romo Mena(fojas 38 del “Cuaderno reservado con testimonio de Luis Muñoz y otro”), quien expresa no haber tenido ninguna participación en la detención de Sergio Pérez, la que fue ordenada por Krassnoff, jefe de “Halcón”. En el cuartel “Ollagüe” (“José Domingo Cañas”) aquel fue interrogado por Krassnoff, quien dirigía la diligencia, por el”Cara de Santo” (Fuentes) y por el “Negro Paz”, que era el volante de los dos grupos “Halcón”; ”yo me limité a cuadrarlo políticamente y hablé con él para que se evitara una zorra”.Aquel dio detalles de la casa de Miguel Henríquez. Permaneció dos días en "Ollagüe" en manos de la DINA. Después el otro quiso entregar al deponente información sobre el lugar en que se encontraba gran cantidad de armamento y fueron allí con Zapata.”Cuando el chico entregó eso yo sentí que como que se quebró, se notaba mal... y nos pidió que lo lleváramos al

hospital". Añade que Zapata decidió llevarlo al hospital de la DINA de Rinconada de Maipú, dieron cuenta a Krassnoff; allí lo entregaron a dos funcionarios, no lo volvió a ver, cree que murió en ese lugar. Era muy terco "y es posible que algunos de los de "Halcón" le haya dado duro...golpes o corriente..." Añade, a fojas 364, efectivamente "yo usé un tiempo el reloj del chico Pérez y esto ocurrió así: ocurre que el reloj mío tenía mala la correa de cuero. En esos días se produjo la detención de Sergio Pérez y cuando recién estaba preso en el cuartel yo lo vi, conversamos y entonces Krassnoff me pasó el reloj diciéndome que yo lo usara; yo lo asocié al tiro con el del chico Pérez. Yo empecé a usarlo enseguida y de ahí(estábamos en Ollagüe) fui a ver a la Lumi Videla, le mostré la mano y ella lo reconoció, diciéndome que era de Sergio Pérez". Añade que más adelante lo devolvió pero Krassnoff le ordenó dárselo a Basclay Zapata. "...En todo caso "el chico Pérez" no fue enterrado en "Terranova".....quedó en Rinconada de Maipú y de ahí no supe cual fue su destino final...si yo llegaba a preguntarlo, al día siguiente yo iba a aparecer muerto; la contra inteligencia era muy fuerte y peligrosa..." A fojas 1636 agrega que fue asignado al grupo "Halcón" dirigido por el teniente Krassnoff. Nunca detuvo a nadie, se limitaba a llevar al "equipo" hasta la casa donde se encontraban personas que había que detener. Él confirmaba si el detenido era quien se estaba ubicando y lo interrogaba, preguntándole el paradero de otras personas. Recuerda haber dado la pauta para que se interrogara a Sergio Pérez Molina en septiembre de 1974, el cual estaba detenido en el cuartel de "José Domingo Cañas", era el esposo de Lumi Videla y estaba "encargado del depósito de armamentos del MIR", a nivel nacional y era miembro de la comisión política; había caído en una "ratonera". Después de haber sido interrogado por los "Papis" (cuatro policías de Investigaciones) tenía signos de estar deshidratado, pues le habían aplicado la corriente, pidió hablar con él y lo llevó a un taller mecánico en que había gran cantidad de armamento. En un momento Basclay Zapata le permitió tomar agua y le dieron convulsiones, llamó a Moren, quien le dijo que lo llevaran al hospital existente en Rinconada de Maipú, lo trasladaron y ahí lo dejaron; no tuvo mas noticias de él hasta que su hijo denunció su muerte. A fojas 1677 añade que Sergio Pérez Molina fue detenido el 22 de septiembre de 1973 en su domicilio y conducido a "José Domingo Cañas" y que "lo detuvo el grupo "Halcón 1" en una "ratonera" en la casa de la Lumi; cuando yo llegué al cuartel de José Domingo Cañas, cuyo jefe era Ciro Torré Sáez, veo conversando a Krassnoff con el "Chico Pérez" y me dice "Mira quien está aquí", era un hombre clave, fue quien me llevó a Cuba".

Tercero.- Que, con el mérito de las probanzas reseñadas en los considerandos anteriores, constitutivas de testimonios, pericias, documentos y presunciones judiciales, apreciadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 459, 473, 474 y 488 del Código de Procedimiento Penal, se encuentran, legal y fehacientemente acreditados en el proceso, los siguientes hechos:

a) El centro de detención clandestino de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) llamado "José Domingo Cañas" o "Cuartel Ollagüe", ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367 de la comuna de Ñuñoa, estaba conformado por una casa, de un piso, con jardín en la entrada y rodeada de una reja; en el costado derecho había un garaje, en que eran recibidas las personas detenidas; en el interior había un patio, por el cual era posible comunicarse con un edificio contiguo de tres pisos. Fue empleado como recinto secreto de detención y de torturas, aproximadamente entre Agosto y Noviembre de 1974 y fue un local de transición, usado desde el fin del funcionamiento del recinto de "Londres N°38" y hasta comienzos de la instalación del de "Villa Grimaldi". En "José Domingo Cañas" se mantuvo una gran cantidad de detenidos, a quienes se interrogaba y torturaba; durante su permanencia en el lugar los detenidos estaban

permanentemente vendados en sus ojos, amarrados o encadenados, privados de alimentos, de agua y de sueño. Se les mantenía en una pieza común, relativamente amplia, y un lugar llamado “*el hoyo*”, al parecer se trataba de una despensa, sin ventanas ni ventilación, de aproximadamente 1 x 2 metros, donde se llegó a tener, simultáneamente, hasta más de diez detenidos en condiciones de extremo hacinamiento. El tiempo de permanencia en este lugar era variable, de días, semanas o meses. Entre las torturas que se mencionan por los detenidos que estuvieron en este recinto se encuentran golpes de puños y pies en todo el cuerpo, así como con laques o “*tontos de goma*” y culatazos, descargas eléctricas en la “*parrilla*”, vejaciones sexuales, simulacros de fusilamientos, el submarino “*húmedo*” y “*seco*”, quemaduras, eran obligados a presenciar las torturas de otros detenidos, introducción de objetos por el ano, colgamientos y torturas psicológicas.

b) El 22 de septiembre de 1974, al llegar a su domicilio ubicado en calle Tocornal, Sergio Pérez Molina, cónyuge de Lumi Videla, estudiante de pedagogía y dirigente del MIR, fue detenido por agentes de la DINA, quienes lo estaban esperando (en una “*ratonera*”, en la terminología de los aprehensores); fue trasladado hasta el centro de detención de “José Domingo Cañas”; y, según testigos, aquellos, para obtener información sobre el paradero de Miguel Henríquez, se ensañaron en la aplicación de torturas, con electricidad y hasta con el paso de una camioneta por sobre su cuerpo; sus testículos fueron triturados; el 26 ó 27 de septiembre, atendido el estado agónico en que se encontraba, fue sacado desde ese recinto, desapareciendo, sin que a la fecha se haya vuelto a tener noticia alguna de su paradero, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco su defunción. Se enmarcan estos hechos dentro de un patrón similar a los ocurridos durante aquella época que se iniciaba mediante el seguimiento y vigilancia de la víctima hasta terminar en un secuestro violento.

c) El día sábado 21 de septiembre de 1974 en el sector de Gran Avenida, Lumi Videla Moya, con cargo directivo en el Comité Central del MIR, se encontraba esperando locomoción colectiva cuando fue reconocida por la colaboradora de la DINA Marcia Merino Vega y detenida por una patrulla de agentes de la DINA, comandada por Osvaldo Romo; fue trasladada hasta el centro clandestino de detención de la DINA de “José Domingo Cañas”, allí fue vista por numerosos testigos; al día siguiente, llegó aprehendido su cónyuge Sergio Pérez Molina. El día 03 de Noviembre de 1974 en horas de la noche, tras una confusa situación, Lumi Videla fue conducida a la sala de torturas, se le aplicó nuevamente todo tipo de tormentos, a raíz de los cuales murió. En la madrugada del 04 de Noviembre de 1974, el cadáver de Lumi Videla, con evidentes huellas de castigo físico, fue arrojado al antejardín del edificio que ocupaba la Embajada de Italia en Chile en calle Miguel Claro N° 1359, comuna de Providencia; la DINA trató de encubrir el crimen simulando un homicidio “*entre marxistas*”. Según el informe de autopsia la causa de la muerte fue un estado asfíctico y, como mecanismo posible provocador, una sofocación por obstrucción de la boca y nariz, lo que guarda armonía y concordancia con el relato de los testigos que refieren como uno de los métodos de tortura el llamado “*submarino seco*”, consistente en la introducción de la cabeza de la víctima en una especie de funda, impidiéndole respirar.

Cuarto.-Que, estos hechos son constitutivos de los siguientes delitos:

1) De secuestro calificado que contempla el artículo 141 incisos 1° y 3° del Código Penal y se califica por el tiempo en que se prolongó la acción, o sea, más de 90 días y por las consecuencias de la misma, resultando un grave daño en la persona o intereses del ofendido; situación que ocurre en autos, pues aun se desconoce el paradero de Sergio Pérez Molina, al encontrarse establecido en la causa que éste fue retenido contra su voluntad a partir del 22 de

septiembre de 1974, privándole de su libertad de desplazamiento, prolongándose esta situación hasta el día de hoy al ignorarse su paradero.

II)De homicidio calificado, contemplado en el artículo 391 N°1 del Código Penal, cometido el 3 de noviembre de 1974, en la persona de Lumi Videla Moya.

Quinto.-Que, para resolver de esta manera, respecto del delito de homicidio de Lumi Videla Moya, debe considerarse, en primer término, la calificante de la primera de las circunstancias que enumera el artículo 391 N°1 del Código Penal y cuyo concepto, según se ha dicho, debe extraerse del artículo 12 N°1 del referido Estatuto:”*Cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra a traición o sobre seguro*”. Sabido es que el núcleo esencial de la alevosía estriba, según un criterio objetivo, no en la cobardía del hechor sino en la

indefensión de la víctima y, acorde con un criterio objetivo, el énfasis debe considerarse en el reproche moral (vileza, cobardía) y en criterios criminológicos (mayor peligrosidad).

En el caso en estudio, procede resaltar, en primer lugar, que la víctima no tenía posibilidad alguna de repeler la agresión de los agentes de la DINA, quienes obraron sobre seguro, procurando evitar todo riesgo tanto para lograr sus propósitos como respecto a la incolumidad de sus personas y su posterior impunidad. (Alfredo Etcheberry. “Derecho Penal”. Tomo tercero.2ª. Edición. página 41).

En efecto, consta del proceso que Lumi Videla desde que fue detenida, a contar del día 21 de septiembre de 1974 era diariamente sometida a torturas, lo que queda, fehacientemente demostrado con el texto de los informes médicos legales evacuados a su respecto:

a) Según el preinforme de autopsia (fojas 403):

“3.- Hasta el momento, podemos afirmar con cierta seguridad que existen lesiones de tipo traumatológico que demuestran mal trato previo al deceso...Son incompatibles con la caída o proyección en el estado de rigidez cadavérica...Existe una lesión costal tipo fractura de más de 4 semanas de evolución en consolidación...”

b) Ampliación de Informe de exhumación (fojas 426) que concluye: *3)Existen temporalmente tres grupos de fracturas: a)Fracturas costales...entre 4 a 6 semanas de evolución antes del deceso que no podrían ser fruto de la caída del muro en cuestión”.*

c)El Informe de autopsia (fojas 393) constata, en concordancia con los anteriores, infiltraciones sanguíneas en la región escapular, en la columna vertebral cervical, en la columna vertebral dorsal, en los músculos dorsales y de los canales vertebrales, en las costillas 4.a, 5.a, 6.a y 7.a del lado izquierdo y se concluye *“La causa de la muerte es el estado asfíctico...se evidencia por la congestión y cianosis generalizada, las petequias de las serosas y las hemorragias de las parénquimas...El mecanismo posible...podría corresponder a una sofocación por obstrucción de la boca y narices, estando el cuerpo en decúbito ventral”.*

Tales agresiones físicas se prolongaron hasta la sesión que le costó la vida, acaecida el día 3 de octubre del mismo año, por motivos no aclarados, ya que según la apreciación de algunos de los restantes detenidos del recinto de “José Domingo Cañas”, correspondieron a un intento de suicidio de Marcia Merino (Cecilia Jarpa, letra f) del N°9 del Considerado segundo), supuestamente influenciada por Lumi Videla o, según otros, (Lebretch: N°7 del considerando primero y Fuenzalida N° 8° del mismo apartado) a un desquite por haberse producido un enfrentamiento entre agentes de la DINA y algunos militantes del MIR y para sancionar a alguien por la muerte de algunos de los primeros, o por las lesiones causadas a Gerardo Urrich; ello habría motivado torturar a la detenida, quien aparecía con mayor rango de importancia en la dirigencia del MIR, por ser miembro del Comité Central, produciéndose el atentado mediante sofocación; luego, para desvirtuar la participación de los miembros de la DINA se optó por un método insólito, se arrojó su cuerpo por sobre la muralla de una Embajada extranjera y se dio a la prensa la noticia que aquella había muerto a consecuencias de “una orgía” producida entre los numerosos chilenos asilados en dicha sede diplomática.

Sexto.-Que, por otra parte, procede considerar el especial rango que revistió este delito de homicidio en el contexto de la normativa nacional e internacional.

En efecto, debe ponderarse el carácter complejo del crimen que se analiza, que comienza con el secuestro de una persona, sin orden administrativa ni judicial que lo justifique y su relación con la situación descrita en los hechos referidos en la motivación quinta precedente, de lo que resulta que dicho delito es de naturaleza especial, que lo diferencia de un delito común, de modo que, en la terminología del Derecho Penal Internacional, debe considerarse como “*un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos fundamentales*”, como la vida, a una parte de la población civil, con determinada opción ideológica, con la participación del Poder político, por la intervención de agentes del Estado, destinados, “*en comisión de servicios*”, a la Dirección de Inteligencia Nacional y concluirse, por ende, que estamos en presencia de “**un delito de lesa humanidad**”.

Sabido es que el desarrollo del concepto de “*Crimen de lesa Humanidad*” se produjo en los inicios del siglo XX. Se cita el preámbulo del “Convenio de la Haya” (18 de octubre de 1907) sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre (Convenio N°IV), por el cual las potencias contratantes establecieron que “*las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública*”.

Fue al término de la Segunda Guerra Mundial que los gobiernos de Estados Unidos, del Reino Unido, de la República Francesa y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dieron origen a una serie de tribunales militares para enjuiciar a los miembros del Eje por los crímenes cometidos durante esa guerra y acordaron los Principios de tales tribunales al firmar el denominado “Acuerdo de Londres” (8 de agosto de 1945). El Estatuto del Tribunal Militar Internacional (“Estatuto de Nüremberg”) se añadió como Anexo al “Acuerdo de Londres”, mediante el cual se establecieron los tribunales y se dispuso que los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad constituirían delitos sometidos a la jurisdicción del tribunal. Así fue como el asesinato como “*crimen de lesa humanidad*” se codificó, por primera vez, y fue definido en su artículo 6 c, “*el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o*

religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron”. Además, agregaba: “Los líderes, organizadores, instigadores y cómplices que hubieren participado en la formulación o ejecución de un plan común o conspiración para cometer cualesquiera de los crímenes precedentes, son responsables de todos los actos llevados a cabo por cualesquiera personas en ejecución de tal plan”.

De igual forma fue codificado en el artículo 5 c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional (“Estatuto de Tokio”) del 19 de enero de 1946. Y, por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 95 (11 de diciembre de 1946) que *“confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del tribunal de Nüremberg y las sentencias de dicho tribunal”*. Posteriormente, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, adoptado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1993) ratificó la universalidad de la prohibición de los crímenes contra la humanidad bajo el derecho internacional.

En consecuencia, estas normas han pasado a constituir tanto derecho consuetudinario como principios generales de derecho, sin perjuicio de su consagración convencional en los diversos Tratados codificadores de esas normas.

De la prohibición en términos absolutos de estas conductas derivan varias consecuencias: se trata de *normas imperativas o jus cogens*, y *obligaciones erga omnes*. Sabemos que la noción de *jus cogens* (del latín “derecho coercitivo”) *se refiere a aquellas normas imperativas o perentorias del derecho internacional general, que son de naturaleza obligatoria y vinculantes. Tradicionalmente relacionado con la noción de orden público internacional, el concepto de jus cogens significa que existen normas tan fundamentales para la comunidad Internacional que los Estados no pueden derogarlas. La consagración positiva del concepto de jus cogens fue cristalizada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969, cuyo artículo 53 dispone: “una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”*.

Finalmente, conviene recordar el alcance de los Convenios de Ginebra de 1949, aplicables a situaciones de conflictos armados. El artículo 3° establece: *“En caso de conflicto armado sin carácter internacional...cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:*

*I. Las personas que no participan directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, heridas, cautiverio o por cualquiera otra causa, deben en toda circunstancia, ser **tratadas con humanidad**”,*

Además, como se ha escrito,” *el Estado de Chile se impuso, al suscribir y ratificar los citados Convenios, la obligación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, especialmente si fueren detenidas, quedando vedadas las medidas tendientes a amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus autores, teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe...*”(Considerando 35° de sentencia de 17 de noviembre de 2004, casación en el caso del delito de secuestro de Miguel Sandoval Rodríguez, del rol N° 517-2004, de La Excma. Corte Suprema).

En consecuencia, debe entenderse por “*Crimen de lesa humanidad*” cualquiera de los actos mencionados, como el asesinato, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, como lo señala el artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Así lo ha precisado la doctrina: “*La comisión de los distintos ataques contra bienes jurídicos personalísimos fundamentales en el marco de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación o tolerancia del poder político de iure o de facto distingue dichas conductas de los delitos comunes al suponer el contexto en el que se realizan un aumento del injusto consistente en un mayor desvalor de la acción, por aumentar notablemente su peligrosidad, ya que por una parte el autor cuenta con medios de los que no dispone el autor de un delito común y por otra, se garantiza en cierta manera su impunidad y el éxito de su conducta criminal*”(Alicia Gil Gil.”Los crímenes contra la Humanidad y el Genocidio en el Estatuto de la Corte Penal Internacional”.”La Revista de Derecho. ”Universidad Central. Año X, N°6, páginas 129 y siguientes).

Además, así lo ha expuesto la jurisprudencia reiterada de nuestros Tribunales en los últimos años:

I)”*Por otra parte, bajo el amparo del tratado marco de la carta de las Naciones Unidas...nuestro país se ha obligado por tratados internacionales, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones o resoluciones que reprueban, rechazan y acuerdan reprimir los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y **crímenes de lesa humanidad**, definidos por el estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg de 8 de agosto de 1945; declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946 y 11 de diciembre del mismo año, tomando por base las infracciones graves enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de los crímenes de guerra. Nuestro país concurre, el 21 de noviembre de 1947, a la conformación de la Comisión de Derecho Internacional, órgano subsidiario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que le correspondería la formulación de principios y la proposición de normas en materia de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, la cual en 1950 señaló que constituyen principios de Derecho Internacional, reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg, la persecución y castigo de los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, señalando específicamente en el numeral sexto de los principios, que son punibles como crímenes ante el derecho Internacional...c)**Crímenes contra la humanidad**” (Considerando 9° de la sentencia de tres de octubre de dos mil seis de la Excma. Corte Suprema, que confirma el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el desafuero de Augusto Pinochet Ugarte, Rol N°2707-2006)).*

II) “*11°.-Que, por otra parte, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos – artículos 4° y 5° - como El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas – artículos 7° al 10° - ratificado por Chile e incorporados a su derecho interno, prohíben en la práctica, “**los crímenes contra la Humanidad**”.Además, ya en 1968, fue suscrita en el marco de las Naciones Unidas, la Convención que establece la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad*”.

“*12°.-Que, en 1989, se agregó el siguiente inciso segundo al artículo 5° de la Constitución Política de la República: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado*

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”.

“El artículo 5° le otorga así rango constitucional a los tratados que garantizan el respeto a los derechos humanos, concediéndoles una jerarquía mayor que a los demás tratados internacionales, en cuanto regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”(Rol N°1122-2006 de la Corte de Apelaciones de Santiago, Voto del Abogado Integrante señor Hugo Llanos Mansilla).

Por otra parte, en recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso “Almonacid Arellano contra el Estado de Chile”, (recordado por los apoderados Magdalena Garcés e Hiran Villagra, por los querellantes, a fojas 2559), se ha expresado: “94. *El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907(Convenio Núm.4) las potencias contratantes establecieron que “las poblaciones y beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los Principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública”.* 95. *El asesinato como crimen de lesa humanidad, fue codificado por primera vez en el artículo 6° c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg en cuanto se encargó de definir, para los efectos de fijar la jurisdicción del Tribunal, los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, entre los cuales se incluye “todo acto inhumano cometido contra las poblaciones civiles”.*

Por lo tanto, procede concluir que constituyó un crimen de lesa humanidad el ilícito perpetrado en la persona de Lumi Videla Moya, luego de ser secuestrada el 21 de septiembre de 1974, y durante su cautiverio, tortura y muerte, el 3 de noviembre de 1974, lanzándose su cadáver al interior de la Embajada de Italia en Santiago el 4 del ese mismo mes y año, con las consecuencias que se han analizado anteriormente.

Declaraciones indagatorias de los acusados.

Séptimo.-Que, al declarar indagatoriamente **Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda**, a fojas 1452,(20 de abril de 1998) expresa haber sido Director Ejecutivo de la DINA desde agosto de 1974 hasta el 12 de agosto de 1977.La DINA cumplía dos misiones, una está en el artículo 1° que es generar “*inteligencia*” y la segunda, en el artículo 10°, que señala la facultad de actuar en conformidad al “Estado de Sitio” en detenciones y allanamientos. Había unidades de búsqueda de información, para la primera misión y unidades con facultades de Estado de Sitio, para la segunda, y eran dirigidas por los Comandantes de las Unidades. “Villa Grimaldi”era un cuartel de la DINA. No se mantenía detenidos.”José Domingo Cañas”era un cuartel de solteros de la DINA.”Londres 38” al principio fue cuartel. Los cuarteles de la DINA eran para mantener “*detenidos en tránsito*”, eran fichados e interrogados y se determinaba su destino para ponerlos a disposición de la Justicia por ser delincuentes comunes o mantenerlos detenidos en campamento de detenidos en virtud de un decreto del Ministerio del Interior. Si se detenían por Estado de Sitio no se les podía mantener más de 5 días y se les informaba a los familiares en formularios impresos en que se les comunicaba el cuartel y de la dirección donde estaban detenidos, por ejemplo, “Villa Grimaldi”, ubicada en Avenida José Arrieta 8200. No recuerda quienes eran los comandantes que actuaban en las detenciones. Dentro de los 5 días se dejaba en libertad al detenido, se le ponía a disposición de la Justicia si había cometido un delito común o a disposición del Ministro del Interior para que dictara un decreto exento para ser trasladado a los

campamentos de detenidos, como “Tres Álamos”, “Cuatro Álamos”. “Ritoque” y otros. A “Villa Grimaldi” acudió en 2 ocasiones, una con el Ministro de Justicia y otra con el Presidente de la Corte Suprema. El cuartel de “José Domingo Cañas” nunca lo visitó. No fue un cuartel para mantener detenidos en forma transitoria ya que era “*una casita chica*”. Repite sus dichos a fojas 1461(20 de abril de 2002). Preguntado sobre personas detenidas, a fojas 1471, (17 de octubre de 2000) expresa que, “*por la prensa*”, tomó conocimiento de la muerte de Lumi Videla Moya, cuyo cadáver apareció en el interior de la Embajada de Italia, pero la DINA no tuvo participación alguna en el hecho. Reitera a fojas 1477(15 de septiembre de 2004) no tener antecedentes de Lumi Videla y que “José Domingo Cañas” les fue entregado por el Ministerio del Interior el 16 de diciembre de 1974, por Decreto N°2108; respecto de Sergio Pérez Molina no tiene antecedentes y se remite a lo dicho anteriormente. Sin embargo, en declaración fotocopiada a fojas 3586 (21 de julio de 2006) dice ratificar totalmente el sentido y el contenido del documento denominado “*Introducción a la entrega de documentos que demuestran las verdaderas responsabilidades de las Instituciones de Defensa Nacional en la lucha contra el terrorismo en Chile*”, de 11 de mayo de 2005, enrolado de fojas 3608 a 3638 y en cuyo párrafo denominado “*personas desaparecidas con indicación de su destino final*”, en la foja 3625, se lee: “*Pérez Molina, Sergio...Unidad DINA...Jefes Nacionales MIR... Grecia con Salvador 21.IX.74... Muerte en combate...Cuesta Barriga...Desenterrado Enero de 1979 por CN... Al Mar frente a Los Molles*”.

Por otra parte, al informar a la Corte de Apelaciones de Santiago, en recurso de amparo interpuesto a favor de Lumi Videla Moya señala, por Oficio N°3550/ 325 de 12 de febrero de 1975: “*...previamente a su muerte fue intensamente buscada por personal a mi servicio. Mirista profesional. Integrante del Comité Central del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Amiga personal de Miguel Henríquez, convivía con Sergio Pérez Molina, miembro del MIR, que participó en el asalto al Banco Londres. Personas capturadas después de la muerte de Miguel Henríquez manifestaron que es casi seguro que Lumi Videla Moya se hubiese asilado en la Embajada de Italia...*”

Octavo.-Que, no obstante la negativa del acusado **Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda**, en reconocer su participación, en calidad de autor, en los delitos de secuestro calificado de Sergio Pérez Molina y de homicidio calificado perpetrado en la persona de Lumi Videla Moya, bastan para estimar legalmente acreditada su intervención en ambos ilícitos los siguientes antecedentes:

1)Para calificar adecuada y jurídicamente la participación del acusado Contreras en los ilícitos que se le atribuyen, atendidas las particulares características de los mismos, resulta conveniente considerar el contexto histórico en que acaecieron los hechos, junto a las características, sin precedentes, del organismo de seguridad, denominado “*Dirección de Inteligencia Nacional*”, del cual era su Director Ejecutivo.

Queda enunciado dicho referente, en el Informe preparado por el “Programa de Continuación de la Ley N° 19.123 del Ministerio del Interior” (Of. Reservado N° 243/99) depositario de los archivos de la ex “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación” y de la ex “Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación”, en cuanto expresa que parte de la información de que dispone se ha obtenido del examen de numerosos expedientes judiciales, fuentes de público conocimiento, declaraciones de testigos, de detenidos y de agentes, los cuales, coinciden y, precisamente, se corroboran con las probanzas reunidas en el presente proceso:

“Llamamos grupo DINA al de Mayores y Coroneles de Ejército que empezó a actuar en la Escuela Militar desde el mismo 11 de septiembre de 1973...y que luego se prolongó en la “Comisión DINA” y ésta en la DINA propiamente tal....Este grupo demostró una gran cohesión y audacia, desde un primer momento...mostró la habilidad...de limitar y, al mismo tiempo, extremar su acción. La delimitó, en cuanto se puso por tarea fundamental liquidar....carecía de... doctrina política, salvo un anticomunismo de excepcional virulencia”.

2) Por otra parte, el acusado Contreras Sepúlveda reconoce haberse desempeñado como Director Ejecutivo de la Dirección de Inteligencia Nacional, desde 1974 hasta 1977, lo que se corrobora tanto en el Oficio N° 1595 del Estado Mayor General del Ejército (fojas 3200 y siguientes) en que se transcribe su “Minuta de Servicios”: “ 06 AGO.1974 Pasa en comisión a la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA)hasta nueva orden como Director Ejecutivo...” ,14 Nov.1977...*deja de pertenecer al Estado Mayor General del Ejército y desempeñarse en comisión de servicios en la Central Nacional de Informaciones*”, cuanto en el Informe N° 333 del Departamento V de la Policía de Investigaciones, de fojas 934, en que se establece la dependencia orgánica de la DINA, que fue creada mediante Decreto Ley N°521, de 1974 como organismo militar, de carácter técnico profesional, dependiente de la Junta de Gobierno y estaba dirigida por un Oficial General o Superior, en servicio activo, de las Fuerzas Armadas, siendo designado al efecto Manuel Contreras Sepúlveda.

Asímismo, al informar Contreras Sepúlveda a la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el paradero de Lumi Videla Moya, por Oficio N°3550/325 de 12 de febrero de 1975, reconoce que “...previamente a su muerte **fue intensamente buscada** por personal a mi servicio. Mirista profesional. Integrante del Comité Central del Movimiento Izquierda Revolucionaria...”

3) Además, es conveniente considerar que carecen de toda veracidad, por encontrarse controvertidas por múltiples probanzas del proceso, sus afirmaciones relativas a los siguientes aspectos de la investigación:

I) El recinto de calle “José Domingo Cañas”-que dice que no conoció- no era lugar de reclusión sino “*cuartel de solteros.*” Lo cual está contradicho por todos los detenidos que conocieron ese inmueble y que han depuesto en el proceso, incluso por María Alicia Uribe Gómez, quien expresa haber sido interrogada allí por Contreras sobre sus motivaciones para pertenecer al MIR (según detalle consignado en el párrafo VI siguiente). Agrega que el inmueble les fue entregado recién por Decreto N°2108 de 16 de diciembre de 1974, lo cual es corroborado por el Oficio N°1052, de fojas 3180,de la Ministra de Bienes Nacionales; sin embargo, de los múltiples testimonios del proceso resulta que estuvo destinado como recinto de reclusión de la DINA desde mucho antes; es así como Ciro Torré, comandante del cuartel, a fojas 3741 reconoce que “*desde marzo o abril de 1974 se le ordenó hacerse cargo de una casa de “José Domingo Cañas”*”; en igual sentido deponen los testigos que se individualizan en el párrafo siguiente, algunos de los que llegaron a ese recinto durante 1974; en julio (Graciela Scarlett Mathieu Loguercio), en septiembre(Gastón Lorenzo Muñoz Briones, Félix Edmundo Lebrecht Diaz-Pinto y Rosalía Martínez Cereceda) y en octubre (Sonia del Carmen Acuña Chandía. Luis Humberto Lillo Ahumada y Hortensia Patricia Glave del Villar).

II) Por otra parte, reitera el acusado Contreras, que en los lugares de reclusión de la DINA sólo se mantenía personas detenidas por un lapso de cinco días. Sin embargo, los testigos individualizados en los fundamentos primero y segundo precedentes detallan los períodos en que estuvieron reclusos en dichos lugares, en los cuales se les interrogaba y se les torturaba, a lo

que procede agregar la permanencia en el recinto de las víctimas del secuestro y del homicidio investigados en este proceso:

- 1) Sonia del Carmen Acuña Chandía, (146), quien señala que estuvo detenida desde el día 12 de octubre de 1974 hasta el día 23 del mismo mes y año;
- 2) Gastón Lorenzo Muñoz Briones(194)desde el 11 de septiembre de 1974 hasta diciembre del mismo año.
- 3) Lautaro Robin Videla Moya(198)desde el 10 de febrero hasta agosto de 1975.
- 4) Félix Edmundo Lebrecht Diaz-Pinto (203)desde el el 30 de septiembre al 23 de octubre de 1974.
- 5) Rosa Elvira Lizama Leiva(692)desde el 3 de febrero de 1975 al 1° de octubre del mismo año.
- 6) Luis Humberto Lillo Ahumada(706)desde el 28 de octubre de 1974 al 4 de noviembre de ese año.
- 7) Graciela Scarlett Mathieu Loguercio(708)desde el 15 de julio de 1974 al 21 de marzo de 1975.
- 8) Hortensia Patricia Glave del Villar(716)desde el 4 de octubre de 1974 al día 16 del mismo mes y año.
- 9) Rosalía Martínez Cereceda(733)desde el 22 de septiembre de 1974 hasta noviembre de ese año.
- 10) Luis Humberto Lillo Ahumada(706)desde el 28 de octubre de 1974 hasta el 4 de noviembre del mismo año.
- 11) Sergio Pérez Molina, la víctima del secuestro, desde el 22 hasta, al menos, el 27 de septiembre de 1974.
- 12) Lumi Videla Moya, víctima del homicidio, desde el 22 de septiembre al 3 de noviembre de 1974.

III) La circunstancia de que no se detuviera a ninguna persona en sus domicilios, sino en enfrentamientos urbanos, aparece contradicho por los mismos testigos aludidos en el numeral II) precedente, pues todos ellos fueron aprehendidos, ilegítimamente, en sus casas, lugares de trabajo o en la vía pública, cual es el caso específico de Sergio Pérez Molina y de Lumi Videla Moya, sin haber participado en enfrentamiento alguno a su respecto, a pesar de lo afirmado por Contreras, sin intentar acreditarlo de manera alguna, en el escrito que ha denominado *"Introducción a la entrega de documentos que demuestran las verdaderas responsabilidades de las Instituciones de Defensa Nacional en la lucha contra el terrorismo en Chile"*, de 11 de mayo de 2005, enrolado de fojas 3608 a 3638, en una de cuyas páginas se lee: *"14. Pérez Molina, Sergio. Unidad DINA. Jefes Nacionales MIR. Grecia con Salvador. 21.IX.74. Muerto en combate. Cuesta Barriga. Desenterrado Enero de 1979 por CNI. Al Mar frente a Los Molles"* (Fojas 3625).

IV) La circunstancia de que solamente se aprehendiera a quienes aparecieran nombrados en un *"decreto exento"* del Ministerio del interior, lo cual tampoco ha sido corroborado por ninguno de los detenidos que han depuesto en este proceso y ni siquiera por el resto de los agentes de la DINA quienes atribuyen la decisión sobre el destino de los prisioneros al "Cuartel General" (al mando de Contreras Sepúlveda) y no al Ministro del Interior; sin que, por otra parte, su defensa letrada haya acompañado copia del correspondiente *"decreto exento"* que facultara la detención de Sergio Pérez Molina o la de Lumi Videla Moya.

4) Además, rolan en autos las siguientes declaraciones testimoniales que lo inculpan directamente:

I) Dichos de Luz Arce Sandoval (3288) en cuanto haber sido detenida y trasladada a “Villa Grimaldi”, siendo torturada y, para salvar su vida, con su hermano, redactaron una lista de “compañeros socialistas”. Explica “Con relación al trabajo operativo que desarrollaba la DINA, puedo señalar que en Santiago se encontraba a cargo de la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM).....agrupaba a las unidades “Caupolicán”, “Purén” y, hasta 1976, “Tucapel”. “Caupolicán” correspondía a una unidad operativa, que tenía como misión la detención y represión de las organizaciones políticas de izquierda...La agrupación “Caupolicán”, entre agosto de 1974 y marzo de 1975, fue comandada por Marcelo Moren Brito, fecha en que es reemplazado por...Miguel Krassnoff Martchenko quien entre esas fechas se encontraba a cargo del grupo “Halcón”...Cuando pasé a ser funcionaria de la DINA tuve la certeza de la identidad de muchos de los agentes que trabajaban en ese organismo...Los grupos principales eran “Halcón” y “Águila”, cuya misión en esa fecha era la represión del MIR...La Brigada de Inteligencia Metropolitana contaba con una Plana Mayor que, a partir del 18 de noviembre de 1974, se encontraba al mando del Mayor de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo...Diariamente confeccionaba un Informe de detenidos que era remitido al Director de la DINA, **coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda**...Este informe luego de ser revisado por Contreras era remitido al archivo...Los estafetas llevaban informes desde “Terranova” al Cuartel General y traían documentación...Desconozco si **Contreras** decidía la suerte de los detenidos o si era de exclusiva responsabilidad del jefe de cada Brigada o Agrupación. Consta que en algunos casos la suerte de los prisioneros **dependió** de la decisión del Director de la DINA...”

II) Atestación de María Alicia Uribe Gómez (3311) relativa a haber sido detenida el 12 de noviembre de 1974 por un grupo de agentes de la DINA, quienes la condujeron al cuartel de calle José Domingo Cañas, estuvo una semana siendo interrogada y torturada.”...*También recuerdo que en una ocasión, estando en José Domingo Cañas con los ojos vendados conversó conmigo un señor de trato duro pero no grosero, quien me preguntó las motivaciones por las que yo era mirista. Después de esta conversación con este señor el trato cambió, ya no fui más torturada y se me dio atención médica. Con el tiempo supe que esta persona era **Manuel Contreras Sepúlveda**, con quien continué teniendo contacto y en una ocasión me dijo que **me había liberado** del trato que se les daba a los otros detenidos porque yo no era su enemiga sino una “pobre niña” que quería cambiar el mundo...*”

III) Dichos de Osvaldo Pulgar Gallardo (3335) quien expresa haber ingresado a la DINA en noviembre de 1974, desempeñándose en la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Ejerció funciones en el “Diego Portales” y, a veces, en el Cuartel General de la DINA, en calle Belgrano; allí le entregaban una minuta con las labores del día siguiente. Concluye que en muchas ocasiones trasladó al general **Contreras Sepúlveda** a la casa de Augusto Pinochet “a entregarle “la minuta”; en una ocasión logré ver una carpeta que decía “la noche de ayer se realizó un operativo y hubo tres muertos”.

IV) Atestación de Ciro Torré Sáez, de fojas 1743, quien expresa que era el encargado del aspecto logístico administrativo de “José Domingo Cañas”. Si en el careo con Luz Arce dice que encomendó efectuar operativos “*pudieron haber sido respecto de personas mencionadas en órdenes específicas del Cuartel General, emanadas del Director el coronel **Contreras**...*”.

V) La deposición de Ricardo Víctor Lawrence (fojas 2492 a 2499), quien asevera haber sido destinado a DINA a fines de 1973. Participó en unas 15 detenciones, pero no tuvo conocimiento que las mismas, que se practicaban por órdenes superiores, iban a derivar en desaparición de

personas. Aclara que en DINA “*nadie se mandaba solo*”, por lo cual todos debían obedecer y si desaparecieron personas los mandos deben saber que ocurrió con ellas. Concluye que está convencido que el general **Manuel Contreras**, Director de la DINA y el general Augusto Pinochet, su jefe directo, tienen que tener información sobre el destino final de los detenidos por agentes de la DINA. Reitera que ésta era una institución bien estructurada, jerarquizada, nada era “*al lote*”, por lo que los mandos superiores, como **Manuel Contreras**, deben saber que pasó con los detenidos que desaparecieron.

Noveno.- Que, las declaraciones de los testigos mencionados y que cumplen todas las exigencias del artículo 459 del Código de Procedimiento Penal y las presunciones recién enunciadas, que reúnen los requisitos del artículo 488 del citado Estatuto permiten tener legal y fehacientemente acreditada en el proceso la participación del acusado **Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda** en calidad de autor, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 numeral 2° del Código Penal de los delitos de secuestro calificado perpetrado en la persona de Sergio Pérez Molina y de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya.

En efecto, procede recordar que el N° 2 del citado artículo 15 considera autores de un delito a “*los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo*”.

Se explica, por la doctrina, que “*Conforme al alcance del artículo 15 y al pensamiento de la Comisión redactora, **autor mediato** es el sujeto que logra que otra persona lleve a la práctica una acción delictiva por haberlo influenciado directamente...En nuestra legislación, en la autoría mediata, el intermediador actúa dolosamente...tiene conocimiento de que comete un delito... inducido y, por ende, si bien es mediador entre el que... induce y el resultado, es mucho más que un medio de ejecución, y por ello es también autor, pero inmediato...*”

“*El N°2 del artículo 15 consagra legislativamente lo que la doctrina denomina “el autor detrás del autor”, con las siguientes características: a) Coexisten dos acciones, la del autor mediato, constituida por el empleo de la...instigación, y la del autor inmediato, que materialmente realiza el hecho, y b) Tanto el autor mediato como el inmediato actúan dolosamente en el mismo sentido, de modo que este último no es un instrumento del primero, porque sabe lo que hace y la significación de su actuar, que viene a ser el efecto o consecuencia complementaria de la acción del inductor...Se trata de dos acciones complementarias, de cuya concurrencia se requiere para la existencia del delito: sin el comportamiento del autor mediato el...inducido no habría ejecutado el hecho; sin la ejecución del hecho el autor mediato no incurriría en delito...*” (“Etapas de ejecución del delito, autoría y participación”. Mario Garrido Montt. Editorial Jurídica de Chile.1984.Páginas 280 y siguientes).

Recientemente, en los mismos términos, ha razonado la jurisprudencia (fojas 5063 del Rol N°14.133-2006 y fojas 2117 del Rol N°14.131-2006. 29 de noviembre de 2006. Corte de Apelaciones de Santiago):”*...cabe tener presente la figura de partícipe que Roxin denominó “Dominio de organización”, cuyo sustrato material lo ha centrado mayoritariamente la doctrina en el **hombre de atrás** que dirige el aparato de poder organizado jerárquicamente-ya sea estatal o extra estatal- y que ve satisfecha sus pretensiones, con la emisión de órdenes destinadas a los escalones mas bajos de la pirámide y que tendría el dominio del hecho, mediante el curso del suceso y conseguiría controlar el “si” y el “cómo” de la ejecución...este dominio sobre el suceso se obtendría mediante la instrumentalización a la que se somete el ejecutor y que, ajena a todo ejercicio de error o coacción, se satisface gracias al funcionamiento automático del aparato, garantizado por la particular estructura del mismo y la existencia de una amplia red funcional...el hombre de atrás se sirve “de otro” para la ejecución del delito, a partir de su posición de dirigente del aparato, que resulta reflejado en el desempeño de tareas de*

planificación, control y dirección...la figura del “autor tras el autor” conlleva no sólo el dominio de la organización, sino también el carácter de la responsabilidad que emana en la participación de los diversos actores responsables del ilícito, produciéndose una coautoría, en términos tales que el grado de dominio ejercido por el llamado hombre de atrás, es igual a la de los otros coautores o mayor incluso que la de ellos (principio de convergencia)...en relación al dominio de la organización, que permite responsabilizar al hombre de atrás como autor mediato de los delitos cometidos por sus subordinados en el seno de un aparato de poder, si bien no coincide con la formulación originaria de Roxin y utilizada, reiteradamente, por el Tribunal Supremo Alemán, estamos en presencia de un aparato de poder, que desarrolló proceso reglados y que funcionó de modo casi automático, en el sentido que la organización tuvo una estructura jerárquica, sustentada en relaciones de supremacía y subordinación e integrada por una pluralidad de ejecutores fungibles, que permitieron al hombre de atrás poder confiar en el cumplimiento efectivo de las órdenes emitidas, independiente que el aparato se hubiere encontrado desvinculado o no del ordenamiento jurídico interno vigente en el momento de la comisión de los delitos...del mismo modo, cualquier contribución causal a la comisión de un acto ilícito, y en particular, de la responsabilidad de los líderes dentro de organizaciones jerárquicas está explicitado por la teoría de la autoría indirecta por medio del dominio del hecho en virtud de un aparato organizado del poder pero, además, el texto legal vigente permite reconocer el concepto de “autor funcional”, el cual es destinatario de la norma penal que...no sólo debe considerarse autor al que ejecuta materialmente el hecho, sino también, quien ejerce el mando funcional”.

Décimo.- Que, al declarar indagatoriamente **Cristoph Georg Paul Willeke Floel**, a fojas 241, (17 de octubre de 2002) expresa haber ingresado al Ejército de Chile a los 14 años en 1963 y fue destinado, en “comisión de servicios” a la Dirección de Inteligencia Nacional en noviembre de 1973, con el grado de teniente. Ejerció el cargo de comandante del Cuartel General de calle Belgrado hasta 1976. Tuvo a su cargo la organización administrativa, de seguridad, apoyo logístico y administración del personal. Su jefe directo era Manuel Contreras; no prestó servicios en ningún otro cuartel de la DINA ni le correspondía frecuentarlos. Visitó “Villa Grimaldi” para llevar documentación reservada, que le encargaba el Director, para ser entregada al Comandante o a algún oficial como Pedro Espinoza o Moren Brito. Nunca visitó el cuartel de “Londres 38” ni el de “José Domingo Cañas”. No participó en la detención de Lumi Videla, ni tomó conocimiento del hecho. En 1974 ó 1975, por la prensa, supo que el cadáver de una mujer de nombre Lumi Videla apareció en la Embajada de Italia, ignorando las circunstancias en que eso ocurrió. Durante sus servicios en la DINA “no acudí para nada al cuartel de la DINA ubicado en calle José Domingo Cañas”.

Undécimo.- Que, si bien el acusado **Cristoph Georg Paul Willeke Floel** ha negado su participación, en calidad de autor, en el delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya, procede consignar, en primer término, que según su “Hoja de Vida” enrolada a fojas 3231: “19.XI.73 Se desempeña como miembro de la Unidad Especial Contra guerrilla del Ejto. Fue calificado de muy bueno por el Cdte. de dicha brigada, habiéndose destacado por sus condiciones de mando e iniciativa” y que existen en su contra los siguientes elementos de convicción:

a) Testimonio de Lautaro Robin Videla Moya, de fojas

207, quien expone que Romo, mientras estaba detenido en “Villa Grimaldi”, le contó que Lumi había

sido asesinada, mediante sofocación, por un oficial del

Ejército de apellido **Willeke** “que en esa época estaba en servicio activo...Sobre la muerte de Lumi...realizó una investigación la magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. Entre las diligencias que se realizaron... se hizo precisamente un careo entre Willeke y Romo y en esta diligencia Romo se desdijo de todo. El fundamento por el cual Romo se retractó de sus dichos fue porque fue visitado en la Penitenciaría donde estaba privado de libertad por un oficial de Ejército de apellido Garín, quien le ofreció dinero para que obrara así....Esto lo supe porque el propio Romo me lo contó cuando yo le representé su actitud, dándome como explicación que él estaba solo en Chile, que tenía problemas económicos y miedo...”

b) Declaración de Amanda de Negri Quintana, de fojas 774, quien fue detenida el 9 de octubre de 1974 y llevada hasta “José Domingo Cañas”, donde vio, en calidad de detenida, a Lumi Videla Moya y la declarante se encontraba en aquel lugar cuando a aquella la mataron; ese día recuerda la presencia en el recinto de Osvaldo Romo, Marcelo Moren y de **Willike**. Agrega, a fojas 945, que al amanecer del 1º de noviembre Cristina López le contó que habían matado a Lumi Videla, ella escuchó un alboroto pero pensó que habían detenido a alguien importante, pero no pensaron que Lumi se les había muerto en la sesión de tortura.

c) Testimonio de Osvaldo Romo Mena, el cual, a fojas 215, relata que Lumi Videla fue detenida el 18 de septiembre de 1974 y llevada al cuartel de “José Domingo Cañas”, donde permaneció varios días sometida a diversas torturas. Al día siguiente, como a las 20,00 horas, “fui al cuartel de “José Domingo Cañas” a hablar con Miguel Krassnoff pero éste no se encontraba y al ingresar a un cuarto pequeño de madera, sobre una especie de camastro estaba tendida desnuda Lumi Videla y junto a ella los Oficiales de Ejército **Cristoph Willeke Floel** y Jara Seguel y el suboficial de Ejército Manuel Lucero Lobos. Este último tenía una jeringa en la mano. Lumi se encontraba inconsciente, no se movía. Yo ingresé a la habitación a preguntar por Miguel Krassnoff y me dijeron que no estaba, por lo que me fui de inmediato. Al día siguiente aparece en la prensa que una extremista que se había asilado en la Embajada de Italia había muerto al interior...asesinada por otros asilados...era Lumi Videla”. A fojas 1647 relata detalles de la detención de otros integrantes del MIR, concluyendo, respecto de Lumi Videla Moya (1659) que “fue muerta y trasladada hasta la Embajada de Italia por los mayores **Willeke** y Jara del Regimiento de Tejas Verdes”.

d) Atestación de Ricardo Víctor Lawrence Mires(3550), quien con el grado de Subteniente de Carabineros fue destinado a la DINA en 1973. Cumplió funciones en “Londres 38” y en marzo de 1974 se cambiaron a “Villa Grimaldi”; allí existieron dos agrupaciones: “Brigada Caupolicán” y “Brigada Purén”; la primera se subdividía en agrupaciones que tenían como objetivo la represión del MIR. El declarante era el jefe de la llamada “Águila”. El cuartel de “José Domingo Cañas” funcionó desde 1974 a la par con “Villa Grimaldi” y “...a ese lugar se llevaba a los detenidos más importantes...” En cuanto a los detenidos que se le mencionan, explica: “Lumi Videla Moya fue detenida por la DINA, la trasladaron hasta “José Domingo Cañas”, en ese lugar la mataron, el día que murió Lumi Videla producto de la tortura se encontraba a cargo Miguel Krassnoff. Se rumoreaba que **Willeke Floel** había estado presente en la tortura en que murió Lumi Videla...”.

Duodécimo.- Que, en consecuencia, como los referidos testigos cumplen con los requisitos que exige el artículo 459 del Código de Enjuiciamiento criminal debe estimarse legalmente acreditada la participación del acusado **Cristoph Georg Paul Willeke Floel**, en calidad de autor, del delito de homicidio calificado, perpetrado en la persona de Lumi Videla Moya, en los términos del N°1 del artículo 15 del Código punitivo, por su acción inmediata y directa en el delito que se le atribuye.

Décimotercero.- Que, al declarar indagatoriamente, **Francisco Maximiliano Ferrer Lima**, a fojas 247, (24 de octubre de 2001) expresa haber sido destinado en septiembre de 1974 a la Dirección de Inteligencia Nacional y su primera misión, en la subdirección de inteligencia exterior, bloque oriental, fue la *“detección de agentes de la KGB en Chile”*; no encontró ninguna persona que tuviera características de agente de la KGB; hizo un curso de Inteligencia en Brasil y a su regreso volvió a una oficina en calle Belgrado N°11. *“Yo nunca he estado a cargo de ningún cuartel de la DINA, no recuerdo haber conocido el lugar que se me indica como “José Domingo Cañas” u “Ollagüe”*. No conoció a Osvaldo Romo, se enteró de él por la prensa. En careo con Marcia Merino, de fojas 3272(9 de mayo de 2002) expresa que ésta, como colaboradora de la DINA le entregaba informaciones útiles para su trabajos y por esa razón conversaron muchas veces. A fojas 249(18 de octubre de 2002) añade que mientras trabajó en la DINA no oyó hablar de Lumi Videla. Sin embargo, a fojas 1076,(23 de agosto de 2004) rectifica y expone respecto del *“Cuartel Ollagüe”*: *allí revisé la documentación incautada por esa Unidad para ver que relación tenía con mi trabajo; había documentación de varios grupos extremistas, entre ella, la incautada el 5 de octubre, relacionada con el operativo contra Miguel Henríquez y que había sido incautada en su casa”* y añade *“Cuando Ollague se trasladó a “Terranova”...seguí estudiando la documentación”*. Interrogado sobre los detenidos que se le mencionan, expresa que no tiene antecedentes sobre Lumi Videla, y que supo del caso *“por la prensa”*.

Décimocuarto.- Que, el acusado Francisco Maximiliano Ferrer Lima no reconoce su participación en el delito que se le atribuye, de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya, sin embargo se han reunido en el proceso los siguientes elementos de convicción:

a) Testimonio de León Eugenio Gómez Araneda, de fojas 235, (fotocopiado de la causa rol N° 781-04 del 2° Juzgado Militar de Santiago), relativo a conocer al matrimonio de Lumi Videla y Sergio Pérez desde 1969,

él trabajó con la madre de aquella, profesora de Estado. Fue detenido el 15 de agosto de 1974 y trasladado a “Londres 38”, a “Cuatro Álamos” y el 23 de agosto a “José Domingo Cañas”. Al medio día del 20 ó 21 de septiembre estaba en “José Domingo Cañas” y llegó Romo, quien había salido en la mañana a *“porotear”* con la “Flaca Alejandra” y el “Troglo” y éste, eufórico, dijo, que habían agarrado a la mujer del “Chico Pérez”, Lumi Videla. El deponente estaba en la pieza-celda, con la vista vendada y le preguntó si era ella, llamándola por su apodo, “Negra”, y aquella le contestó. Al rato llegó el capitán Max (**Francisco Ferrer Lima**) quien verificó su identidad y se la llevó a interrogatorios, uno de los mas largos que recuerda, desde las 15 horas hasta las 21,20 horas mas o menos; ella volvió a lugar y se quejaba mucho porque la habían torturado en *“la parrilla”*. Al día siguiente, llegó otra vez, eufórico, Romo diciendo que habían agarrado el “Chico Pérez” (Sergio); sacaron a Lumi Videla diciendo que iba a ver a su marido, para que cooperara, pero ella no volvió a la misma pieza y a Pérez continuaron torturándolo. Lo anteriormente relatado lo vivió personalmente. Luego reconstruyó los hechos con investigaciones, con las cuales publicó el libro *“Tras la huella de los Desaparecidos”* en que dejó constancia de lo indagado. En cuanto a Lumi Videla *“se les murió en una sesión de tortura porque gritaba mucho y le taponaron la boca entre Moren y Romo y se excedieron en el tiempo ya que la estaban “parrilleando” debido a que ella primeramente había aparentado que iba a cooperar y, en definitiva, no lo hizo, entonces, la sacaron a “parrilla” de nuevo y ocurrió esto”*.

b) Atestación de Ricardo Víctor Lawrence Mires(3550), quien con el grado de Subteniente de Carabineros fue destinado a la DINA en 1973. Cumplió funciones en “Londres 38” y en marzo de

1974 se cambiaron a “Villa Grimaldi”; allí existieron dos agrupaciones: Brigada “Caupolicán” y Brigada “Purén”; la primera se subdividía en “agrupaciones” que tenían como objetivo la represión del MIR. El declarante era el jefe de la llamada “Águila”. El cuartel de “José Domingo Cañas” funcionó desde 1974 a la par con “Villa Grimaldi” y “...a ese lugar se llevaba a los detenidos más importantes...” En cuanto a los detenidos que se le mencionan “Lumi Videla Moya fue detenida por la DINA, la trasladaron hasta “José Domingo Cañas”, en ese lugar la mataron, el día que murió Lumi Videla producto de la tortura se encontraba a cargo Miguel Krassnoff. Se rumoreaba que Willeke Floel había estado presente en la tortura en que murió Lumi Videla. Yo detuve al hermano de ella, Lautaro Videla. Sergio Pérez Molina, sé que era intensamente buscado por pertenecer al Comité Central del MIR...”. Añade a fojas 3557 que en “José Domingo Cañas” hubo varios jefes que rotaban; recuerda a **Francisco Ferrer Lima** y a Marcelo Moren Brito.

c) Informe N° 333 del Departamento V de la Policía de Investigaciones, de fojas 934, en que se establece la dependencia orgánica de la DINA. Menciona a Francisco Ferrer Lima como integrante de la Brigada “Caupolicán”, como jefe del recinto de “José Domingo Cañas” después de Ciro Torrè y directivo de la Escuela Nacional de Inteligencia.

d) Oficio N°1595/53 del Estado Mayor General del Ejército(3195) a relativo a destinaciones de Francisco Ferrer Lima: “Período 1974-1975: Dirección de Inteligencia Nacional. Comandante Agrupación “Caupolicán” B.I.N.” En Minuta de Servicios(3210) se agrega: “26 AGO.1974. Pasa al Comando en Jefe del Ejército, deja su actual destinación para desempeñarse en comisión en la Dirección de Inteligencia Nacional”.

e) Oficio N°18248 (3238) del Departamento Control de Fronteras respecto a viajes de Francisco Ferrer Lima, a contar del 31 de agosto de 1974.

f) Declaraciones de Marcia Merino Vera, en careo con Ferrer Lima(3272), la cual repite que Ciro Torrè era el jefe de “José Domingo Cañas” y fue sucedido por

Francisco Maximiliano Ferrer Lima. Agrega: “Yo lo identifiqué como la persona que se bajó de uno de los

vehículos en los que se transportaba el equipo que me detuvo, me golpeó y estuvo presente en la sala de torturas cuando yo era interrogada...si... iba a “Villa Grimaldi es porque está relacionado con los grupos operativos...por lo tanto debe saber sobre las personas que allí estaban detenidas y que actualmente se encuentran desaparecidas...Yo tengo claro que cuando el cuartel de “José Domingo Cañas” fue evacuado a mediados de noviembre de 1974 el jefe era el Capitán **Max Ferrer**...lo que me consta debido a que en esa ocasión mientras Luz Arce y yo permanecíamos separadas del resto de los detenidos, el “Capitán Max” llegó...trayendo de la mano a “Carola”, la que según ella misma nos comentó había sido bajada desde un camión en que iba a ser transportada...junto con los otros detenidos...llegamos a la conclusión de que por haber sido bajada del camión por el “Capitán Ferrer”, Carola salvó su vida...También recuerdo haber visto de manera permanente al **Capitán Max Ferrer** en “Villa Grimaldi” formando parte de la Jefatura de la Brigada “Caupolicán”...el “Capitán Ferrer sabía que todos los cuarteles de la DINA eran centros de detención y torturas y él era parte del sistema...”

g) Atestación de Luz Arce Sandoval(3297) relativa a que el 12 de septiembre de 1974 fue llevada al recinto de la DINA llamado “Ollagüe”; “era un centro de detención que recién se estaba habilitando. Ahí se me presenta Ciro Torrè que era jefe del local...a fines de octubre de 1974 es sustituido Torrè de la jefatura de José Domingo Cañas por **Francisco Ferrer Lima**...” Añade que el 18 de noviembre **Ferrer Lima** le ordenó a ella y a Marcia Merino arreglar sus cosas para

ser trasladadas a “Villa Grimaldi”, donde se encontraba la comandancia de la BIM que agrupaba las unidades “Purén” y “Caupolicán”, ésta era operativa, tenía como misión detener y reprimir a las organizaciones de izquierda.

h) Dichos de María Alicia Uribe Gómez(3314)quien estando en “José Domingo Cañas” iba a ser sacada del lugar pero “...fui bajada a última hora por orden de Maximiliano **Ferrer Lima**...oficial de Ejército al que conocí después en “Villa Grimaldi”y ubico perfectamente...En “Villa Grimaldi” funcionaban dos Brigadas de la DINA... “Caupolicán” y... “Purén”...El Jefe de la Brigada “Caupolicán” era Pedro Espinoza, quien tenía a su mando otros oficiales de la Defensa Nacional, quienes lo sucedían cuando Espinoza no estaba, estos oficiales eran, por orden de antigüedad: Rolf Wenderoth...Miguel Krassnoff, Fernando Lauriani, **Maximiliano Ferrer Lima**...Krassnoff... “Y concluye:”...Lauriani, **Ferrer Lima**, Lawrence y Godoy eran jefes de grupos operativos...”

i)Deposición de Lautaro Robín Videla Moya (fojas 226 del Cuaderno de Documentos Tomo I), quien expresa ser cuñado de Sergio Pérez Molina y, por dichos de Humberto Sotomayor, supo que aquel fue detenido el 22 de septiembre de 1974 porque le habían “*montado una ratonera*” y fue trasladado a “José Domingo Cañas”, recinto de detención de la DINA, a cargo de Moren Brito o **Maximiliano Ferrer Lima**.

Décimoquinto.-Que, en consecuencia, debe estimarse legalmente acreditada la participación del acusado **Francisco Maximiliano Ferrer Lima**, en calidad de autor del delito de homicidio calificado perpetrado en la persona de Lumi Videla Moya, al tenor del artículo 15 N°1 del Código del Ramo, puesto que fue quien recibió a la secuestrada el primer día de su detención, procedió a su interrogatorio durante más de seis horas(testimonio de León Gómez Araneda de fojas 235), produciéndose las torturas que relatan los restantes detenidos y, finalmente, a la fecha de la muerte de la víctima, 2 de noviembre de 1974, se desempeñaba como Jefe del recinto de reclusión de “José Domingo Cañas”.

Que, al declarar indagatoriamente **Marcelo Luis Manuel Moren Brito**, a fojas 250,(18 de octubre de 2002) expresa, que en marzo o abril de 1974, fue destinado a la Dirección de Inteligencia Nacional; en noviembre de 1975 fue agregado a misiones en el extranjero y regresó a fines de 1977 cuando se disolvió ese organismo. En 1974 y 1975 formó parte de la Brigada de Inteligencia, ejerciendo labores de mando. Tenía a su cargo personas a cargo de labores de búsqueda de información, con objetivos precisos, como indagar respecto de determinadas personas, agrupaciones subversivas o lugares específicos. Una vez que le entregaban la información la clasificaba y la enviaba al departamento de operaciones de la DINA, información que podía haber servido para detener personas. Los grupos operativos de búsqueda de información eran “Caupolicán”, “Purén”, “Halcón”, “Tucán”, “Diuca”y “Zorzal”. Conoció “José Domingo Cañas” como cuartel de la DINA y no le consta que hubiera detenidos. Estaba trabajando en la DINA y escuchó nombrar a Lumi Videla Moya “*como una presa que fue puesta en libertad y apareció en la Embajada de Italia. Su libertad debe haber sido por decreto exento del Ministerio del Interior*”. A fojas 973(2 de agosto de 2001) reitera sus dichos agregando que los recintos de detención de “Londres 38”, “José Domingo Cañas” y “Villa Grimaldi” eran “*de tránsito*”, de paso a “Cuatro Álamos”, que no dependía de la DINA sino del Ministerio del Interior. Preguntado sobre personas detenidas, a fojas 977, (17 de octubre 2000) expresa no tener antecedentes sobre Lumi Videla y que nunca estuvo a cargo del cuartel de “José Domingo Cañas”. Reitera sus dichos a fojas 985(22 de enero de 2002) y añade que a ese recinto iba a buscar información que le aportaba el oficial y el personal y nunca interrogó detenidos, para eso había detectives. Repite sus dichos a fojas 994(18 de agosto de 2004) expresando que no

interrogó a Lumi Videla, ya que él sólo “fichaba a los detenidos”. Recuerda “*que Sergio Pérez Molina estaba detenido en José Domingo Cañas, me avisaron que había alguien sangrando de úlcera, llamé a la Clínica Santa Lucía y fueron a prestarle apoyo pero había fallecido a consecuencias de una úlcera perforada. Recuerdo, además, haber jugado ajedrez con él en el recinto de José Domingo Cañas*”.

Décimoséptimo.-Que Marcelo Luis Moren Brito no reconoce su intervención, en calidad de autor, en el delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya, no obstante, al respecto, se han obtenido en el proceso los siguientes elementos de convicción:

a) Atestación de Gastón Lorenzo Muñoz Briones, de fojas 194, quien fue aprehendido y trasladado hasta el recinto de “José Domingo Cañas”, donde mandaba un tal “Ronco”, al que, posteriormente, identificó como **Marcelo Moren**. En ese cuartel estuvo detenido junto a Lumi Videla.

b) Testimonio de Lautaro Robin Videla Moya, de fojas 207, el cual señala que, en un careo realizado en un Tribunal con **Marcelo Moren Brito**, éste reconoció que “*había tenido detenido*” a su cuñado, Sergio Pérez Molina. Además, Romo, mientras estaba el deponente estaba detenido en “Villa Grimaldi”, le contó que en cuanto a su cuñado, Sergio Pérez, quien le había dado muerte había sido **Marcelo Moren Brito**.

c) Declaración de Amanda de Negri Quintana, de fojas 774, quien fue detenida el 9 de octubre de 1974 y llevada hasta “José Domingo Cañas”, donde vio, en calidad de detenida, a Lumi Videla Moya y la declarante se encontraba en aquel lugar cuando a aquella la mataron; ese día recuerda la presencia en el recinto de Osvaldo Romo, **Marcelo Moren** y Willeke.

d) Atestación de Ricardo Víctor Lawrence Mires (3550), quien con el grado de Subteniente de Carabineros fue destinado a la DINA en 1973. El cuartel de “José Domingo Cañas” funcionó desde 1974 a la par con “Villa Grimaldi” y “...a ese lugar se llevaba a los detenidos más importantes...” En cuanto a los detenidos que se le mencionan “*Lumi Videla Moya fue detenida por la DINA, la trasladaron hasta “José Domingo Cañas”, en ese lugar la mataron...*”. Añade a fojas 3557 que en “José Domingo Cañas” hubo varios jefes que rotaban; recuerda a Francisco Ferrer Lima y a **Marcelo Moren Brito**. Añade que el objetivo central de la DINA era la detención del Comité Central del MIR y cumplían las órdenes del mayor **Marcelo Moren**, el cual fue, en mayo o junio de 1974, Jefe de la Brigada operativa “Caupolicán”, que integraba la **Brigada de Inteligencia Metropolitana**.

e) Aseveración de Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega (fojas 58 del Cuaderno de documentos Tomo I), respecto de la estructura orgánica del recinto de “José Domingo Cañas”:

“*A la cabeza de este cuartel estaba el Mayor de Ejército...Marcelo Moren Brito quien...no tenía oficina allí pero iba prácticamente todos los días. Bajo él, como comandante del cuartel cuando yo llegué allí estaba el oficial de Carabineros Ciro Torré, el que después fue reemplazado por el capitán de Ejército Francisco Ferrer Lima...*”

En declaración fotocopiada a fojas 3268 repite “*A este recinto desde que llegué a él, periódicamente, llegaba el “Ronco”, Marcelo Moren Brito, quien no tenía oficina en este recinto, pero llegaba como jefe de Krassnoff y dirigiendo todo...se le vio más a raíz de la caída de Lumi Videla y posteriormente con la caída del “chico Pérez”...*”

f) Atestación de María del Carmen Castillo Echeverría,

de fojas 365(Cuaderno de documentos, Tomo II), relativa a haber sido detenida el 5 de octubre de 1974, en calle Santa Fe, donde residía, desde hacía un año, con Miguel Henríquez, jefe máximo del MIR y por ello conocía a Sergio Pérez, miembro de la Comisión Política del MIR y a Lumi Videla, miembro del Comité Central, quienes fueron detenidos entre el 21 y el 22 de septiembre de 1974. En el enfrentamiento murió Henríquez y ella quedó herida con esquirlas de una granada. La condujeron al Hospital Militar para operarla; al día siguiente llegaron a verla **Moren** y Romo, ella les dijo que habían muerto a Pérez y *“Moren se pone furioso y protesta contra los jefes “que están hablando”*.

g)Declaración de Samuel Fuenzalida Devia de fojas

240 el cual expone que fue agente de la DINA y enviado a diversos centros de detención, entre ellos, al

de “José Domingo Cañas” y si bien no vio a Lumi

Videla, por los dichos de Romo se enteró que ella y su

marido, Sergio Pérez, habían estado detenidos en ese

recinto; él se encontraba trabajando en “Villa Grimaldi” cuando apareció muerta en la Embajada de Italia el 03 de noviembre de 1974”*debido a que el día anterior un miembro de la DINA, de nombre Gerardo Urrich fue herido a bala en la calle Bilbao, frente a un*

supermercado...hecho este último que tiene relevancia

*debido a que, según se comentó, Lumi Videla, fue muerta en represalia por las heridas que sufrió Urrich...”*Además, recuerda que **Marcelo Moren Brito** le comentó, después que se supo que el cadáver de Lumi apareció en la Embajada de Italia, que *“los miristas se asilaban muertos”*.

h) Testimonio de León Eugenio Gómez Araneda, (de

fojas 235, fotocopiado de la causa rol N° 781-04 del 2° Juzgado Militar de Santiago), relativo a que el 21 ó

22 de septiembre de 1974 llegó Osvaldo Romo diciendo que habían agarrado al “Chico Pérez” (Sergio); sacaron a Lumi Videla diciendo que iba a ver a su marido, para que cooperara, pero ella no volvió a la misma pieza y a Pérez continuaron torturándolo. Lo anteriormente relatado lo vivió personalmente. Luego reconstruyó los hechos con investigaciones, con las cuales publicó el libro *“Tras la huella de los Desaparecidos”*, en que dejó constancia de lo indagado.

En cuanto a Lumi Videla *“se les murió en una sesión de tortura porque gritaba mucho y le taponaron la boca entre Moren y Romo y se excedieron en el tiempo ya que la estaban “parrilleando” debido a que ella primeramente había aparentado que iba a cooperar y, en definitiva, no lo hizo, entonces, la sacaron a “parrilla”de nuevo y ocurrió esto”*.

i)Aseveraciones de Ciro Torrè Sáez en careo de fojas

3339 con Marcelo Moren expresa que éste *“era quien*

aparecía como la cabeza más visible, aparentemente, del recinto de José Domingo Cañas...presumo que Moren Brito debió ser quien estaba a cargo de la coordinación de las actividades y toma de decisión del recinto y ordenaría las detenciones, ya que los equipos no podrían haber trabajado por sí solos...él era el jefe operativo más visible...”

j)Hoja de servicios de Marcelo Luis Moren Brito del período 1973-1974 (fojas 3662) que señala: *“16 NOV.1973 Con esta fecha se presenta a DINA.*

21 NOV.1973 Destinado en Comisión de Servicio a partir del 16.NOV.1973 a la Academia de Guerra del Ejército 15 OCT.1974 Teniente Coronel de Ejército”.

Décimo octavo.-Que, en consecuencia, con el mérito de estas probanzas, que reúnen todas las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, es dable concluir que Marcelo Luis Moren Brito, uno de los Oficiales de la DINA que ejercieron mando en el recinto de

reclusión de “ José Domingo Cañas” y, especialmente, porque era el máximo Jefe de la "Brigada Caupolicán", encargada de reprimir a las personas vinculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, con mayor razón a una dirigente del Comité Central de ese grupo, no pudo estar al margen de la decisión de torturarla, para obtener información y, en este punto, procede recordar que hay testigos (León Gómez Araneda y Osvaldo Romo), quienes aseveran que, al comienzo aquella parecía estar dispuesta a colaborar con sus aprehensores, lo que no hizo, por lo cual aquellos, finalmente, le causaron la muerte en una sesión de tortura. Por lo anterior, debe estimarse, legal y fehacientemente, acreditada la participación del acusado **Marcelo Luis Moren Brito**, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 N°1 del Código Penal, en calidad de autor del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya.

Décimo noveno.-Que, al declarar indagatoriamente **Miguel Krassnoff Martchenko**, a fojas 254, (18 de octubre de 2002) expone haber sido destinado a la DINA entre mayo o julio de 1974, con el grado de teniente; pasó a cumplir funciones como analista de materias relacionadas con movimientos u organizaciones terroristas subversivas clandestinas, particularmente lo relacionado con el MIR y dependían directamente del Director Manuel Contreras, en la calle Belgrano o Belgrado. Además concurría a “*recintos de tránsito de detenidos*” para tomar contacto con personas o a retirar documentación incautada. En algunas oportunidades concurrió a “Londres 38”, en escasas oportunidades, al recinto de “José Domingo Cañas” y luego, al de “Villa Grimaldi”. Nunca participó en detenciones, malos tratos, torturas o desaparición de personas. Explica, a fojas 1274, (28 de septiembre de 1992) que nació en Austria en 1946 y llegó a Chile en 1948 con su madre y su abuela materna; ingresó a la Escuela Militar a los 14 años y egresó en 1967. A contar de abril, mayo o junio de 1974, no recuerda bien, con el grado de teniente, fue destinado a servir en la Dirección de Inteligencia Nacional; se trataba de un organismo que canalizaba y centralizaba la información, a nivel nacional, de los diferentes campos de acción. Él se desempeñó como “*analista*” en el área subversiva. Por la existencia de grupos armados irregulares organizados la DINA, a través de la búsqueda de información, debió enfrentar “*la neutralización*” de esas organizaciones. Se desempeñaba en el Cuartel General y su superior jerárquico era el coronel Manuel Contreras; no recuerda al personal que trabajó a su cargo. No le consta que hubiera habido abusos o presiones físicas por personal de la DINA. Al “Cuartel Terranova” asistió, no para interrogar, sino para “*consultas aclaratorias a personas que estaban de paso para ser llevadas*” al lugar de detención, denominado “3” o “4” Álamos”. Respecto a “José Domingo Cañas” se remite a lo declarado. Estima que el “*estado de guerra*” en Chile existía antes del 11 de septiembre de 1973, por lo tanto al aparecer las Fuerzas Armadas y de Orden en la conducción del país se interceptó el objetivo de guerra declarado, que era la guerra civil y concluye que, de hecho más que de Derecho, se configuró plenamente “*el estado de guerra*” en el país. Niega haber comandado un grupo llamado “Halcón”. Su actividad de analista lo hizo centrarse especialmente en el movimiento subversivo denominado MIR. A fojas 1280(31 de mayo de 1994) dice que Osvaldo Romo fue presentado como un informante valioso por sus conocimientos de las actividades y estructuras de movimientos terroristas. No participó con él en detenciones. Ignora quien efectuaba detenciones, presume que “*era personal calificado y premunido de órdenes y decretos correspondientes*”. A fojas 1291 (20 de julio de 2001) insiste en no haber ordenado la detención de las personas que se le nombran ni haber estado con ellas. Repite sus dichos a fojas 1297(10 de octubre de 2001). A fojas 1304(13 de diciembre de 2001) preguntado sobre lo que declaró al Ministro señor Servando Jordán en 1978 ó 1979, en cuanto a que, “*Me correspondió actuar en la detención de personas. Nosotros recibíamos la orden correspondiente y procedíamos a la detención, sin conocer mayores datos de la persona a quien*

se aprehendía”, explica que lo dijo en términos genéricos. Tampoco es correcta la frase que se le menciona en cuanto a haber dicho “*Jamás concurrí a Villa Grimaldi, no la conocí*” y ni la que expresa, respecto a Osvaldo Romo, “*Yo jamás he visto a ese hombre*”. Repite sus dichos a fojas 1309 (17 de octubre de 2002) y precisa que estuvo en “José Domingo Cañas” para entrevistar detenidos, ocasionalmente. Se trataba de una casa pequeña y las personas detenidas que se encontraban en dicho lugar no estaban con la vista vendada y preguntado sobre personas que estuvieron en los recintos de detención, entre ellas, Lumi Videla Moya, detenida en septiembre de 1974 y muerta en noviembre de ese año, manifiesta: “*No tengo ningún antecedente sobre esta persona*”. Repite sus dichos a fojas 1316(18 de enero de 2002) y expresa que como analista y de búsqueda de información “*no recuerda cuántas veces acudió a los centros de tránsito de detenidos... “José Domingo Cañas”, en una o dos oportunidades*”. Iba a esos lugares toda vez que se le informaba por parte del Director que existían personas en cuyo poder se había encontrado documentación, armamentos o explosivos. Agrega que en varias ocasiones concurriró a esos lugares acompañado de Basclay Zapata quien cumplía funciones logísticas. Añade que es inexacto lo dicho por el Brigadier Espinoza en cuanto a que el declarante era jefe de la Brigada “Caupolicán”, “*es una confusión*”. A fojas 1330, (13 de septiembre de 2004) respecto de los detenidos desaparecidos cuyos nombres se le dan, manifiesta, en cuanto a Lumi Videla que lo dicho por Osvaldo Romo en el sentido de que él le dio muerte es falso, se enteró por la prensa. Nunca fue interrogado sobre ese caso. Ni siquiera su hermano Lautaro, con quien tuvo careo en el 8º Juzgado, dijo que él tenía nada que ver con la muerte de su hermana. No tiene antecedentes de Sergio Pérez Molina; además, ratifica todas sus declaraciones anteriores pero desea aclarar que cuando dice que “*desconocía la existencia de lugares de detención*” quiso decir que se refería a lugares de detención permanentes.

Vigésimo.- Que, el acusado **Miguel Krassnoff Martchenko** no reconoce intervención en los delitos descritos en el fundamento cuarto que antecede, esto es, en el delito de homicidio calificado, cometido en la persona de Lumi Videla Moya y en el delito de secuestro calificado de Sergio Pérez, sin embargo existen en su contra los siguientes elementos de convicción:

a) Atestación de Gastón Lorenzo Muñoz Briones de fojas 194 quien fue detenido el 11 de septiembre de

1973 y trasladado hasta el centro de detención de “José Domingo Cañas”, donde mandaba Marcelo Moren; otro agente que conoció en este lugar fue **Miguel Krassnoff**, porque lo torturó personalmente. Asevera que en este recinto estuvo detenido junto a Lumi Videla.

b) Dichos de Osvaldo Romo Mena, de fojas 38(17 de febrero de 1993)(“Cuaderno reservado con testimonio

de Luis Muñoz y otro”), quien expresa que la detención

de Sergio Pérez fue ordenada por **Krassnoff**, jefe de “Halcón”. En el cuartel “Ollagüe”(“José Domingo Cañas”) fue interrogado por **Krassnoff** quien dirigía el

interrogatorio, Permaneció dos días en “Ollagüe” en manos de la DINA. Después aquel quiso entregar al deponente información sobre el lugar en que se encontraba gran cantidad de armamento y fueron con el “Troglo”. “*Cuando el chico entregó eso yo sentí que como que se quebró, se notaba mal... y nos pidió que lo lleváramos al hospital*”. Añade que “Troglo” decidió llevarlo al hospital de la DINA de Rinconada de Maipú, dieron cuenta a **Krassnoff**; allí lo entregaron a dos funcionarios en una camilla, no lo volvió a ver, cree que murió en ese lugar. Agrega que era muy terco “*y es posible que algunos de los de “Halcón” le haya dado duro...golpes o corriente...*” Añade, a fojas 364, (6 de octubre de 1993) efectivamente, “*yo usé un tiempo el reloj del chico Pérez y esto ocurrió así: ocurre que el reloj mío tenía mala la correa*

de cuero. En esos días se produjo la detención de Sergio Pérez y cuando recién estaba preso en el cuartel yo lo vi, conversamos y entonces **Krassnoff** me pasó el reloj diciéndome que yo lo usara; yo lo asocié al tiro con el del chico Pérez. Yo empecé a usarlo enseguida y de ahí (estábamos en Ollahue) fui a ver a la Lumi Videla, le mostré la mano y ella lo reconoció, diciéndome que era de Sergio Pérez”. Explicada que más adelante lo devolvió pero **Krassnoff** le ordenó dárselo a Basclay

Zapata. “...En todo caso “el chico Pérez” no fue enterrado en “Terranova”...quedó en Rinconada de Maipú y de ahí no supe cual fue su destino final...si yo llegaba a preguntarlo, al día siguiente yo iba a aparecer muerto; la contra inteligencia era muy fuerte y peligrosa...” . A fojas 1636 (2 de enero de 2001) explica que el 16 de octubre de 1973 por el conocimiento que tenía de la estructura y componentes del MIR ingresó a la DINA, siendo empleado de MADECO y lo tenían “en comisión de servicios” y debía proporcionar antecedentes para la detención de los militantes del MIR y fue asignado al grupo “Halcón” dirigido por el teniente **Krassnoff**. Recuerda haber dado la pauta para que se interrogara a Sergio Pérez Molina en septiembre de 1974, el cual estaba detenido en el cuartel de “José Domingo Cañas”, era el esposo de Lumi Videla y estaba “encargado de depósito de armamentos del MIR”, a nivel nacional y era miembro de la comisión política; había caído en una “ratonera”. A fojas 1647 (16 de marzo de 2001) relata detalles de la detención de integrantes del MIR, concluyendo respecto de Lumi Videla Moya(1659) que fue muerta y trasladada hasta la Embajada de Italia. Añade, respecto de Sergio Pérez Molina, que “lo detuvo el grupo “Halcón 1” en una “ratonera” en la casa de la Lumi; cuando yo llegué al cuartel de José Domingo Cañas, cuyo jefe era **Ciro Torrè Sáez**, veo conversando a **Krassnoff** con el “Chico Pérez” y me dice “Mira quien está aquí”, era un hombre clave, fue quien me llevó a Cuba”. A fojas 1607, reitera que el grupo “Halcón 1” pertenecía a la agrupación “Caupolicán”. El jefe de la agrupación era **Krassnoff**. Las actividades de la agrupación era perseguir y detener a los miembros del MIR.

c) Testimonio de Ricardo Víctor Lawrence Mires(3550), quien con el grado de Subteniente de Carabineros fue destinado a la DINA en 1973. El cuartel de “José Domingo Cañas” funcionó desde 1974 a la par con “Villa Grimaldi” y “...a ese lugar se llevaba a los detenidos más importantes...” En cuanto a los detenidos que se le mencionan “Lumi Videla Moya fue detenida por la DINA, la trasladaron hasta “José Domingo Cañas”, en ese lugar la mataron, el día que murió Lumi Videla producto de la tortura se encontraba a cargo **Miguel Krassnoff**...”

d) Declaración de Luz Arce Sandoval de fojas 888 quien expresa que vio, en calidad de detenido, a Sergio Pérez Molina, en el cuartel de “José Domingo Cañas”. “...Lo cierto es que....estaba en poder de la DINA desde el 21 de septiembre de 1974. Yo, por lo demás, lo ví en el cuartel “Ollagüe” puesto que el mismo **Krassnoff** me hizo llevar a la oficina, donde él lo interrogaba, lo que hacía con frecuencia para demostrarle a Sergio Pérez, o al interrogado que fuere, que yo me encontraba viva. Ello porque yo los conocía a ellos y ellos a mí y al verme viva, continuaban colaborando...”

e) Versión de Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, (fojas 58 de Cuaderno de Documentos Tomo I), relativa a que el recinto secreto de “José Domingo Cañas” comenzó a funcionar a fines de agosto de 1974. La última dependencia era la oficina de **Miguel Krassnoff** y la pieza de torturas estaba frente a ella; había dos catres de “parrilla”. Vio a Lumi Videla y a Sergio Pérez en distintas oportunidades, después de haber sido torturados. En cuanto a la estructura orgánica, a la cabeza estaba Marcelo Moren, luego seguía como comandante del cuartel el Oficial de

Carabineros Ciro Torr , que despu s fue reemplazado por el capit n de Ej rcito Francisco Ferrer Lima. Mas abajo estaban los grupos operativos, entre ellos, “Halc n”, dirigido por **Krassnoff**”;

f)Deposici n de Lautaro Videla Moya, (fojas 226 del

Cuaderno de documentos Tomo I), quien expresa ser cu nado de Sergio P rez Molina y supo que  ste fue

detenido el 22 de septiembre de 1974 porque le hab an

“*montado una ratonera*” y fue trasladado a “Jos  Domingo Ca as”. En careo de fojas 472 con Basclay

Zapata expresa que a  ste, a **Krassnoff**, Moren, Romo

y a Espinoza les pregunt  por Lumi Videla y por Sergio

P rez y contestaron que a aquella la hab an detenido

pero “*se hab a asilado*” y **Krassnoff** le dijo que P rez

se les hab a muerto porque ten a una  lcera. Los antecedentes que obtuvo fueron que Lumi fue asesinada en “Jos  Domingo Ca as”.

Vig simo primero.- Que, en consecuencia, con el m rito de los precedentes testimonios que re nen las exigencias del art culo 459 del C digo de Procedimiento Penal debe estimarse legalmente acreditada la participaci n del acusado Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de autor, en los t rminos del art culo 15 N 1 del C digo punitivo, de los delitos de secuestro calificado perpetrado en la persona de Sergio P rez Molina y de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya, puesto que fue uno de los Oficiales de la DINA que ejercieron mando en el recinto de reclusi n de “ Jos  Domingo Ca as” y, principalmente, por ser el Jefe de la Brigada “Halc n”, unidad operativa de la DINA que estaba destinada a la represi n de los miembros del MIR.

Vig simo segundo.- Que, al declarar indagatoriamente, **Ciro Ernesto Torr  S ez**, a fojas 258, (16 de enero de 2001) expone que ingres  a la DINA en 1973 y fue enviado a un “*curso b sico de inteligencia*” en Rocas de Santo Domingo. En relaci n al cuartel de “Jos  Domingo Ca as” “*no ten a oficinas propias establecidas, pero llegaba espor dicamente...*”; all  conoci  a Luz Arce quien estaba en un cuarto muy reducido, ella le cont  que estaba detenida y ven a del Hospital por estar herida,  l le proporcion  un colch n y una frazada; no recuerda si en esa oportunidad, o posteriormente, ella le entreg  un organigrama del Partido Socialista. Desmiente lo que dice ella a fojas 696 de la causa rol N  9290 pues  l “*no fue jefe*” del cuartel de “Jos  Domingo Ca as”. No perteneci  a ning n grupo operativo; aclara que los grupos “ guila”, “Halc n”, “Tuc n” y “Vampiro” depend an de la Brigada “Caupolic n”, cuyo jefe era Moren Brito; el declarante era jefe de una Brigada log stica, con funciones bien espec ficas: todo lo que se incautaba, revistas, imprentas, veh culos, armamentos, explosivos, se inventariaba y se llevaba a esa Brigada. Tamb en ten a a su cargo buses de la ETC, el “rancho” de los funcionarios que iban a cursos de inteligencia y camiones para mudanza. A mediados de 1974 el jefe de “Jos  Domingo Ca as” era un tal “Max”, cuya fotograf a -N  65-, se le exhibe (alude a Francisco Ferrer Lima). All  hab a detenidos, pero s lo de paso; vio mujeres cooperando con la DINA: Carola, Luz Arce y la “Flaca Alejandra”. En “Villa Grimaldi” “*le correspondi  preocuparse del personal que limpiaba la piscina de ese recinto*”. No particip  en detenciones ni en interrogatorios. En la DINA no vio a Osvaldo Romo. En careo con Marcia Alejandra Merino Vega (13 de mayo de 2002) expresa haberla conocido como detenida en el cuartel de la DINA de “Jos  Domingo Ca as”, “*a quien vi en las oficinas. No la recuerdo en las celdas. Yo observ  que en “Jos  Domingo Ca as” hab a dos o tres mujeres presas, entre las que recuerdo a Luz Arce...Yo le pregunt  a Luz que porqu  se encontraba en ese lugar y ella me contest  que por*

razones políticas y que estaba muy aburrida, por lo que ella me solicitó hojas de oficio y un lápiz, con las cuales confeccionó un organigrama del Partido Socialista Regional Cordillera por su propia iniciativa y después me lo mostró, también escribió un trabajo sobre técnicas de interrogatorio que me pasó y yo hice llegar al cuartel general...Yo tenía un cierto grado de mando en “José Domingo Cañas” referido a la parte administrativa...nunca fui operativo...no fui reemplazado por el Capitán Ferrer...Yo no pasaba por las celdas de los detenidos que indica la señora Marcia Merino...Yo no vi detenidos, solamente vi detenidas a tres mujeres...” A fojas 264 (21 de octubre de 2002) agrega, en cuanto a Lumi Videla, que, por la prensa, tomó conocimiento que el cadáver de una persona con ese nombre había sido, presumiblemente, lanzado al interior de la Embajada de Italia. A fojas 1100(13 de junio de 2002) reitera sus dichos respecto a su encuentro con Luz Arce en “José Domingo Cañas”, agregando que la ayudó por el problema que tenía en cuanto a la tuición de su hijo de tres años, que quedó con la abuela materna y no con el padre. Concluye que en ese recinto no estuvo más que “quince días”. No recuerda la distribución en el inmueble. A fojas 1106 (16 de enero de 2001) repite que a “José Domingo Cañas” llegaba esporádicamente. A fojas 3639 reitera sus dichos sobre sus destinaciones. Estuvo aproximadamente un mes en “Londres 38”. En el Cuartel de José Domingo Cañas vi detenidas a un grupo de mujeres y algunos hombres, que también estaban en tránsito para ser interrogados.....no alcancé a estar un mes”.Lo que rectifica a fojas 3741 en que reconoce que estuvo desde marzo a septiembre de 1974, “ porque me derivaron a un cuartel denominado “Villa Grimaldi”...” A fojas 1112, (25 de agosto de 2004) expresa, en cuanto a Lumi Videla, que recuerda haber visto un grupo de mujeres en “José Domingo Cañas”y, entre ellas, puede haber estado Lumi Videla y luego apareció en la prensa la noticia de su muerte, que habría sido lanzada a la Embajada “por los mismos partidarios de ella”. En cuanto a Sergio Pérez no tiene antecedentes, pero recuerda que en la prensa apareció su caso, cree que era el marido de Lumi Videla. En careo de fojas 3339(23 de noviembre de 2005) con Marcelo Moren expresa que éste “era quien aparecía como la cabeza más visible, aparentemente, del recinto de José Domingo Cañas...presumo que Moren Brito debió ser quien estaba a cargo de la coordinación de las actividades y toma de decisión del recinto y ordenaría las detenciones, ya que los equipos no podrían haber trabajado por sí solos...él era el jefe operativo más visible...” Y ante la aseveración de Moren de no haber sido el jefe y que tiene entendido “que el jefe de dicho recinto era un oficial de Carabineros”, replica “Deseo precisar que se debe distinguir entre el jefe del inmueble y el jefe de toma de decisiones de equipo...” A fojas 3741(3 de julio de 2007) repite sus dichos en cuanto a su incorporación a la DINA”no se me dio la posibilidad de elección”. Se le asignaron labores logísticas; estuvo en el cuartel de “Londres 38” con personal de Carabineros; pero comenzó a llegar personal de civil que no se identificó. Luego llegó el Mayor de Ejército Moren Briito el cual en una ocasión ordenó a dos capitanes de Carabineros que fusilaran a unos detenidos, como se negaran, los devolvió a su institución. A raíz de ello el deponente pidió su reintegro institucional, pero no fue aceptado. Diariamente le llegaban órdenes confidenciales del Cuartel General de la DINA, en su mayoría denuncias anónimas que debían investigarse, no se trataba de acciones operativas. Al recinto llegaban detenidos llevados por personal del Ejército. Añade que era el jefe “pero del personal de Carabineros, por ser el más antiguo...” En marzo o abril de 1974 se le ordenó hacerse cargo de una casa de “José Domingo Cañas”; debía habilitarla como casa de alojamiento pero Marcelo Moren, con sus “operativos” de la Brigada “Caupolicán” y los grupos “Águila” y “Halcón” se instalaron allí “con el objetivo de trabajar exclusivamente el MIR”. Reitera haberle proporcionado un colchón y frazada para Luz Arce Sandoval. Le permitió hablar, por teléfono, con su madre; ella le pidió hojas y lápiz para

“realizar unos trabajos, después supe que era muy buena retratista.....posteriormente, hizo un trabajo de análisis muy bueno...Moren y Krassnoff se dieron cuenta de la importancia y los conocimientos que tenía...y la trabajaron psicológicamente para que les colaborara en conocimiento e individualización de los miembros del MIR...Comenzó a trabajar directamente con Krassnoff y Moren...Yo cuando estaba en reparaciones y habilitando esta casa, que todavía no era recinto detención y al conversar con Luz Arce según lo declarado por ésta, yo le habría dicho que era el jefe, si yo lo he dicho, pero esto se refería al personal de Carabineros y ser el más antiguo...En ningún caso esta aseveración de la señora Arce debe tomarse como que yo era el Jefe del cuartel...” Agrega que el 17 de agosto de 1974 fue enviado a Colombia, con pasaporte a nombre de “José Elías Troncoso” A su regreso, en septiembre, encontró allí al capitán Maximiliano Ferrer Lima, el cual no le fue presentado y al representarle esa situación a Moren éste reaccionó violentamente, por lo cual al deponente se fue a Maipú. Por la prensa supo de la muerte de Lumi Videla, a quien no conoció; en cuanto a Dagoberto Pérez, “Chico Pérez”, se decía y era un rumor que le había dado muerte Marcelo Moren y lo habrían ido a enterrar a Maipú. Repite que Lumi Videla forzosamente debe haber sido secuestrada por los grupos operativos “Águila” o “Halcón” que componían esa Brigada al mando de Marcelo Moren; existía prohibición absoluta que cualquier otra agrupación investigara al MIR ya que según Moren era el único autorizado a detener. Reitera que “José Domingo Cañas” *en ningún momento fue lugar de detención a pesar de que los “operativos” llevaban gente detenida pero todos éstos después eran llevados al campamento de detenidos “Cuartel Cuatro Álamos” y desde este recinto eran sacados y vueltos a llevar las veces que fuere necesario...*. Concluye que existe un documento en que se informa que el declarante habría sido reemplazado en el recinto de “José Domingo Cañas” a fines de septiembre o a comienzos de octubre de 1974 *por lo que yo forzosamente no pude haber regresado el 4 de noviembre a darle muerte a estas personas”*.

Vigésimo tercero.- Que, no obstante la negativa de **Ciro Torrè Sáez** en reconocer su participación, en el delito de secuestro calificado de Sergio Pérez Molina, existen en su contra los siguientes elementos de convicción:

1) Sus propios dichos en cuanto en su última declaración(3741) reconoce haberle dicho a Luz Arce

que él era el “**Jefe**” (de “José Domingo Cañas”), aunque en el sentido de que era *“el más antiguo de los carabineros”*; además, reconoce haberle proporcionado a Luz Arce papel y lápiz, lo que aquella empleó, según Marcia Merino(3276), para hacerle a Torrè *“retratos hablados”* de miembros del Partido Socialista para facilitar su aprehensión.

2) Su mendacidad:

I) En cuanto a que estuvo en el recinto de José Domingo Cañas sólo un mes (dichos de fojas 3639 del 19 de octubre de 2001), lo que rectifica a fojas 3741(el 3 de julio de 2007) en que reconoce que estuvo allí durante siete meses, desde marzo a septiembre de 1974.

II) Respecto a que “José Domingo Cañas” no era recinto de reclusión, lo que es desmentido por todo los testigos que deponen en autos, según lo explicitado en los fundamentos precedentes:

a) Sonia del Carmen Acuña Chandía, (146), quie señala que estuvo detenida en ese cuartel desde el día

12 de octubre de 1974 hasta el día 23 del mismo mes y año;

b) Gastón Lorenzo Muñoz Briones(194) desde el 11 de septiembre de 1974 hasta diciembre de ese año.

c) Lautaro Robin Videla Moya(198) desde el 10 de

febrero hasta agosto de 1975.

d) Félix Edmundo Lebrecht Diaz-Pinto (203) desde el 30 de septiembre al 23 de octubre de 1974.

e) Rosa Elvira Lizama Leiva (692) desde el 3 de febrero de 1975 al 1° de octubre del mismo año.

f) Luis Humberto Lillo Ahumada (706) desde el 28 de octubre al 4 de noviembre de 1974

g) Graciela Scarlett Mathieu Loguercio (708) desde el 15 de julio de 1974 al 21 de marzo de 1975.

h) Hortensia Patricia Glave del Villar (716) desde el 4 de octubre de 1974 al día 16 del mismo mes y año.

i) Rosalía Martínez Cereceda (733) desde el 22 de septiembre de 1974 hasta noviembre de 1974.

j) Luis Humberto Lillo Ahumada (706) desde el 28 de octubre de 1974 hasta el 4 de noviembre de ese año.

k) Sergio Pérez Molina, la víctima del secuestro, desde el 22 hasta, al menos, el 27 de septiembre de 1974.

l) Lumi Videla Moya, víctima del homicidio, desde el 22 de septiembre al 3 de noviembre de 1974.

3) Atestación de Ricardo Víctor Lawrence Mires (3550), quien, con el grado de Subteniente de Carabineros, fue destinado a la DINA en 1973. Cumplió funciones en “Londres 38” y en marzo de 1974 se cambiaron a “Villa Grimaldi”; allí existieron dos agrupaciones: “Brigada Caupolicán” y “Brigada Purén”; la primera se subdividía en agrupaciones que tenían como objetivo la represión del MIR. El declarante era el jefe de la llamada “Águila”. El cuartel de “José Domingo Cañas” funcionó desde 1974 a la par con “Villa Grimaldi” y “...a ese lugar se llevaba a los detenidos más importantes...” En cuanto a los detenidos que se le mencionan “Lumi Videla Moya fue detenida por la DINA, la trasladaron hasta “José Domingo Cañas”, en ese lugar la mataron, el día que murió Lumi Videla producto de la tortura se encontraba a cargo Miguel Krassnoff. Se rumoreaba que Willeke Floel había estado presente en la tortura en que murió Lumi Videla. Yo detuve al hermano de ella, Lautaro Videla. Sergio Pérez Molina, sé que era intensamente buscado por pertenecer al Comité Central del MIR...”. Añade a fojas 3557 que en “José Domingo Cañas” hubo varios jefes que rotaban; recuerda a Francisco Ferrer Lima, Marcelo Moren Brito; a **Ciro Torr ** lo vio en ese recinto.

4) Testimonio de Osvaldo Romo Mena, respecto de Sergio Pérez Molina, quien fue detenido el 22 de septiembre de 1973 en su domicilio y conducido a “José Domingo Cañas” y que “lo detuvo el grupo “Halc n I” en una “ratonera” en la casa de la Lumi; cuando yo llegu  al cuartel de Jos  Domingo Ca as, cuyo jefe era **Ciro Torr  S ez**...” Reitera sus dichos a fojas 1660, sealando los lugares de detenci n de la DINA y la composici n de los grupos operativos de “Caupolic n”, comandada por Marcelo Moren, entre ellos la brigada “Pur n” dirigida por **Ciro Torr **, “quien era operativo y no como suele decir que se dedicaba a resguardar las propiedades incautadas”.

5) La inculpac n de Marcia Alejandra Evelyn Merino Vega, en diligencia de careo, fotocopiada a fojas 3276, en cuanto expresa: “Reconozco a la persona que se encuentra a mi lado como el **Capit n** **Ciro Torr **, a quien conoc  en el cuartel de la DINA de “Jos  Domingo Ca as” cuando llegu  ah  detenida la segunda quincena de agosto de 1974. Recuerdo claramente al se or Torr  cuando fui llevada a una celda en que se encontraba detenida Luz Arce y el

Capitán Torr  le fue a conversar en varias oportunidades sobre personas del partido Socialista, al que Luz Arce pertenec a. Luz Arce le confeccionaba al Capit n Torr  retratos hablados y organigramas del Partido Socialista. No tengo claro en que fecha el Capit n Torr  fue reemplazado en el mando de “Jos  Domingo Ca as” por el Capit n Ferrer...Mientras yo estuve en “Jos  Domingo Ca as” no vi dar  rdenes a otras personas al Capit n Torr . No s  que funci n cumpl a el Capit n Torr  en “Jos  Domingo Ca as” en su calidad de Comandante del cuartel, a quien ve a visitar y conversar en su celda con Luz Arce...Adem s el Capit n Torr  cuando se dirig a a la celda donde me

*encontraba con Luz deb a necesariamente pasar un pasillo muy estrecho, de 1,20 mt. de ancho aproximadamente, pasaba por la celda donde se encontraban los dem s detenidos, por lo que le consta que ese lugar se trataba de un centro de detenci n y tortura clandestino de la DINA....El se or Torr  no pod a ignorar lo que pasaba en “Jos  Domingo Ca as” que era un recinto peque o...Los guardias cuando torturaban pon an m sica de radio con un volumen muy fuerte para aplacar los gritos de dolor y esto tiene que haberlo  ido el se or Torr . Si el se or Torr  estaba a cargo de los pertrechos tiene que haber prove do al cuartel de “Jos  Domingo Ca as” de todos los elementos necesarios para la mantenci n de los detenidos, con lo cual tambi n tomaba conocimiento del n mero de detenidos...”. A fojas 58 (Cuaderno de documentos Tomo 1), expresa que el recinto secreto de “Jos  Domingo Ca as” comenz  a funcionar a fines de agosto de 1974. En cuanto a la estructura org nica, a la cabeza estaba Marcelo Moren, luego segu a como **comandante del cuartel el Oficial de Carabineros** **Ciro Torr **, que despu s fue reemplazado por el capit n de Ej rcito Francisco Ferrer Lima.*

6)Versi n de Daniel Valent n Cancino Varas(3284)en cuanto haber sido destinado, siendo miembro de la

Polic a de Investigaciones, a la DINA, en abril de 1974; lo “asignaron al Grupo “Vampiro” que estaba a cargo de un funcionario de Carabineros de nombre **Ciro Torr **...se hizo una organizaci n del grupo que iba a estar destinado a investigar y detener gente del Partido Socialista...en el lapso de abril a noviembre de 1974 en una ocasi n junto a otros cuatro funcionarios de Investigaciones nos enviaron al cuartel de la DINA ubicado en “Jos  Domingo Ca as”, en donde nos tuvieron en una habitaci n peque a...”

7)Dichos de Luz Arce Sandoval(3288)quien fue detenida el 17 de marzo de 1974 por agentes de la

DINA y pas  por diferentes recintos de detenci n, “Londres 38”, “Villa Grimaldi” y “Tejas Verdes”; explica que el 12 de septiembre de 1974 “soy llevada al recinto de la DINA ubicado en calle Jos  Domingo Ca as, al que le dec an “Ollag e”...era un centro de detenci n que reci n se estaba habilitando. Ah  se me presenta a **Ciro Torr **, que era **Jefe** del local, que me pareci  una buena persona, hasta un poco ingenua, cre a todo lo que yo le dec a, que no siempre era la verdad...**Torr ** manejaba el cuartel de “Ollag e” como si fuera una Comisari ...Aproximadamente a fines de octubre de 1974 es sustituido Torr  de la jefatura de Jos  Domingo Ca as por Francisco Ferrer Lima ...”.

8) Atestaci n de Marcelo Moren Brito en careo con Torr  S ez, de fojas 333, quien niega haber sido Jefe en “Jos  Domingo Ca as y concluye “tengo entendido que el jefe de dicho recinto era un oficial de Carabineros”.

9)Hoja de Vida de **Ciro Ernesto Torr  S ez**:

(Fojas 3710) que se ala: “08.04-1974 Comisi n de Servicio. Por decreto N 656 del **08.04-1974** autoriza al Teniente Sr. **Ciro Ernesto Torr  S ez** para desempe arse, a contar de esta

fecha en la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional B.O.2447 – 54249.”

(Fojas 3711):” 14 VII 974: Procedencia: Desde la 23.a Comisaría de la Prefectura Santiago Oriente de Pregeant, a contar del 24.VII.974, según Telef. Mov. Pers. P.1. N°912 de 11.VII.-974 y Resol. en trámite, B/O.2462-54785, quien pasará agregado a **DINA**”.

10) Acta de Inspección personal del tribunal al episodio denominado “Antonio Llidó” de que conoce el Ministro de fuero señor Jorge Zepeda Arancibia en cuanto, a fojas 404, se constata que rola documento de la Inspectoría General de Investigaciones informando que los Jefes del Centro de reclusión denominado “José Domingo Cañas” u “Ollagüe” durante los meses de septiembre y octubre de 1974, fueron **Ciro Torrre Sáez** y, luego, Francisco Maximiliano Ferrer Lima. El documento se fotocopia a fojas 2039. En otro oficio del Ministerio de Defensa Nacional N°1139, fotocopiado a fojas 2041, se informa que la Policía de Investigaciones tiene antecedentes de que el **comandante** del Cuartel Ollagüe” en septiembre de 1974 había sido el capitán de Carabineros **Ciro Torrre Sáez**, cargo que habría desempeñado hasta la llegada de Francisco Ferrer Lima, a principios de octubre de 1974.

Vigésimo cuarto.- Que, en consecuencia, con el mérito de los testimonios analizados, que reúnen los requisitos del artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, debe estimarse legalmente acreditada la participación del acusado **Ciro Torrre Sáez** en calidad de autor del delito de secuestro calificado de Sergio Pérez Molina. En efecto, durante la aprehensión de este último, el 22 de septiembre de 1974, ejercía sus funciones, como finalmente lo ha reconocido, a fojas 3741, en el recinto de reclusión de “José Domingo Cañas” y están todos los testigos contestes en que él era Jefe del cuartel.

En cambio, respecto del homicidio de Lumi Videla si bien se desempeñaba en esa misma calidad durante la aprehensión de aquella, el 21 de septiembre de 1974, no resulta acreditado que en el homicidio calificado perpetrado en la persona de la misma víctima el 03 de noviembre del mismo año, hubiera participado en calidad de autor, al tenor del artículo 15 del Código Penal, ni tampoco que hubiera cooperado a la “*ejecución del hecho*”, en los términos del artículo 16 del mismo texto, puesto que en esa fecha ya había sido reemplazado, en su calidad de Jefe del recinto de reclusión, por Francisco Ferrer Lima, según lo han manifestado en el proceso tanto Marcia Merino como Luz Arce. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, debe absolversele del cargo que se le atribuye en la acusación de oficio y en las adhesiones a la misma.

Vigésimo quinto.- Que, al declarar indagatoriamente **Basclay Humberto Zapata Reyes**, a fojas 1718, (19 de octubre de 2001) menciona los jefes de los diferentes recintos e integrantes de los grupos operativos de la DINA y expone que no tiene antecedentes respecto de Lumi Videla. Sin embargo, a fojas 1708, (14 de abril de 2004) manifiesta que comparece voluntariamente para decir todo lo que sabe sobre las acciones de la DINA. Ingresó al Ejército en 1968 como soldado 2° y fue destinado a la Dirección de Inteligencia Nacional en diciembre de 1973. Lo enviaron durante un mes a “Rocas de Santo Domingo”. Luego fue trasladado a “Rinconada de Maipú” y debía presentarse al Cuartel General de la DINA donde se hacía la pauta de trabajo. Le entregaban alimentación que debía llevar hasta el cuartel de calle Londres. A mediados de 1974 alguien le dio la orden de ir a un lugar determinado, en apoyo de una detención de una persona de apellido Chanfreau; condujo el vehículo junto con Osvaldo Romo y el operativo era dirigido por Miguel Krassnoff, quien era el jefe del Cuartel de calle Londres. Después comenzó a recibir órdenes de acudir a otros operativos, a practicar allanamientos y

detener personas; quien siempre le daba las órdenes era Krassnoff y generalmente iba con Osvaldo Romo. Añade que *“Durante muchos años yo le he guardado lealtad a Miguel Krassnoff, pero él no ha asumido su responsabilidad en los hechos que participó, dejándonos a sus subalternos librados a nuestra suerte”*. El cuartel de Londres funcionó hasta agosto o septiembre de 1974, fecha en que todos se trasladaron a otro cuartel en calle José Domingo Cañas; el que más se identificaba como jefe era Krassnoff. Allí funcionó hasta fines de 1974, en que todo el contingente se trasladó a “Terranova” o “Villa Grimaldi”. Identifica como jefe al coronel Marcelo Moren, le decían el “Ronco” porque era muy gritón y alocado. Siguieron operando como jefes Krassnoff y otros. A su nivel no se hacía ningún comentario sobre el destino de los detenidos que desaparecieron. Los que tienen que saber hacia dónde se los llevaron son los jefes de los cuarteles. *“En DINA nadie se mandaba solo, todo lo que se hacía era porque provenía de una orden de un superior”*. Añade que meses atrás conversó con Krassnoff y le representó que no hubiere asumido sus responsabilidades y el otro le dijo que lo dejaba en libertad de acción y por ello hace esta declaración. A fojas 1731 (28 de abril de 2004) reitera que perteneció al grupo “Halcón”, con Tulio Pereira y Romo y las órdenes las daba Krassnoff. A fojas 1736(5 de mayo de 2004) respecto de los detenidos que se le nombran, repite que a Lumi Videla no la conoció, sólo escuchó hablar de ella en un careo que tuvo con un hermano. A Sergio Pérez tampoco lo conoció.

Vigésimo sexto.- Que, no obstante la negativa de **Basclay Humberto Zapata Reyes** en reconocer su participación, en el delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya, existen en su contra los siguientes elementos de convicción:

1. Sus propios dichos en cuanto a fojas 1708 expone que en 1974(luego de participar en la detención de Chanfreau) comenzó a recibir órdenes de acudir a operativos, a practicar allanamientos y detener personas; quien siempre le daba las órdenes era Krassnoff y generalmente iba con Osvaldo Romo. A fojas 1731 explica que perteneció al grupo “Halcón”, junto con Tulio Pereira y Osvaldo Romo.

2. Testimonio de León Eugenio Gómez Araneda, (de fojas 235, fotocopiado de la causa rol N° 781-04 del 2° Juzgado Militar de Santiago), relativo a que fue detenido y al medio día del 20 ó 21 de septiembre estaba en “José Domingo Cañas” y llegó Romo, quien había salido en la mañana a “porotear” con la “Flaca Alejandra” y el “**Troglo**” (**Zapata**) y éste, eufórico, dijo, que habían agarrado a la mujer del “Chico Pérez”, Lumi Videla.

3. Declaración de Osvaldo Enrique Romo Mena, de fojas 1607, quien explica que el grupo “Halcón 1” pertenecía a la agrupación “Caupolicán”. El jefe de la agrupación era Krassnoff. Las actividades de la agrupación era perseguir y detener a los miembros del MIR. El jefe de “Halcón 1” era **Basclay Zapata**, apodado “Troglo”. Los motoristas eran “**Troglo**” y Pereira. A fojas 215, expresa que Lumi Videla fue detenida cerca del 18 de septiembre de 1974 en el paradero 11 de la Gran Avenida por un dato que dio Marcia Merino, con quien iba el deponente en una camioneta conducida por **Blasclay Zapata**, quien, cuando Marcia le mostró a Lumi, la cual caminaba por la calle, hizo una maniobra, la otra arrancó pero la siguieron y la aprehendieron. Fue llevada al cuartel de “José Domingo Cañas”.

4. Minuta de servicios de Basclay Humberto Zapata Reyes, de fojas 3237, en cuanto haber sido destinado el 22 de febrero de 1974 al Comando en Jefe del Ejército.

Vigésimo séptimo.- Que, en consecuencia, debe estimarse legalmente acreditada la participación del acusado **Basclay Humberto Zapata Reyes**, en calidad de **cómplice** del delito de homicidio calificado perpetrado en la persona de Lumi Videla Moya, puesto que, como lo reconoce, y lo corrobora Osvaldo Romo, a fojas 215, colaboró en las maniobras destinadas a la aprehensión de Lumi Videla, esto es, *"cooperó a la ejecución del hecho por actos anteriores"*, al tenor del artículo 16 del Código Penal, modificándose, de esta manera, la participación de autor que se le atribuye en la acusación de oficio.

Contestaciones a la acusación de oficio y a las adhesiones a ella.

Vigésimo octavo.- Que, la defensa de **Ciro Torr  Sáez**, en el primer otros  de fojas 2652, expresa que su mandante debe ser absuelto pues no existen, dentro de la investigaci n, elementos que determinen que Torr  hubiera tenido **participaci n** de ning n tipo en el posterior homicidio de Lumi Videla ni en el de secuestro calificado de Sergio P rez Molina; a ade que pareciera ser que la imputaci n de autor radica en atribuir a su defendido la **calidad de jefe** de un cuartel que se califica de clandestino, en circunstancias que el jefe fue siempre Marcelo Moren y, en otras oportunidades, Maximiliano Ferrer. Analiza las pruebas mencionadas en la acusaci n para concluir que Torr  no era jefe y nunca lo fue del cuartel y que las detenciones de Lumi Videla y de Sergio P rez, entre otros, ocurrieron en los  ltimos meses de 1974 y Torr  estuvo en el recinto hasta principios de **octubre de 1974**. Al contestar las acusaciones particulares agrega que nada nuevo agregan al adherirse; la no presentaci n de demanda civil en contra de Ciro Torr  ser a indicio de que los acusadores no lo consideran responsable. Rechaza, finalmente, las circunstancias agravantes que invocan los querellantes.

Vig simo octavo.- Que, la defensa de Basclay Zapata Reyes, en el primer otros  de fojas 2697, solicita su absoluci n fundado en la **cosa juzgada**, la **amnist a** y la **prescripci n**, para lo cual da por reproducido lo expuesto en lo principal de su escrito, en cuanto a las excepciones de previo y especial pronunciamiento, que le fueron desechadas por resoluci n que se lee a fojas 3112. A ade la falta de **participaci n** por parte de su mandante en la detenci n y posterior muerte de Lumi Videla.

En subsidio, invoca la causal de justificaci n del art culo **10 N 10** del C digo Penal y, tambi n en subsidio, la de la no exigibilidad de otra conducta, en atenci n a que debi  actuar bajo una obediencia debida, fundada en el art culo **214** de C digo de Justicia Militar.

Para el caso de desecharse sus alegaciones, invoca la existencia de las siguientes atenuantes de responsabilidad: La media prescripci n, establecida en el art culo **103** del C digo Penal; expresa que, en la especie, el plazo empez  a correr desde el 03   04 de noviembre de 1974, por lo que ha transcurrido con creces m s de la mitad del tiempo de la prescripci n, debiendo considerar el tribunal que concurren, a lo menos, tres circunstancias atenuantes de responsabilidad muy calificadas y ninguna agravante.

Por otra parte, alude a la atenuante el art culo **11 N 6** del C digo Penal y la del art culo **211** del C digo de Justicia Militar, que pide que se considere como **muy calificada**.

Vig simo noveno.- Que, la defensa de Marcelo Moren Brito, en lo principal de fojas 2725, expresa que su mandante debe ser absuelto por concurrir en la especie la aplicaci n de la ley de **amnist a** y de la **prescripci n**. Se ala las normas del art culo 93 n meros 6  y 94 del C digo Penal que establecen como per odo m ximo de prescripci n de la acci n penal un plazo de 15 a os. Adem s, estima que corresponde la aplicaci n de la amnist a consagrada en el decreto ley N 2.191, de 1978, en relaci n con el art culo 93 N 3 del C digo Penal. A ade que la Constituci n Pol tica, en su art culo 60 N 15, entrega al legislador la facultad de otorgar por ley

la amnistía y siendo la amnistía una causal objetiva de extinción de la responsabilidad penal sus efectos se producen de pleno derecho. Por otra parte, expresa que en el proceso no existen elementos que determinen la **responsabilidad** de su representado en los hechos investigados. En seguida invoca la circunstancia eximente de responsabilidad contemplada en el artículo **10 N°10** del Código Penal, por haber obrado en el cumplimiento de un deber ordenado por sus superiores.

En subsidio, invoca las circunstancias atenuantes del artículo **11 N°6** del mismo cuerpo legal y para el caso de estimar incompleta la eximente del citado artículo 10 N°10 pide se le considere como atenuante en virtud del referido artículo **11 numeral 1°**. En subsidio, pide se apliquen los artículos 67 y 68 bis del Código Penal.

Respecto de las adhesiones a la acusación se agrega que las leyes y Tratados Internacionales invocados para la recalificación y ampliación del auto acusatorio pertenecen a cuerpos legales *“que de manera alguna se encuentran vigentes o han sido aprobados por las instancias debidas en el territorio de la República”*, por lo que no se pueden aplicar.

Trigésimo.- Que, la defensa de Manuel Contreras Sepúlveda, en el tercer otrosí de fojas 2795, al contestar la acusación de oficio y las adhesiones a ella, expone que las querellas de fojas 300 y 519 y la adhesión a la querella de fojas 1832 nada dicen sobre su mandante. Añade que las imputaciones de diversos testigos del MIR señalan como autor del homicidio de Lumi Videla a Osvaldo Romo. Tampoco los testigos que estuvieron detenidos en José Domingo Cañas mencionan, entre los presentes, a Juan Manuel Guillermo Contreras. Dice acompañar documentos que *“prueban la imposibilidad de que se haya detenido a doña Lumi Videla Moya en el Cuartel de José Domingo Cañas en el mes de agosto o septiembre de 1974”* y ellos son relativos a la **expropiación** del inmueble de José Domingo Cañas 1367, de diciembre de ese año.

En subsidio, expresa *“debe **recalificarse** el delito de don Sergio Pérez Molina, a homicidio calificado”*, atendidas las declaraciones de Marcia Merino de fojas 227 vta. y de Samuel Fuenzalida de fojas 240.

Trigésimo primero.- Que, la defensa de Francisco Ferrer Lima, en el tercer otrosí de fojas 2833, al contestar la acusación de oficio y las adhesiones, expone que no existe testigo alguno que le impute **participación** en el homicidio calificado a su mandante, el cual, al momento de ocurrir los hechos se encontraba en Brasil, desde el 27 de agosto hasta el 23 de septiembre; y desde el 3 de octubre al 23 de diciembre de 1974 cumplió una comisión de servicio ordenada por el coronel Contreras. Añade que en el proceso existen declaraciones de miembros del MIR y del PC que señalan que Osvaldo Romo mató a Lumi Videla y exculpan a su representado. Testigos que estuvieron detenidos en “José Domingo Cañas” no mencionan entre los presentes a Francisco Ferrer. Pide se le absuelva de toda responsabilidad en dicho homicidio calificado.

Trigésimo segundo.- Que, la defensa de Christoph Georg Paul Willeke Floel, en el tercer otrosí de fojas 2865, al contestar la acusación fiscal, la acusación particular y las adhesiones a la acusación, expresa que no puede darse por acreditada su **participación** en el homicidio de Lumi Videla, por existir *“escasos antecedentes probatorios en contra de mi representado”* y menciona las declaraciones de Lautaro Videla Moya de fojas 198 y 207 y las de Amanda de Negri de fojas 774 y 945, las que desvirtúa; añade que en los libelos de fojas 300, 519 y 1832 no se le imputa conducta típica, antijurídica y culpable que pueda revestir los caracteres de delito. Agrega que diversos testigos señalan como autor del homicidio a Osvaldo Romo. Alude

a los dichos de los **testigos** que solicitó que declararan en autos, Braulio Garrido, Alfredo Mujica y Alejandro Burgos. Invoca los documentos relativos a la **expropiación** del inmueble de José Domingo Cañas que demostrarían lo aseverado por su mandante y acreditaban su inocencia.

Trigésimo tercero.- Que, la defensa de Miguel Krassnoff Martchenko, en el segundo otrosí de fojas 2928, al contestar la acusación de oficio y la adhesión a ella, solicita se dicte sentencia absolutoria a favor de su representado por cuanto estima que la acción penal en su contra se encuentra cubierta por la **prescripción, amnistiada** en virtud del DL.Nº2191 de 1978 y, además, en relación con el homicidio de Lumi Videla, beneficiado por la **cosa juzgada**. En seguida, describe *“Los hechos que efectivamente ocurrieron...la incontenible espiral de violencia y caos con la cual se encontraron las Fuerzas Armadas y de Orden, requirió de su parte una intervención enérgica y categórica para conseguir la pacificación del País y posterior desarrollo...Este titánico esfuerzo ameritaba la organización de estructuras que permitieran el inicio de la recuperación de Chile por lo que, entre otras, se crea la Dirección de Inteligencia Nacional con la misión fundamental de neutralizar elementos terroristas...El joven Teniente Miguel Krassnoff...es sacado sorpresivamente de su labor como Oficial Instructor de la Escuela Militar y destinado a cumplir misiones en la organización de seguridad recién creada...”* Se continúa que aun no existe la comprobación de ningún cargo procesal que lo **inculpe ciertamente** y de manera contundente en actividades relacionadas con violaciones a los derechos humanos de determinadas personas. Se añade que el Teniente Krassnoff no podía en su trabajo sino actuar conforme al ordenamiento legal y existen diferentes causas de justificación legal y supralegal. Agrega que la DINA **dejó de existir** en virtud del Decreto Ley 1877 de 13 de agosto de 1977 y los funcionarios públicos incorporados a ella dejaron de contar con los auxilios, recursos y apoyos necesarios *“para continuar con el secuestro”*, el que debe presumirse expirado al menos en la fecha en que ese organismo desapareció. La supuesta desaparición materia del delito de secuestro data de septiembre de 1974 y se excluye la hipótesis de que los responsables del delito hayan podido mantener a Pérez Molina hasta la fecha. Estima que la sola circunstancia *“que se ignore la existencia y el paradero de las personas cuyo desaparecimiento ha dado base a los cargos que a título de secuestro calificado se le han asignado al Brigadier...Krassnoff...no resulta procedente ante la realidad de las cosas...”*.

En otro párrafo se expresa que *“no existe el delito de secuestro calificado”*, en atención a la imposibilidad física de que el Sr. Pérez Molina esté secuestrado hasta el día de hoy como se pretende (*“ficción jurídica”*). Explica que el delito de secuestro claramente contiene un elemento normativo del tipo *“El que sin derecho”* y, en lo ocurrido en el cuartel “José Domingo Cañas”, se actuó *“con derecho”*; cita la ley de Control de Armas que los facultaba para allanar y detener y esas diligencias podían ser cumplidas por la Dirección de Inteligencia Nacional. Recuerda el texto del artículo 10 del Decreto Ley 521 que creó la DINA, pero explica que *“Este art. fue publicado en el Diario Oficial de circulación restringida, procedimiento autorizado cuando se trata de materias de la Defensa Nacional y de la Seguridad Nacional”*. Se cita, además, el D. L.109, de 1975, y el DS Nº 187 de Justicia para concluir que *“no se puede afirmar que al arrestar o detener a una persona, los miembros de dicho Organismo de Seguridad carecieran de la facultad legal y la autoridad para disponerlo, en consecuencia actuaban con derecho y dentro del marco legal vigente.”* En consecuencia, en los hechos de autos se actuó con derecho por los sujetos activos del delito, respaldados por la legislación vigente a la época.

Enseguida se alude a la “*Correcta calificación del delito*” y se estima que si los arrestos practicados por personal de la DINA infringen alguna disposición legal *no puede ser otra que la del artículo 148 del CP*”, en atención a que eventualmente la actuación del Teniente Krassnoff, empleado publico, habría consistido en un arresto o detención ilegal y arbitrario.

Luego arguye que su mandante no tuvo **participación** alguna en la detención de **Pérez Molina** y que no existe ningún elemento probatorio que lo inculpe respecto al homicidio de **Lumi Videla**. Concluye que en los interrogatorios de su mandante no se ha cumplido con lo dispuesto en los artículos 322 y 329 del Código de Procedimiento Penal porque se le preguntó sobre una lista de detenidos y no obstante que aparecen en ella los nombres de Lumi Videla y Sergio Pérez no se le preguntó acerca de “*las **circunstancias** en que ocurrieron los hechos...ni la forma en que mi representado habría participado en él...*”.

A continuación, invoca las siguientes circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal:

- 1) La media prescripción, establecida en el artículo **103** del Código Penal, por lo que el tribunal debe considerar que concurren a lo menos tres circunstancias atenuantes muy calificadas y ninguna agravante.
- 2) La contemplada en el artículo **211** del Código de Justicia Militar.
- 3) La eximente incompleta del artículo **11 N°1** el Código Penal, en relación con el artículo **10°N°10** del mismo cuerpo legal.

Trigésimo cuarto.- Que, en razón que las defensas de los acusados han planteado similares excepciones o alegaciones de fondo, con argumentos muy semejantes, y a fin de cumplir con el numeral 3° del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal y, al mismo tiempo, evitar repeticiones, se intentará desarrollarlas y resolverlas en forma conjunta, para lo cual se han distribuido aquellas en los siguientes acápite:

1)

Falta de participación.

Trigésimo quinto.- Que, las defensas de **Ciro Torré (2652)**, **Basclay Zapata (2697)**, **Marcelo Moren Brito (2725)**, **Juan Manuel Contreras (2795)**, **Francisco Ferrer (2833)**, **Miguel Krassnoff (2928)** y de **Cristoph Willeke (2865)** solicitan la respectiva absolucón de sus representados por estimar que no se encuentran acreditadas sus participaciones en el ilícito que se les imputa.

A)

No obstante, resulta procedente rechazar la respectiva petición, al tenor de lo explicitado en los considerandos señalados con precedencia, en cuanto analizan las probanzas existentes en contra de los acusados, las que han permitido tener por legal y fehacientemente probadas tales participaciones.

En efecto, respecto de los encartados que se indican se enunciarán los numerales de los fundamentos correspondientes:

- 1) Juan Manuel Contreras, Séptimo y octavo.
- 2) Cristoph Paul Willeke, Duodécimo y décimo tercero.
- 3) Francisco Ferrer Lima, Décimo quinto y décimo sexto.

- 4) Marcelo Moren Brito, Décimo octavo y décimo noveno.
- 5) Miguel Krassnoff Martchenko, Vigésimo primero y vigésimo segundo.
- 6) Basclay Zapata Reyes, Vigésimo séptimo y vigésimo octavo.
- 7) Ciro Torrè Sáez, Vigésimo cuarto, en su primer párrafo, en cuanto al secuestro calificado de Sergio Pérez, puesto que en seguida se le absuelve en cuanto a su participación en el homicidio calificado de Lumi Videla Moya.

B)

Por otra parte, conviene analizar otros antecedentes en los cuales las defensas pretenden fundamentar la falta de participación de sus mandantes en los ilícitos que se les atribuyen:

1) Los letrados que representan a Contreras y a Ferrer citan los dichos de Gloria Lazo Lazaeta (326), Claudio Herrera Sanhueza (344), Luz Arce Sandoval (352) y Oscar Zarricueta Lagos (962), que son fotocopias de testimonios prestados en el proceso rol N° 781-94 del Segundo Juzgado Militar de Santiago, pero todos resultan ser testigos de oídas quienes no precisan la fuente de su información. En efecto, Gloria Lazo expone: *"... En alguna parte oí también que Osvaldo Romo había matado a Lumi Videla..."*; Claudio Herrera señala: *"...El comentario que llegó de gente que venía detenida de José Domingo Cañas era que Osvaldo Romo le había dado muerte o habría participado en ésta en sesiones de tortura..."* Luz Arce añade *"...escuché a los guardias apodados "El Jote" y "El Rucio"-no identificados - que la había matado el "Guatón Romo"..."* Finalmente, Oscar Zarricueta sólo expone: *"La última noche, 03 de noviembre de 1974...Lumi se fue con Osvaldo Romo..."*.

En consecuencia, tales dichos no desvirtúan el mérito de los elementos de cargo existentes en contra de Contreras y Ferrer transcritos en los considerandos antes mencionados.

2) El defensor de Willeke Floel solicitó que se citara a prestar declaración a Braulio Lizardo Garrido Aguilera, Luis Alfredo Mujica Collao y a Alejandro Humberto Burgos de Beer; el primero, al deponer a fojas 2372, expresa que perteneció a la DINA, que Willeke estaba a cargo de la guardia del Cuartel de calle Belgrano, pero desconoce si aquel visitaba el cuartel de "José Domingo Cañas"; el segundo, a fojas 2382, señala que Willeke era comandante de la compañía del Cuartel General, pero desconoce si visitaba el cuartel de "José Domingo Cañas", cuya existencia el testigo desconocía; finalmente el último expone, a fojas 2374, que Willeke era comandante de la compañía de guardia del Cuartel General y no sabe si aquel visitó el cuartel de "José Domingo Cañas". Por ende, tales testimonios no contradicen ninguno de los elementos de cargo descritos precedentemente en contra de Cristoph Willeke.

2)

Detenciones practicadas acorde con el Derecho.

Trigésimo sexto.- Que la defensa de Krassnoff expresa que si su mandante actuó en los ilícitos que se le atribuyen lo hizo, en cuanto al secuestro calificado al tenor del artículo 141 del Código punitivo, *"con Derecho."* No obstante, de las circunstancias que se mencionan en el considerando tercero precedente aparece que la aprehensión de que se trata se hizo fuera de los casos señalados por el Decreto Ley N°521, por cuanto esta normativa, en su artículo 1° permitía *"la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país"* y en su artículo 10° (de carácter secreto) se permitía *"arrestar y trasladar"*

personas”, obviamente dentro de la legalidad existente. Por lo tanto, debió existir, en primer término, una orden de aprehensión judicial y un decreto exento del Ministerio del Interior que permitiera la reclusión, la cual, por otra parte, no podía prolongarse más de cinco días, en circunstancias que todos los detenidos individualizados en el fundamento segundo, mencionados, además, en el numeral II) del N°2 del fundamento vigésimo tercero, permanecieron un tiempo mucho más prolongado en ese recinto de reclusión, sin ponerse a disposición de la judicatura respectiva. Sobre este tópico más adelante, en el fundamento cuadragésimo, se explicitan los requerimientos de una detención legal.

3

Cosa juzgada.

Trigésimo séptimo.-Que, el apoderado de Basclay Humberto Zapata Reyes reitera, como excepción de fondo, la de la cosa juzgada(desechada como excepción de previo y especial pronunciamiento a fojas 3112 y siguientes) y lo propio efectúa la defensa de Miguel Krassnoff en el segundo otrosí de fojas 2928 y expresan que el proceso por el *”supuesto homicidio de Lumi Videla Moya fue también motivo de investigación por otros tribunales de la República”*, aludiendo al rol N° 130.923 del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, en que si dictó un sobreseimiento definitivo, ello fue revocado por una Sala de la Corte de Apelaciones, dando origen al recurso de queja N° 5.476 en el cual la Excm. Corte Suprema, el 30 de enero de 1996, resolvió que los hechos relacionados con la privación de libertad de la víctima y su posterior fallecimiento se encontraban sobreseídos en forma total y definitiva por aplicación del decreto ley N° 2191, sobre amnistía. Estiman que, de acuerdo con el artículo 433 N°4 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 408 N°7 del mismo Estatuto, debe absolverse a sus mandantes porque la cosa juzgada constituye una institución que vela por el respeto del principio *“non bis in idem”* que informa el derecho penal y porque la amnistía actúa sobre los hechos y favorece a todas las personas que en el futuro puedan ser acusadas, en una nueva causa que trate sobre lo que ya se amnistió.

Trigésimo octavo.- Que, no procede acoger lo pedido puesto que estudiado el proceso rol N° 130.923-79 del Tercer Juzgado del Crimen de esta ciudad se observa que ni Basclay Humberto Zapata Reyes ni Miguel Krassnoff Martchenko han sido *“absueltos por sentencia firme”*, como lo exige el artículo 408 N°7 del Código de Procedimiento Penal.

De la inspección personal del tribunal, cuya acta rola de fojas 748 a 758, resulta que el proceso N° 130.923 del Tercer Juzgado del Crimen, fue acumulado, como cuaderno separado en el rol N°781-94 del Segundo Juzgado Militar de Santiago; en dicha causa no hubo *“sentencia absolutoria”* respecto de los acusados Zapata y Krassnoff en relación con el delito cometido en la persona de Lumi Videla Moya, sino que, por el contrario, los únicos encausados fueron Marcelo Moren(fojas 2336) y Basclay Zapata(fojas 2342), como autores de los delitos de asociación ilícita y de secuestro calificado de Mónica Llanca; finalmente, a fojas 2459, se dictó sobreseimiento definitivo por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de Basclay Zapata *“en relación a la detención ilegal de Mónica Llanca, Sergio Pérez y Luis Guendelmann”*; en consecuencia, en la especie, no se ha producido la doble identidad, exigida por la doctrina y la jurisprudencia, que permita acoger la referida excepción de cosa juzgada, opuesta por los acusados Zapata y Krassnoff.

4

Delito de detención ilegal y no de secuestro.

Trigésimo noveno.-Que, por otra parte, respecto de la alegación de la defensa de Miguel Krassnoff, (*“Correcta calificación del delito”*-fojas 2984) relativa a estimar que si bien podría llegar a sostenerse que los empleados públicos, encargados del cumplimiento de las órdenes de detención o arresto, en su cumplimiento *“pudieran haberse excedido, no les es aplicable las disposiciones del art.141...De considerarse que los arrestos verificados por personal de la DINA infringen alguna disposición legal esta no puede ser otra que el art.148 del CP...”*

Cuadragésimo.- Que, tal pretensión debe ser rechazada tanto con el mérito de lo razonado en los apartados tercero, letra c) y cuarto de este fallo(hecho punible y calificación del ilícito) cuanto porque en el delito de secuestro se sanciona a quien, sin derecho, encerrase a otro privándole de su libertad; ahora bien, *“sin derecho”* involucra una infracción substancial al régimen de detención, importa una absoluta falta de legalidad en la detención o encierro, una ausencia de motivación suficiente; en cambio, la institución de la detención o arresto, aludida en el artículo 148 del Código punitivo, es de naturaleza jurídica, con fines y contenidos precisos y predeterminados, reglamentados en los artículos 251 a 272, 278 y 280 a 305 del Código de Procedimiento Penal; por ende, la detención inmotivada, *“sin derecho”*, transforma el delito en un secuestro y aunque la detención o encierro la realice un sujeto investido de autoridad, pero carente de legitimidad para llevarlo a cabo, se ejecuta un delito de secuestro. Además, en la especie, se habría retenido indebidamente a una persona con fines ajenos a las labores propias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, dirigidos a obtener información e inteligencia sobre el *“enemigo”*, identificación y ubicación para su eliminación física o traslado y cuyos miembros, vistiendo de civiles, si bien eran seleccionados dentro de las fuerzas militares, actuaban fuera de la estructura institucional de mando de las mismas.

Es lo que ha señalado, últimamente, en un caso similar la Excma. Corte Suprema: *“Para discernir el tipo donde debe insertarse la conducta del inculpado, es útil precisar que el funcionario no sólo debe actuar guiado por un interés en la cosa pública, sino que su intervención debe probar también objetivamente un importante grado de **congruencia** o **conexión** con el régimen o **procedimiento** regular de **privación de la libertad** individual. Lo esencial en este punto ha sido la obstaculización o libre desenvolvimiento de los procedimientos de control judicial o administrativos de la privación de libertad de una persona, lo que trae como consecuencia que el condenado no se encuentre en la situación del artículo 148 de la recopilación sancionatoria sino que en aquella del artículo 141...Así se ha estimado que son parámetros decisivos para determinarse cuál de las dos disposiciones es procedente aplicar, el observar que: a)se detenga en razón de la persecución de un delito; b)que se deje alguna constancia de la detención, y c)que se ponga al detenido a disposición de los tribunales de justicia. Faltando estos requisitos debe aplicarse el artículo 141, por lo que corresponde subsumir en dicho tipo la detención ilegal llevada a cabo con grave abuso del cargo por el funcionario.*(Fundamento 3° de la sentencia de reemplazo, de 24 de enero de 2007, del Rol N°1.427-05).

5

Amnistía y prescripción de la acción penal.

Cuadragésimo primero.-Que, las defensas de Marcelo Luis Moren Brito(fojas 2725); la de Basclay Zapata Reyes (fojas 2697) y la de Miguel Krasnoff Martchenko(fojas 2928)oponen las excepciones contempladas en los numerales 6° y 7° del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal.

Cuadragésimo segundo.- Que, las referidas defensas estiman que en atención a que los artículos 93 N° 6° y 94 del Código Penal establecen como periodo máximo de la **prescripción** de la acción penal un plazo de 15 años, procedería aplicar el instituto de la prescripción a los hechos investigados en autos; el artículo 95 del Código Penal establece que el término de la prescripción comienza a correr desde el día en que se hubieren cometido los presuntos delitos y como los sucesos investigados habrían transcurrido hace 32 años, desde el 21 de septiembre de 1974, habiéndose encontrado el cadáver de Lumi Videla el 4 de noviembre del mismo año, la acción penal habría prescrito y asimismo la responsabilidad penal por aplicación del artículo 93 N°6 del Código Penal.

Además, expresan que, como las acciones relativas a los hechos investigados se encuentran actualmente prescritas, debió haber hecho el tribunal una declaración al respecto, de oficio, de acuerdo con el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal.

Cuadragésimo tercero.- Que, en relación con la **prescripción de la acción penal** opuesta por las defensas antes mencionadas, procede recordar, en primer término, el fundamento 38° de la sentencia de la Excma. Corte Suprema, recaída en el ingreso rol N°517-2004 en que rechaza los recursos de casación en el fondo y en la forma interpuestas por los secuestradores de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez: *"En el caso de estudio, en el evento que los sentenciados expresaren en que lugar se encuentra la víctima, recién ahí comenzaría a contarse la prescripción a su favor, y si esta estuviere muerta, habría que determinar la data del fallecimiento para, en primer término, ver si se encontraba comprendida en el periodo amparado por la amnistía, y en caso de no estarlo, comenzar el cómputo de la prescripción. Pero en modo alguno pueden aplicarse estas instituciones al no haber cesado el estado delictivo en el cual incurrieron los secuestradores, toda vez que el injusto se ha mantenido"*.

Por otra parte, cabe agregar, que la prescripción, como se ha dicho, ha sido establecida más que por razones dogmáticas por criterios políticos, como una forma de alcanzar la paz social y la seguridad jurídica. Pero, en el Derecho Internacional Penal, se ha estimado que esta paz social y esta seguridad jurídica son más fácilmente alcanzables si se prescinde de la prescripción, cuando menos respecto de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Al respecto podemos remitirnos a los fundamentos señalados en el considerando quinto precedente en cuanto se razona en el sentido de que el homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla constituyó un crimen de lesa humanidad.

La comunidad internacional ha estimado que crímenes atroces como éstos son siempre punibles y por ello la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución N°2.391 del 26 de noviembre de 1968, que entró en vigor el 8 de noviembre de 1970, aprobó la *"Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad"*, en cuyo artículo 1°, letra a), se incluyó, expresamente, entre los crímenes de guerra, los contemplados en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg del 8 de agosto de 1945 y las "Infracciones Graves" enumeradas en los "Convenios de Ginebra" para la protección de las víctimas de guerra: *" Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946..."*

En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento

y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido.

Por ello, los “Convenios de Ginebra”, que serán analizados en el fundamento cuadragésimo séptimo, consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder “auto exonerarse” a su respecto.

Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la ya mencionada sentencia de la Excm. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa:

*”DECIMO SEPTIMO.-Que, debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que aunque no ha sido ratificada por Chile, surge en la actualidad con categoría de **norma de ius cogens** o principios generales de derecho internacional.*

Se ha reconocido la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno como sucedió con la incorporación como tratado de la Convención de Viena sobre los derechos de los Tratados, ratificado por Chile el 9 de abril de 1981, promulgado por Decreto Supremo N°381 de 1981, donde en su artículo 26 de la citada convención, reconociendo dicha primacía, indica que no puede invocarse ninguna razón legítima para atropellar el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas, lo que se corrobora en su artículo 27, en que se determina que un Estado Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Asimismo, procede recordar lo expresado por la doctrina, en cuanto a que el delito de secuestro, materia de la acusación de oficio de fojas 2506, tiene el carácter de permanente, esto es, se trata de un estado delictuoso que se prolonga en el ámbito temporal mientras subsista la lesión del bien jurídico afectado.

”En cuanto a su consumación, este delito es permanente, y se prolonga mientras dura la privación de libertad. Sólo al cesar ésta comienza a contarse el plazo de prescripción”. (Alfredo Etcheberry, "Derecho Penal", Editora Nacional Gabriela Mistral, Tomo III, página 254).

”La acción que lo consuma crea un estado delictuoso que se prolonga en el tiempo mientras subsiste la lesión del bien jurídico afectado. Su característica esencial es la persistencia de la acción y del resultado. Gráficamente, el delito instantáneo se representa por un punto y el permanente, por una línea”. (Gustavo Labatut, "Derecho Penal", Tomo I, 7ª edición, página 158).

*“...el agente encierra a su víctima y su conducta típica queda completa con ello, pero el encierro empieza a durar y puede durar más o menos según la voluntad del hechor. Esta mantención o subsistencia de la conducta típica plena, puede darse solamente en ciertos tipos que emplean un verbo denotativo de una conducta susceptible de duración. Así ocurre con los artículos 135, **141**, 142...224 N°5, 225 N°5 y 457, entre otros. Obsérvese como varios de ellos colocan la expresión “continuar” antes de la forma verbal indicativa de la acción típica, la que se usa en gerundio”.*

“En suma, la característica diferencial entre los delitos instantáneos y permanentes está en que los primeros quedan terminados cuando alcanzan la plenitud de los requisitos propios de la consumación, al paso que los segundos inician en ese momento una duración en el tiempo más o menos prolongada, en la cual la violación jurídica subsiste por la voluntad del sujeto activo...La gran importancia de esta clasificación queda demostrada por diversas particularidades que presentan los delitos permanentes, entre ellos destaca: La prescripción de la acción correspondiente a ellos no empieza a correr sino una vez que ha cesado la duración de

su estado consumativo”. (Eduardo Novoa Monreal, “Curso de Derecho Penal Chileno”. Editorial Jurídica de Chile, 1960, páginas 259 a 261).

Por lo tanto, mientras se prolongue tal situación no se puede, racionalmente, indicar el momento en que comienza el cómputo a que se refiere el artículo 95 del Código Penal.

Cuadragésimo quinto.- Que, las referidas defensas estiman que es procedente aplicar la **amnistía** consagrada en el Decreto Ley N°2.191, de 1978, en relación con el artículo 93 N°3 del Código Penal, puesto que su artículo 1° concede amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, por lo cual corresponde declarar su procedencia como causal de extinción de la responsabilidad penal en virtud del artículo 93 N°3° del Código Penal. Se añade que, por otra parte, en causas similares a ésta, se ha sostenido que los delitos investigados serían imprescriptibles y no amnistiables por disponerlos así la normativa internacional. Sin embargo, arguyen que los Acuerdos que se mencionarán son inaplicables. Así la “*Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio*” no es aplicable porque en la legislación nacional no se ha establecido la pena que habría debido corresponder, al tenor del artículo 19 N°3, incisos 7° y 8° de la Constitución Política de la República. Los “*Convenios de Ginebra*” tampoco lo son porque su aplicación se limita específicamente a los casos de guerra de carácter internacional declarada y a los conflictos armados o bélicos o de guerra interna efectivos. En cuanto a si Chile estaba o no en Estado de Guerra, se agrega, el Decreto Ley N°3 declaró el Estado de Sitio por conmoción interna y reconoció un Estado de Guerra sólo con el objeto de dar aplicación a la normativa penal militar sustantiva, procesal y orgánica, según lo consigna el Decreto Ley N°5. Con posterioridad, la autoridad reglamentó los Estados de Emergencia en el Decreto Ley N°640 y el 18 de septiembre de 1974 se declaró al país en Estado de Sitio en grado de Defensa Interna, lo cual no importó reconocimiento de un estado o tiempo de guerra. Por lo expuesto, expresan que no es posible sostener que existieran “*fuerzas armadas disidentes*”, lo que hace inaplicable las “*Convenciones de Ginebra*”. Se agrega que el “*Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*” carece de aplicación porque se incorporó a la legislación al promulgarse el 29 de abril de 1989; lo mismo ocurre con el “*Pacto de San José de Costa Rica*”, incorporado en 1990 y con la “*Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas*”, suscrita en 1994. Terminan señalando que el Código de Derecho Internacional Privado fue ratificado por Chile con la reserva contenida en su artículo 3°, cual es que, en caso de conflictos entre la legislación chilena y alguna extranjera, los preceptos de la legislación de Chile prevalecerán sobre dicho Código, si hubiera desacuerdo entre unos y otros. Concluyen que al haber ocurrido los hechos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 procede acoger esta excepción y dictarse la correspondiente absolución.

Cuadragésimo sexto.- Que, en relación con la **amnistía**, invocada por las referidas defensas, procede consignar, tal como se expresó al desecharlas como excepciones de previo y especial pronunciamiento, en las resoluciones antes referidas de fojas 3080, 3096 y 3112, que, atendido el ámbito temporal fijado por el Decreto Ley N°2.191, de 1978, relativo a hechos delictuosos cometidos por personas determinadas, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, y habida consideración del carácter permanente del delito de secuestro de Sergio Pérez, puesto que, como lo expresa la doctrina y, reiteradamente, la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, se trata de un “*estado delictuoso que se prolonga en el ámbito*

temporal mientras subsista la lesión del bien jurídico afectado, en él han persistido la acción y el resultado”(fundamento 30° de los autos Rol N°517-2004 de la Excma. Corte Suprema en cuanto se rechaza los recursos de casación en el fondo y en la forma interpuestas por quienes secuestraron a Miguel Ángel Sandoval Rodríguez), los ilícitos que hubieren de establecerse exceden el ámbito temporal y sustantivo de aplicación del citado Decreto Ley.

A mayor abundamiento, se ha razonado que el delito de secuestro que, en la especie, afecta hasta el presente, a Sergio Pérez y que se encuadra en el artículo 141 del Código Penal, corresponde, además, al delito *“descrito en el artículo II, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita en Belén de Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional, la que ya entró en vigencia internacional el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, al ser ratificada por varios Estados latinoamericanos”* (considerando 32° del Rol recién citado), aludiendo a la Convención acordada en el 24° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y suscrita por Chile el seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. El artículo II de la misma expresa: *“Para los efectos de la presente Convención, se considerará **desaparición forzada** la privación de libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”*.

Por su parte, el artículo III de la Convención señala la extrema gravedad de este delito y su ***carácter continuado o permanente***, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Y, como se ha escrito *“...al ser Chile Estado suscriptor de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, está obligado por la Convención de Viena, de 1969, sobre el Derecho de los Tratados, que se encuentra incorporada al derecho interno de nuestro país, a no frustrar, de acuerdo a su artículo 18, el objeto y fin de dicha Convención, antes de su entrada en vigor”*. (Rol N°11.821-2003. Corte de Apelaciones de Santiago).

En consecuencia, debe concluirse que si la situación descrita por el mencionado artículo II de dicha Convención quedara impune en Chile se vulneraría el objeto y el fin de la misma.

Por otra parte, en la doctrina, como es sabido, los tratadistas han expresado:

“En cuanto a su consumación, este delito es permanente y se prolonga mientras dura la privación de libertad”. (Alfredo Etcheberry. “Derecho Penal”. Editora Nacional Gabriela Mistral. 1976. Tomo III, página 154).

“La acción que lo consuma crea un estado delictuoso que se prolonga en el tiempo mientras subsista la lesión del bien jurídico afectado. Su característica esencial es la persistencia de la acción y del resultado...” (Gustavo Labatut. “Derecho Penal”. Tomo I) 7ª. Edición, página 158). Y en el mismo sentido razona Luis Cousiño Mac Iver. (“Derecho Penal Chileno”. Editorial Jurídica de Chile, 1975, Tomo I, páginas 316 a 319).

En resumen de lo expuesto debe, necesariamente, concluirse que la amnistía rige para los delitos consumados entre las datas fijadas por el Decreto Ley N°2.191, de modo que la normativa invocada por la defensa de los acusados no es aplicable al caso de autos, ya que la ejecución del delito que se les atribuye excede los límites temporales fijados, en forma precisa, por dichas normas.

Con respecto a los crímenes de lesa humanidad, cual es el caso del homicidio de Lumi Videla, debe razonarse en el sentido que nuestro país vivió bajo “*Estado o Tiempo de Guerra*” desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de septiembre de 1974, en virtud del Decreto Ley N°3, en relación con el Decreto Ley N°5 y desde el 11 de septiembre de 1974 hasta el 10 de septiembre de 1975, de conformidad con los Decretos Leyes N° 641 y N° 922, todo lo cual hace aplicable en materia de la acusación de oficio de fojas 2506, los “Convenios de Ginebra”, de 1949, que, como se dijo, contemplan para las Partes Contratantes la prohibición de “*auto exonerarse*” por las responsabilidades en que puedan haber incurrido en relación con “*graves infracciones*” a los mismos, entre ellas, **el homicidio** intencional, la tortura o los tratos inhumanos y la detención ilegítima y esta prohibición de auto exonerarse, repetimos, alcanza a las causales de extinción de responsabilidad penal, como la amnistía.

Cuadragésimo séptimo.-Que, en efecto, respecto de los Convenios Internacionales, que las defensas de los encausados estiman inaplicables al caso en estudio, existe unanimidad en la doctrina, en cuanto a que la amnistía deberá tener por objeto tan solo delitos políticos o militares, “*pero limitados a aquellos que no atenten contra los derechos humanos que le corresponden a cada individuo por el hecho de ser persona*”.

Conviene precisar, frente a los argumentos esgrimidos por los letrados, el alcance de los “*Convenios de Ginebra*”, de 1949, aplicables a situaciones de conflictos armados internos. Los cuatro “*Convenios de Ginebra*” entraron en vigor en nuestro ordenamiento jurídico, haciéndose obligatorias sus normas, en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951.

El artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: “en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa, serán en toda circunstancia tratadas con humanidad...Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el **homicidio** en toda sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios”.

Por su parte, tanto el artículo 147 del Convenio IV) (sobre “Protección de personas civiles en tiempos de guerra”) como el artículo 130 del Convenio III), (relativo al “Trato debido a los prisioneros de guerra”), prescriben que deben considerarse como infracciones graves a los mismos los siguientes actos contra las personas: **homicidio intencional**, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, causar intencionalmente grandes sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física o a la salud, las deportaciones o traslados ilegales y la **detención ilegítima**.

Finalmente, el artículo 148 del Convenio IV) - norma similar a la del artículo 131 del Convenio III) - expresa que “Ninguna Parte contratante podrá exonerarse a sí misma, ni exonerar a otra Parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma, u otra Parte contratante, respecto de las infracciones previstas en el artículo anterior”.

En consecuencia, existe para nuestro país una expresa prohibición de “exonerarse”(según el Diccionario de la Lengua Española “exonerar” es “aliviar, descargar, liberar de peso, carga u obligación”), esto es, de “amparar la impunidad”, como se ha escrito, y consecuencia de ello es que el artículo 146 del Convenio IV) establece para las Partes Contratantes “la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, cualquiera de las infracciones graves”, debiendo “hacerlas comparecer ante los propios tribunales.

Además, en sentencia de la Excma.Corte Suprema, de 18 de enero de dos mil siete, (Rol N°2.666-04) se expresa:

*”DECIMO CUARTO.-Que actualmente la aplicabilidad de estos convenios ha sido **permanentemente respetada** en diversos fallos que se han dictado por esta Excma. Corte, entre otras, en la sentencia de fecha nueve de septiembre de 1998 (Rol N°469, considerando 10°) y en el pronunciamiento de 17 de noviembre de 2004 (Rol N°517-2004).*

“DECIMO QUINTO:-Que esta Corte, respecto de los Convenios de Ginebra ha señalado que “La omisión de aplicar las disposiciones de los Convenios importa un error de derecho que debe ser corregido por la vía de este recurso, en especial si se tiene presente que de acuerdo a los principios de Derecho Internacional, los tratados internacionales deben interpretarse y cumplirse de buena fe por los Estados, de lo que se colige que el derecho interno debe adecuarse a ellos y el legislador conciliar las nuevas normas que dicte a dichos instrumentos internacionales, evitando transgredir sus principios, sin la previa denuncia de los Convenios respectivos”. (S.C.S. de 09.09.1998, Rol N°469, consid.10°)”

Por consiguiente, los referidos Convenios impiden la aplicación de la amnistía respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, como lo ha estimado la doctrina: “Informe en Derecho “ de Hernán Quezada Cabrera y “Definición y persecución del Crimen de Tortura en el Derecho Internacional”, de Karim Bonneau, (publicación de CODEPU, Enero 2004) y la reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema:

I) (Acápites 34° del rol N°517-2004 del Excmo. Tribunal antes citado): *”...a la data de los acontecimientos en análisis, indudablemente se encontraban vigentes, como hoy, los Convenios de Ginebra de mil novecientos cuarenta y nueve, ratificados por Chile...que, en su artículo 3°...obliga a los Estados contratantes, **en caso de conflicto armado sin carácter internacional ocurrido en su territorio**, que es justamente la situación de Chile durante el periodo comprendido entre el doce de septiembre de mil novecientos setenta y tres y el once de marzo de mil novecientos setenta y cinco, el trato humanitario incluso de contendientes que hayan abandonado sus armas...prohibiéndose para cualquier tiempo y lugar, entre otros...los **atentados a la vida y a la integridad corporal...**”.*

II) Y más recientemente (sentencia de 18 de enero de 2007):*”Octavo.- Que, es lo cierto que la finalidad del gobierno de facto consistió en deponer al gobierno de aquel entonces, a través de un golpe de Estado ejecutado el 11 de septiembre de 1973, para así obtener el poder y mando del País. Las razones se encuentran también plasmadas en los catorce numerales que contiene el Bando N°5 pronunciado por la Junta de Gobierno de aquella época.*

“El Golpe de Estado fue un acto de guerra y desde aquel, en nuestro país, se vivió una situación de conmoción interna, como lo confirma el Decreto Ley N°3 de la misma fecha del

citado Golpe, cuando considerando tal circunstancia y lo dispuesto en el artículo 72 N°17 de la Constitución Política del Estado, la Junta de Gobierno declaró el denominado “Estado de Sitio” en todo el territorio de la República”. (Rol N°2.666-04).

En efecto, el Decreto Ley N°3 (D. O. de 18 de septiembre de 1973) declaró el Estado de Sitio en todo el territorio de la República, en virtud de lo establecido en el artículo 72 N° 17 de la Constitución Política de 1925, por la causal de “**conmoción interior**”; pues bien el carácter de esa “*conmoción interior*” fue fijado por el Decreto Ley N°5 (D. O. de 22 de septiembre de 1973), dentro de cuyos fundamentos se consideró “*la necesidad de reprimir en la formas más drástica posible las acciones que se están cometiendo contra la integridad física del personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la población en general*”, al declarar que el Estado de Sitio decretado por conmoción interior debía entenderse “**Estado o Tiempo de Guerra**”, no sólo para los efectos de la penalidad de ese tiempo, establecida en el Código de Justicia Militar y demás leyes penales, sino “*para todos los demás efectos de dicha legislación*”. En efecto, en el artículo 1°, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, se declaró: “*el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los efectos de dicha legislación*”. Esta frase se ha interpretado, uniformemente, en el sentido que dichos efectos abarcan las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, las causales de extinción de la misma y, además, las normas jurídicas penales de carácter internacional aplicables a dicha situación. Fue por eso que, como se sabe, tal criterio se tradujo en la existencia de “*prisioneros de guerra*”, en la convocatoria a “*Consejos de Guerra*”, en la aplicación de la penalidad de “*tiempos de guerra*” y, según las Actas de Visitas de Delegados de la Cruz Roja Internacional a los Campamentos de Detenidos de “Tres Álamos” y “Cuatro Álamos”, durante 1975, de público conocimiento, ellas se practicaron “*en conformidad con las disposiciones de los Convenios de Ginebra*”.

Por otra parte, en virtud del Decreto Ley N°641 (D.O. de 11 de septiembre de 1974), por estimarse innecesario mantener la “declaración de guerra interna”, se dispuso que “*todo el territorio de la República se encuentra en Estado de Sitio, en grado de Defensa Interna*”, por un lapso de seis meses. Plazo renovado, por otros seis meses, por el Decreto Ley N°922 (D. O. de 11 de marzo de 1975), que fue, a su vez, derogado por el Decreto Ley N°1.181 (D. O. de 11 de septiembre de 1975), que declaró que todo el territorio se encontraba en “*Estado de sitio, en grado de Seguridad Interior*”.

Ahora bien, según la sistematización del Decreto Ley N°640 (D. O. de 10 de septiembre de 1974), la declaración de Estado de Sitio en grado de Defensa Interna procederá cuando la conmoción sea provocada “*por fuerzas rebeldes o sediciosas que se encuentren organizadas o por organizarse, ya sea en forma abierta o en la clandestinidad*”.

En síntesis, nuestro país vivió bajo “*Estado o Tiempo de Guerra*” desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de septiembre de 1974, en virtud del Decreto Ley N°3, en relación con el Decreto Ley N°5 y desde el 11 de septiembre de 1974 hasta el 10 de septiembre de 1975, de conformidad con los Decretos Leyes N° 641 y N° 922, todo lo cual hace aplicable en materia de la acusación de oficio de fojas 1369, los “Convenios de Ginebra”, de 1949 que, como se dijo, contemplan para las Partes Contratantes la prohibición de “auto exonerarse” y esta prohibición, repetimos, alcanza a las causales de extinción de responsabilidad penal, como la amnistía.

Además, se reafirma ese criterio según se ha escrito, al comentarse un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: *“Con fecha 26 de septiembre de 2006, la Corte...emitió sentencia en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile...constituye el paso más reciente en la evolución de la doctrina del sistema interamericano de protección de derechos humanos sobre la ilegitimidad, ilegalidad e inaplicabilidad de medidas legales que impiden la investigación, procesamiento y eventual sanción por violaciones a los derechos humanos consideradas particularmente graves por el derecho internacional. Dichas medidas son conocidas comúnmente como leyes de amnistías, de autoamnistías o de impunidad...La conclusión principal a que la Corte arriba en este caso...es, en síntesis, que existen ciertos crímenes de suprema gravedad, respecto de los cuales (el Derecho Internacional) establece obligaciones imperativas de investigación, persecución, juzgamiento y eventual sanción; que tales crímenes no prescriben ni pueden ser objeto de amnistías...*

El principio de inamnestiabilidad de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad...brota...de normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional...han ido ganando aceptación ciertas nociones fundamentales, entre ellas, las siguientes...IV)...no existe margen de discreción en lo que toca impartir justicia en materia de crímenes...contra la humanidad, dado que constituyen obligaciones perentorias de las que los Estados no pueden eximirse invocando leyes de amnistía o de autoamnistía...”(José Zalaquett Daher. “El caso Almonacid. La noción de una Obligación Imperativa de Derecho Internacional de Enjuiciar Ciertos Crímenes y la Jurisprudencia Interamericana sobre Leyes de Impunidad”. Anuario de Derechos Humanos 2007. Facultad de Derecho. Universidad de Chile).

6

Eximente contemplada en el artículo 10 N°10 del Código Penal.

Cuadragésimo octavo.- Que, las defensas de los acusados Basclay Zapata Reyes(2697) y de Marcelo Luis Moren (2725), invocan la causal eximente de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 10 N°10 del Código Penal, por haber obrado en el cumplimiento de un deber ordenado por sus superiores, refiriéndose, además, la primera de éstas al artículo 214 del Código de Justicia Militar-

Cuadragésimo noveno.-Que, como es sabido, esta norma del Estatuto Militar se refiere a la causal eximente de responsabilidad penal, denominada *“de la obediencia debida”* y, según Renato Astroza Herrera (*“Código de Justicia Militar Comentado.3.a edición, Editorial Jurídica, página 344 y siguientes*), todo grupo humano, por motivos de supervivencia y de justificación de sus fines, requiere cierto acatamiento a un orden jerárquico, es decir, se necesita la subordinación de sus miembros a determinados jefes. En relación con el deber de obediencia del subalterno, existen las teorías de la obediencia absoluta, de la obediencia relativa y de la obediencia reflexiva. En lo que respecta a los militares se distingue: si se trata del cuerpo armado en su conjunto, en sus relaciones con los Poderes Públicos, se acoge la teoría de la obediencia absoluta, pero si se trata de los miembros de un grupo armado entre sí, en los artículos 214, 334 y 335 del cuerpo de leyes citado, en concordancia con los artículos 20° y 21° del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas, contenido en el Decreto Supremo N° 1445, de 1951, se acepta la doctrina de la **obediencia reflexiva**; esto es, cuando la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito, el inferior tiene el deber de representársela y sólo la cumplirá cuando el superior insistiere en ella, lo que resulta del texto del artículo 214 que pena al subalterno cuando no ha representado la orden que tienda notoriamente a la comisión de un ilícito. Pues bien, en materia militar las normas antes citadas exigen: a) que se trate de la orden

de un superior; b) que sea relativa al servicio y c) que si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito, sea representada por el subalterno e insistida por el superior.

Quincuagésimo.-Que, resulta oportuno, en este análisis, recordar las funciones desempeñadas por la DINA, que, por su carácter secreto, jerárquico y compartimentado, permitió cometer los delitos investigados en autos, en cuanto se pretendía exterminar a los militantes del MIR, privándolos ilegítimamente de libertad, sin orden competente de autoridad administrativa o judicial alguna. Ahora bien, como los acusados no reconocen participación de ninguna índole en el delito que se les atribuye, no obstante lo que expresan sus defensas para justificar la eximente, resulta difícil ponderar racionalmente sus conductas con las exigencias de la misma, a lo que cabe agregar que tampoco han intentado insinuar siquiera el nombre del superior que les habría ordenado cometer las acciones que se les imputan, haciendo, en cambio, una genérica alusión a *“hechos que le fueron ordenados siendo miembros de una institución con una rígida jerarquía”* y a los términos del artículo 1° del Decreto Ley N°521 en cuanto, al referirse a la labor de la DINA, permitía *“la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país”* y del artículo 10° del mismo (de carácter secreto, pues el artículo único transitorio expresa: *“Los artículos 9°, 10° y 11 del presente decreto ley se publicarán en un anexo de circulación restringida del Diario Oficial”*), la norma según la cual se permitiría *“arrestar y trasladar personas”*).

Por otra parte, los acusados Zapata y Moren ni siquiera han intentado probar que la orden a que aluden, de privar ilegítimamente de libertad a una persona para apremiarla, con las torturas relatadas en autos por otros detenidos y reconocidas por los propios agentes de la misma, a fin de que revelare el nombre de otros militantes del MIR con el propósito de ser aprehendidos a su vez, fuera una *“orden relativa al servicio”*, entendiendo por tal, al tenor del artículo 421 del Estatuto castrense, aquella que tenga *“relación con las funciones que a cada militar corresponden por el hecho de pertenecer a las Instituciones Armadas”*, o sea, estimando como tales las que se relacionaren con una función del cuerpo armado o que tiendan a servir a dicho cuerpo.

El destino legal de la DINA aparece definido en el Decreto Ley N°521: *“un organismo militar de carácter técnico y profesional...cuya misión será la de reunir toda la información a nivel nacional...con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formación de políticas, planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país”*. .

Dicho texto nos permite a analizar el tercer requisito antes mencionado, según el cual el subalterno debe realizar un somero examen de la orden, respecto de su licitud y si de él se desprende que la orden notoriamente tiende a perpetrar un delito, debe representársela al jefe que se la dio y sólo cuando éste insista dará cumplimiento a ella. Las defensas de los acusados al invocar esta eximente, tampoco han ofrecido rendir prueba alguna, en el plenario, para probar la existencia del referido juicio de valoración de la orden del respectivo mandante, como subalternos, juicio que los acusados estaban en condiciones de dar por tratarse de militares con experiencia; por ende, la falta de prueba de este requisito de la representación por parte del subalterno cuando la orden tendía, notoriamente, a la perpetración de un delito- un homicidio calificado - permite concluir que debe hacérseles responsables a los inferiores como partícipes del ilícito.

Quincuagésimo primero.- Que, por otra parte, como la eximente alude al *“cumplimiento de un deber”*, conviene precisar que, según la doctrina, ello requiere:

A) Una norma legal que imponga un deber, sin que se haya probado, en este proceso, que existiera, en la época en que acaecieron los hechos, una normativa, que no pudo ser secreta, que autorizara, sin orden administrativa o judicial alguna, la privación ilegítima de libertad de una persona con determinada militancia política, para conseguir antecedentes que permitieran sucesivas aprehensiones de sujetos análogos y

B) Que la acción de que se trate, fuera lícita, lo que el mérito de los antecedentes, desde luego, ha desvirtuado.

Por lo expuesto, procede desechar la concurrencia de la eximente invocada por las defensas de los acusados Basclay Zapata y Moren Brito.

7)

Improcedencia de considerar el delito de secuestro como “delito permanente”.

Quincuagésimo segundo. -Que, además, el defensor de Miguel Krassnoff (2928) expresa que “*no existe el delito de secuestro calificado*”, en atención a la imposibilidad física de que el Sr. Pérez Molina esté secuestrado hasta el día de hoy como se pretende, “ficción jurídica”, se la denomina.

Quincuagésimo tercero.-Que, procede desechar tal alegación, a fuerza de ser repetitivo, tanto porque no es efectivo que en el proceso se haya establecido que el encierro de la víctima no se ha prolongado hasta nuestros días como porque, como se consignó en el fundamento cuadragésimo tercero precedente, en la doctrina, los tratadistas así lo han expresado: Alfredo Etcheberry, (“Derecho Penal”. Editora Nacional Gabriela Mistral. Tomo III, página 254), Gustavo Labatut (“Derecho Penal”. Tomo I. 7ª. Edición, página 158) y Luis Cousiño Mac Iver (“Derecho Penal Chileno”. Editorial Jurídica de Chile, 1975, Tomo I, páginas 316 a 319), y lo ha reiterado la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, en el sentido que el secuestro consiste en un “*estado delictuoso que se prolonga en el ámbito temporal mientras subsista la lesión del bien jurídico afectado, en él han persistido la acción y el resultado*” (fundamento 30º del Ingreso Rol N°517-2004 de la Excma. Corte Suprema, en que se rechazó los recursos de casación en el fondo y en la forma interpuestas por quienes secuestraron a Miguel Ángel Sandoval Rodríguez). A mayor abundamiento, se ha razonado que el secuestro que, en la especie, afecta hasta el presente, a Sergio Humberto Lagos Marín y que se encuadra en el artículo 141 del Código Penal, corresponde, además, como se expuso en el citado considerando precedente, al delito “*descrito en el artículo II, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscrita en Belén de Pará, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro*”.

Similar doctrina consagra la sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 30 de mayo de 2006, dictada en el Ingreso rol N° 3.215, en una casación de oficio de un fallo de segunda instancia; se reproduce en parte el considerando de primer grado que expresa: “*Que no se ha logrado probar en el proceso que a partir de esa fecha la privación de libertad de la víctima se haya seguido consumando en el tiempo*”, y añade “*...como puede advertirse...el fallo recurrido, luego de dar correctamente por establecida la existencia de un delito de secuestro, sorpresivamente considera probado que éste cesó de ejecutarse “no más allá del 20 de enero de 1975”, sin decir siquiera en qué oportunidad precisa ocurrió esto último, y si sucedió porque la víctima murió, porque se fugó, porque fue puesta en libertad o por cualquier otra razón imaginable...Si está decididamente acreditado, como lo está, que el secuestro ocurrió, lo que*

debe probarse para entender que ha cesado el curso de la consumación originado por la privación ilícita de libertad de la víctima, es que ésta recuperó la libertad o que murió. Exigir, como lo hace el fallo atacado, que se pruebe la continuación del encierro o detención es totalmente innecesario, pues tal prosecución se deduce inmediatamente de que la víctima fue secuestrada y de que en el proceso no ha podido acreditarse que la privación de libertad haya finalizado; sólo la prueba de esto último permitiría afirmar que la consumación del secuestro había terminado precisamente en la fecha y hora de recuperación de la libertad o pérdida de vida de la ofendida...”

8)

Recalificación del delito de secuestro.

Quincuagésimo cuarto.- Que, por otra parte, el defensor de Contreras expresa que *“debe recalificarse el delito de don Sergio Pérez Molina, a homicidio calificado”*, atendidas las declaraciones de Marcia Merino de fojas 227 vta. y de Samuel Fuenzalida de fojas 240. Sin embargo, según la normativa procesal chilena en un delito de homicidio existen preceptos muy específicos relativos a la constatación de la muerte de una persona, provocada por terceros, señalados en los artículos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129 y siguientes del Estatuto adjetivo, sin que tales exigencias puedan ser suplidas por los dichos de dos personas que presumen la muy probable muerte de un detenido en manos de los agentes de la DINA.

9)

Circunstancias modificatorias de responsabilidad.

Quincuagésimo quinto.-Que, en razón de lo antes resuelto, procede, en seguida, analizar las peticiones subsidiarias que invocan los defensores de los acusados relativas a las circunstancias modificatorias de sus respectivas responsabilidades.

Quincuagésimo sexto.- Que, en primer término, por parte de los acusados Marcelo Moren (2725) y Miguel Krassnoff (2928), se ha invocado la atenuante del artículo 11 N°1 del Código punitivo en relación con el numeral 10 del artículo 10 del Estatuto Penal, en subsidio del rechazo de las peticiones principales antes analizadas.

Quincuagésimo séptimo.-Que, corresponde desechar la existencia de la minorante del numeral 1° del artículo 11 citado, en relación con la eximente del N° 10 del artículo 10 del mismo texto punitivo, en razón de *que no se trata* de una eximente constituida por varios requisitos, cuya pluralidad es la que valida, si concurre la mayoría de las condiciones prescritas para originar la eximente.

Quincuagésimo octavo.-Que, las defensas de los encartados Basclay Zapata (2697)y Miguel Krassnoff (2928), han invocado como atenuante de responsabilidad criminal para cada uno de ellos la contemplada en el artículo 103 del Código Penal, en cuya virtud *“Si el inculpado se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal...pero habiendo transcurrido la mitad del que se exige...deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar las reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68...en la imposición de la pena...”*

Quincuagésimo noveno.-Que, procede rechazar la existencia de la denominada *“media prescripción”*, en razón de lo analizado y resuelto en el motivo cuadragésimo tercero de este fallo, en cuanto a que *“La prescripción de la acción correspondiente a ellos (delitos de secuestro calificado) no empieza a correr sino una vez que ha cesado la duración de su estado*

consumativo”. Por lo tanto, mientras se prolongue tal situación no se puede, racionalmente, indicar el momento en que comienza el cómputo a que se refiere el artículo 95 del Código Penal y, por ende, la situación regulada por el artículo 103 del mismo Estatuto; todo ello, sin perjuicio de lo antes expuesto respecto de la aplicación de la normativa internacional de derechos humanos, en cuya virtud los “Convenios de Ginebra” impiden la aplicación de la prescripción, total o gradual, respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional.

Sexagésimo.- Que, las defensas de Basclay Zapata (2697) y de Miguel Krassnoff (2928) han invocado la existencia de la circunstancia minorante de responsabilidad criminal contemplada en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, por cuanto aquellos se habrían encontrado *“a la época de los hechos en comisión de servicio en la DINA bajo el mando directo de un Oficial de Ejército, de quien debían cumplir las órdenes impartidas...no susceptibles de ser discutidas o cuestionadas...”* “y, además, si se acoge, piden se les estime como muy calificada.

Sexagésimo primero.- Que, la norma citada expresa: *“Fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214, será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes, el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico...”*

Esta atenuante, denominada de *“obediencia indebida”*, siguiendo a Renato Astroza (*“Código de Justicia Militar Comentado”*. Editorial Jurídica de Chile. Tercera Edición, página 340) tiene lugar, *“fuera de los casos previstos en el inciso segundo del artículo 214”*, cuando el inferior comete un delito militar o un delito común por dar cumplimiento a una orden de un superior jerárquico y siempre que ese cumplimiento no constituya un caso de obediencia debida de acuerdo con lo prescrito en el artículo 334. Acorde con este precepto las órdenes imponen la obligación de ser obedecidas por los inferiores cuando se reúnen los siguientes requisitos: 1. Orden de un superior; 2. Que la orden sea relativa al servicio y, según el artículo 421 del mismo Estatuto, se entiende por *“acto de servicio”* todo *“el que se refiera o tenga relación con las funciones que a cada militar corresponden por el hecho de pertenecer a las Instituciones Armadas”*; 3. Que sea dada en uso de atribuciones legítimas y 4. Si la orden tiende notoriamente a la perpetración de un delito se ha representado por el inferior e insistida por el superior. Si bien podría pensarse que si se comete delito por cumplir la orden de un superior faltando cualquiera de los cuatro requisitos señalados operaría la atenuante del artículo 211 *“...Ello no es así, en razón de que no puede faltar el requisito en que descansa la circunstancia: la existencia de la orden del superior jerárquico”* (Astroza, ob.cit., página 340).

En la especie, si bien Basclay Zapata alude, en términos generales, al cumplimiento de órdenes de parte de Miguel Krassnoff, no reconoce participación en el delito materia de esta investigación, y, finalmente, este último expone que a esa época era un *“modesto teniente, oficial subalterno”*. En consecuencia, sólo procede rechazar la minorante invocada, por faltar los antecedentes básicos para considerarla.

Sexagésimo segundo.- Que, en cambio, procede acoger las peticiones de los defensores en cuanto a que a sus mandantes les beneficia la existencia de la circunstancia minorante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal; en efecto, según consta de los respectivos extractos de filiación y antecedentes, de fojas 2003, de Cristoph Willeke; de fojas 2014 de Marcelo Moren; de fojas 2019, de Basclay Zapata y de fojas 2023 de Miguel Krassnoff y de las certificaciones (fojas 3469 a fojas 3549) al tenor del artículo 350 bis del Código de Procedimiento Penal, que si bien todos se encuentran sometidos a

procesos en múltiples episodios de este rol N° 2182-98, en ninguno de ellos ha recaído sentencia condenatoria relativa a delitos cometidos con anterioridad a los investigados en este expediente. Lo mismo procede resolver, de oficio, respecto del acusado Francisco Maximiliano Ferrer Lima, cuyo extracto rola a fojas 2004, puesto que su defensor, al contestar la acusación en el tercer otrosí de fojas 2833, no lo ha invocado.

Sexagésimo tercero.- Que, las defensas de Basclay Zapata(2697) y de Moren Brito(2725), luego de invocar la existencia de las circunstancias atenuantes de responsabilidad que estiman favorecen a sus mandantes, solicitan que, de ser acogidas, se les tenga como “*muy calificadas*,” en los términos del artículo 68 bis del Código Penal, petición que se desecha puesto que como ha razonado la Excma. Corte Suprema en fallos recientes al aludir a esta minorante, en otros casos penales:“...*los antecedentes que le dan sustento resultan insuficientes para estimarla muy calificada, pues si su sola configuración como simple atenuante se refiere al desenvolvimiento en la conducta de un individuo en el plano social, familiar e individual en forma recta, honrada, exenta de reproches, apreciar dicho comportamiento como muy calificado importa de suyo un juicio de valor aún más estricto, el cual de estimarse procedente debe sustentarse en antecedentes relevantes y extraordinarios, de cierto grado de continuidad en el tiempo...*” .

9)

Adhesiones a la acusación de oficio.

Sexagésimo cuarto.- Que los apoderados de los querellantes Laura Moya y Dago Pérez Videla, al adherirse a la acusación de oficio, en lo principal de fojas 2549 formulan “*complementos, agregaciones y precisiones*”. Expresan que tanto el secuestro de Sergio Pérez Molina como el homicidio de Lumi Videla Moya tienen en carácter de delitos calificados al tenor de los artículos 141 y 391 circunstancias cuarta y quinta del Código Penal. Añaden que, además, concurren los delitos de aplicación de tormentos y de asociación ilícita genocida. Se fundan en que la ampliación del protocolo de autopsia de fojas 425 alude a las fracturas constatadas en el cadáver de Lumi Videla y que los testigos describen las torturas sufridas por Sergio Pérez. Estiman que concurre en la especie una asociación ilícita genocida, por tratarse de una organización criminal y con el carácter de genocidio en el exterminio de opositores. Se agrega que de la sola lectura del expediente se desprende que en la especie concurren las agravantes contempladas en el artículo 12 números 1, 4, 6, 8, 9, 10 y 12 del Código Penal.

Sexagésimo quinto.- Que, el apoderado de los querellantes Lautaro Videla Moya y Eduardo Pérez Molina, en lo principal de fojas 2574, adhiere a la acusación de oficio y solicita que, respecto del homicidio de Lumi Videla, se apliquen las penas máximas, por concurrir las siguientes circunstancias agravantes acreditadas: 1.a 4ª. 5ª, 6.a, 8.a, 9.a, 11,a y 18, a del artículo 12 del Código Penal. En cuanto al secuestro de Sergio Pérez Molina estima que corresponde aplicar la pena de conformidad con la legislación actual, presidio mayor en su grado medio a máximo, ya que el momento de comisión o perpetración del delito es aquel en que la actividad voluntaria cesa y no se ha podido establecer si el delito dejó de cometerse.

Sexagésimo sexto.- Que, en cuanto a lo planteado, en lo principal de fojas 2549, por los querellantes Laura Moya y Dago Pérez Videla procede considerar, en cuanto a los “delitos de aplicación de tormentos” y de “asociación ilícita genocida”, que, en realidad, los querellantes están formulando otra acusación, mas que un “*complemento, agregación o precisión*” al adherirse a la acusación de oficio y, de esta forma, han debido dar cumplimiento íntegro a los requisitos que señala el artículo 427 del estatuto adjetivo penal, en especial la “*participación de cada uno de los procesados*” en los delitos que se les atribuye, lo cual, por otra parte, no aparece

fehacientemente acreditado en este proceso; por ejemplo, respecto de las fracturas constatadas por los legistas en el cadáver de Lumi Videla, de una data de unos cuatro meses antes de su deceso, no existen antecedentes para individualizar como sus autores, en los términos del artículo 15 del Código Penal, a alguno de los agentes de la DINA del lugar de su reclusión, sin perjuicio de que la concepción de “*delito de lesa humanidad*” ha sido ya desarrollado en este fallo en el fundamento sexto que antecede.

Sexagésimo séptimo.-Que, en relación con la petición de los querellantes Lautaro Videla Moya y Eduardo Pérez Molina en lo principal de fojas 2574 relativa a aplicar la pena de conformidad con la legislación actual en el delito cometido en la persona de Sergio Pérez Molina, corresponde desecharla en virtud del principio de legalidad que consagra el artículo 18 del Código Penal chileno.

Sexagésimo octavo.- Que, tanto en lo principal de fojas 2549, como en lo principal de fojas 2574, los apoderados de los querellantes invocan la concurrencia de las agravantes del artículo 12 del citado Código sancionatorio, contempladas en sus números 1° (alevosía), 4° (ensañamiento), 6°(abuso de las armas), 8° (prevalerse del carácter público) y 9°(hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia).

Sexagésimo noveno.-Que, en el precedente apartado quinto de este fallo, se alude a la calificante del homicidio de Lumi Videla, consagrada en la circunstancias de la “alevosía”; sabido es que se estima que está definida en el artículo 12 N°1 del Código punitivo como “*obrar a traición o sobre seguro*” y se refiere a la seguridad del hechor, tanto en la comisión del delito cuanto a su impunidad; por ende, no procede estimar, además, como agravante tal conducta. En cambio, el ensañamiento que, por su parte, consiste en aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, no resulta acreditado en el proceso, ya que las lesiones ocasionadas a la víctima antes de su muerte no constituyen el fundamento de la agravante.

Septuagésimo.- Que, respecto de las siguientes circunstancias agravantes de responsabilidad criminal, invocadas por los querellantes, procede considerar lo siguiente:

En cuanto a las signadas con los respectivos numerales del artículo 12 del Código Penal:

a)6° (*abusar el delincuente de la superioridad de las armas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa*), debe desecharse puesto que, como se ha escrito, tal circunstancia es casi siempre inherente a cualquier delito, en que se ha buscado de propósito para asegurar el resultado del acto o la impunidad del hechor, de modo que resulta prácticamente imposible amenazar a alguien si no se cuenta con la superioridad de las armas, como, en la especie, parece evidente considerando el recinto clandestino de reclusión en que se perpetraron los ilícitos que se persiguen.

b)8°(“*prevalerse del carácter público*”) consiste en que el delincuente se aprovecha de esa circunstancia para hacer posible el delito, lo cual, en la especie, ha sido inherente al ilícito, en que agentes del Estado, pretextando facultades de un estado de excepción detenían a supuestos opositores al régimen de facto que gobernaba al país, de modo que también procede desechar tal agravante.

c)9°(“*hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia*”). En especie, no concurre tal antecedente puesto que ese ánimo “*suplementario*”, que se añade al propio del delito, según la doctrina, no se puede señalar que haya consistido en la intención de los ejecutores del delito, acusados en autos, sino de otros entes, que intervinieron en las circunstancias dadas a conocer a

la opinión pública, a través de la prensa, que constituyeron lo que se ha denominado “*ensañamiento moral*”, o deshonra pública, cual fue, en la especie, haber muerto a raíz de una “*orgía*” entre asilados de una Embajada.

Septuagésimo primero.-Que, con respecto a las restantes agravantes invocadas por los aludidos querellantes, de los numerales 10, 11 y 12, del citado artículo 12 del Código Penal, procede considerar lo siguiente:

I)La del numeral 10 radica en la mayor facilidad con que el delincuente puede llevar a cabo su propósito delictivo, en las circunstancias en que se enfrentaba, lo cual debe ser interpretado en forma restrictiva, sin que los querellantes hayan descrito las circunstancias del caso que justifiquen tal propósito.

ii) La del N° 11, esto es, ejecutar el delito con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, debe ser rechazada, puesto que, en el proceso, no consta que los hechos, mencionados en la acusación de oficio, hayan recibido colaboración de otros sujetos armados que les hayan proporcionado impunidad, en calidad de coautores.

III)La del N°12, alusiva a ejecutar el delito de noche o en despoblado, que se desecha puesto que en la especie no aparece probado que la oscuridad o la ausencia de gente realmente hubiera significado una ventaja para los autores en el aseguramiento del ilícito o de su impunidad.

10

Penalidad.

Septuagésimo segundo.- Que, en la imposición de las penas que corresponden a los acusados Contreras, Krassnoff y Torré, en calidad de autores de dos delitos - secuestro calificado de Sergio Pérez y homicidio calificado de Lumi Videla- les resulta más favorable imponerles la sanción de acuerdo con la norma del artículo 74 del Código punitivo y no la de la reiteración de crímenes contemplada en el artículo 509 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Septuagésimo tercero.- Que, por otra parte, procede considerar que la sanción a la época de ocurrencia del ilícito contemplado en el artículo 141 del Código Penal era de presidio mayor en cualquiera de sus grados y en el caso del homicidio calificado, como ahora, de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo.

Septuagésimo cuarto.- Que, en el delito de secuestro calificado de Sergio Pérez y en el del homicidio calificado de Lumi Videla concurre, respecto de Miguel Krassnoff y Ciro Torré, una circunstancia atenuante, sin agravantes, de modo que, a su respecto, procede aplicar la norma del artículo 68 inciso segundo el Estatuto punitivo.

Septuagésimo quinto – Que, de igual manera se fundamentará en dicho precepto la sanción relativa a Willeke Floel, Ferrer Lima, Moren Brito y Zapata Reyes respecto del delito de homicidio calificado de Lumi Videla.

Sextuagésimo sexto.- Que, en relación con Contreras Sepúlveda, en los dos ilícitos de que resulta responsable, procede aplicar la norma del mismo artículo, pero en su inciso primero, el cual permite recorrer las penas divisibles en toda su extensión.

11)

Demanda civil.

Septuagésimo séptimo.- Que, el apoderado Carlos Urquieta Salazar, por los querellantes Lautaro Robín Videla Moya y Eduardo Enrique Pérez Molina, en el primer otrosí de fojas 2574, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de Miguel Krassnoff Martchenko, Cristoph Georg Paul Willeke Floel, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y del Fisco de Chile, representado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por don Carlos Mackeney Urzúa, abogado, ambos domiciliados en Agustinas 1687, fundado en los hechos detallados en el auto acusatorio, en cuanto acreditan que el 21 de septiembre de 1974, fue ilegítimamente detenida por agentes de la DINA, Lumi Videla Moya, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario y conducida hasta el centro de reclusión clandestino de “José Domingo Cañas”, donde fue interrogada y torturada. Al día siguiente llegó al mismo lugar, detenido, su marido, Sergio Pérez Molina. El 3 de noviembre de 1974 en la noche Lumi Videla fue llevada la sala de torturas, donde fue atormentada hasta morir. En la madrugada del 4 de noviembre de 1974, el cuerpo de Lumi Videla fue lanzado a la Embajada de Italia en Chile. La DINA trató de encubrir el homicidio señalando a las personas asiladas como responsables del mismo. Por su parte, Sergio Pérez Molina, dirigente del MIR, fue detenido por agentes de la DINA el 22 de septiembre de 1974 en su domicilio y trasladado asimismo al recinto secreto de “José Domingo Cañas”; según testigos, los agentes se ensañaron en la aplicación de torturas a la víctima, motivo por el cual el 26 ó 27 de septiembre del mismo año, fue sacado del lugar en estado grave y hasta la fecha se desconocen antecedentes de su paradero. Procesalmente continúa secuestrado. Los hechos relatados, se agrega, son constitutivos de los delitos de homicidio y secuestro calificado y las víctimas eran hermanos de los querellantes Lautaro Videla Moya y Sergio Pérez Molina; éstos fundan su pretensión en el hecho de que está acreditado en autos que los delitos fueron perpetrados por agentes del Estado, específicamente de la Dirección de Inteligencia Nacional, dentro de una política sistemática del gobierno de la época de violación a los derechos humanos de los adversarios políticos. Los delincuentes actuaron amparados por el gobierno que de facto detentaba el poder, haciendo maniobras para ocultar la perpetración del delito. Bajo el epígrafe “*Reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado*” se agrega que lo ha hecho, en forma expresa, a través del Informe de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación (Tomo 2, página 515). En cuanto al “*daño producido*” se expresa que como consecuencia directa del secuestro de sus hermanos, sus mandantes sufrieron un profundo daño moral que se tradujo en un perjuicio irreparable de índole subjetivo debido a que vieron desintegradas sus familias, perdieron el contacto con personas muy cercanas en su vida y fueron presas del pánico, esperando que en cualquier momento una autoridad militar omnipotente hiciera desaparecer a otro familiar. Los agentes de la DINA eran personas que detentaban el poder total, representantes locales del gobierno central que no reconocieron límites en la moral ni en la justicia, actuando en la forma más bárbara contra quienes estimaron sus adversarios políticos y sus familiares. Se añade que la pérdida de un familiar cercano es desolador pero en el caso de sus mandantes fue doble, perdieron a Sergio y a Lumi y no volvieron a tener noticias del primero y durante dos meses de la última, para luego conocer su muerte por la prensa y vivir con el público ultraje que se hizo de su memoria, levantaron calumnias e injurias, llegando a señalarse por la prensa que había sido asesinada cuando participaba en una orgía. Se continúa que el daño moral no necesita mayor justificación y la jurisprudencia ha indicado que “*el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se*

produce siempre que un hecho afecta a la integridad física o moral de un individuo...”(Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LVIII. Segunda parte, sección cuarta, pág. 374).

Se agrega que la indemnización comprende, según el artículo 2329, todo daño, incluido el moral. El Derecho y la equidad obligan a indemnizar los daños morales sufridos. Por tal concepto, se pide que se condene a los demandados a pagar una indemnización con la finalidad de reparar el daño psíquico que sus mandantes han sufrido y seguirán sufriendo; estima que el daño moral debe ser evaluado en una cantidad no inferior a quinientos millones de pesos para cada demandante. Se agrega que la responsabilidad de los agentes mencionados es clara y están obligados a la indemnización del daño sufrido por sus mandantes, según lo establece el artículo 2314 del Código Civil. Al haber pluralidad de autores, cada uno de ellos es solidariamente responsable de los perjuicios, al tenor del artículo 2317 del mismo Código. Se agrega que también el Estado es solidariamente responsable, según el Derecho Administrativo, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano cometiendo hechos ilícitos

que causaron daño a las personas. Estima que la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales N°2 y N°3 y, en la actualidad, en la Constitución de 1980, reconoce claros antecedentes en la Constitución de 1925, vigente a la época de los actos ilícitos. Expone que la doctrina iuspublicista ha sostenido que existe un principio general del derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas. El profesor Eduardo Soto Kloss, agrega, explica que el principio general de responsabilidad del Estado emana de que el Estado Chileno es una República, lo que implica que todos los sujetos, públicos o privados, deben responder de sus actos y omisiones, por encontrarse insertos en un Estado de Derecho. Consecuencia directa es que cualquiera que se sienta agraviado o lesionado por actos de los órganos públicos puede demandar a los Tribunales el resarcimiento de los perjuicios. Lo dicho por la doctrina se fundamenta en el principio de igualdad que plasmaba el artículo 10 N°2 de la Constitución de 1925. Añade que los otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado son los artículos 4°, 10 N°1 y N°9. El artículo 4° de la Constitución de 1925, fuente directa de los actuales artículos 6° y 7° de la Constitución de 1980, establecía la obligatoriedad de los órganos del Estado de ceñirse a las prerrogativas y facultades que les entregaba la ley y los actos que excedieran sus atribuciones adolecían de nulidad. Se continúa que el principio general de responsabilidad del Estado por sus actos u omisiones se concreta en el artículo 10 N°10 y N°9 de la Constitución de 1925, que consagran, respectivamente, el derecho de propiedad, sin distinción alguna, y la igual repartición de las cargas públicas. En cuanto al derecho actual, se añade que en el caso del secuestro la conducta típica aún perdura, lo que obliga a fundamentar la responsabilidad del Estado en el Derecho Administrativo actual y en las normas generales del Código Civil; el fundamento está, principalmente, en el art.38 de la Constitución Política y en los arts.4 y 44 de la Ley de Bases de la Administración del Estado. Siguiendo la más reciente jurisprudencia se señala que el Fisco de Chile es responsable solidariamente por las siguientes razones: 1) El artículo 101 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, agregando que las Fuerzas de Orden y Seguridad están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Como Órganos del Estado tienen que limitar su acción a lo que prescriben los artículos 5, 6 y 7 del texto constitucional, ejercen una parte de la soberanía y su actuar sólo reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Consecuencia de lo anterior el artículo 38, inciso segundo, establece una acción para reclamar

ante los tribunales de justicia cualquier lesión que sufra una persona en sus derechos por la Administración del Estado, bastando un perjuicio en sus derechos, causados por el Estado o sus organismos. Se agrega que la responsabilidad que irroga al Fisco la acción dañina cometida por uno de sus agentes es solidaria, ya que no deriva de la calidad de tercero civilmente responsable de la conducta de un dependiente, sino de la circunstancia de que se trata de un órgano componente de la entidad estatal; es dable atenerse al principio establecido en el inciso primero del artículo 2317 del Código Civil. Respecto de la prescriptibilidad de la acción se señala que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por los cuales se ha producido daño a personas que no se encuentran sujetas a sufrir el gravamen de soportarlos por atentar a la igual repartición de las cargas públicas, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, es imprescriptible, doctrina ratificada por la Excm. Corte Suprema. La responsabilidad del Estado es un problema de derecho público, al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV el Código Civil. Cita al profesor Eduardo Soto Kloss y una sentencia de la Excm. Corte Suprema de 28 de julio de 1987. En subsidio, si se considerara que a la acción de responsabilidad extracontractual del Estado se le aplican las reglas de Título XXXV del Libro IV del Código Civil no se encontraría cumplido el plazo de prescripción; se cita la sentencia de la causa “Klimpel Alvarado con Fisco”; estima que el plazo de prescripción no empieza a correr mientras perduren las actuaciones o hechos que provocan el daño. En el caso de autos, los agentes del Estado están siendo acusados por el delito de secuestro calificado de Sergio Pérez, delito de carácter permanente. El daño moral no ha dejado de causar estragos en las vidas de sus mandantes y la secuencia de los hechos aún perdura. Se concluye que se dan todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados: 1. En cuanto al daño moral, por el solo hecho de haberse producido un delito éste se presume. 2. La acción u omisión emanó de un órgano del Estado, funcionarios de la DINA, quienes secuestraron sin sujetarse a un procedimiento racional y justo previamente establecido en la ley. 3. Nexo causal. El daño a las víctimas emana de la perpetración del delito. 4. No existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso. 5. Sin perjuicio de que se ha señalado que la responsabilidad del Estado es objetiva, al tratarse de un delito, emana de un hecho doloso. Se cita el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal y se señala que la indemnización que se demanda es una consecuencia directa del delito y el Estado es solidariamente responsable en virtud del artículo 2317 del Código Civil. Pide se condene a los acusados Krassnoff, Willeke, Ferrer Lima y al Fisco de Chile a pagar solidariamente la suma de quinientos millones de pesos a cada uno de los demandantes, Lautaro Robín Videla Moya y Eduardo Pérez Molina, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de esas sumas o la que se estime ajustada a derecho y equidad, con costas.

Septuagésimo octavo.- Que, al contestar la demanda civil, en lo principal de fojas 2630, doña María Teresa Muñoz Ortúzar, Abogado Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, opone, en primer término, la excepción procesal de incompetencia absoluta del tribunal para el conocimiento de la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta contra el Fisco, pues la competencia corresponde privativamente a los Tribunales con jurisdicción en lo civil. Expresa que ha sido tema discutido por los procesalistas la bondad de introducir dentro del proceso penal elementos distorsionadores de la función principal del juez: establecer el hecho punible y la participación de quienes lo causaron o aprovecharon. Fue de ese modo que el actual Código Procesal Penal, en su artículo 59, estableció la facultad de la víctima de intentar en ese procedimiento penal, la acción *“que tuviere por objeto perseguir las*

responsabilidades civiles derivadas del hecho punible”, pero sólo respecto del imputado, excluyendo la intervención de terceros civilmente perjudicados y de terceros civilmente responsables, todos quienes deberán discutir sus pretensiones civiles ante el tribunal de idéntica naturaleza que correspondiere. Igual criterio, se añade, sigue el actual Código de Justicia Militar y su procedimiento de tiempo de paz que sólo autoriza, en los artículos 178 y 179, intentar la acción civil destinada a obtener la restitución de la cosa que “hubiere sido objeto de un delito” o “su valor”.Y en el artículo 133, inciso segundo, en cuanto permite que “las personas perjudicadas con el delito...podrán, no obstante, impetrar las medidas de protección que sean procedentes, especialmente las relativas a asegurar el resultado de las acciones civiles que nazcan del delito, pero sin entorpecer en manera alguna las diligencias del sumario”.

La incompetencia que invoca fluye del texto de la ley y de la historia de su establecimiento. Dentro del pensamiento mayoritario de los procesalistas, existente desde años atrás, surgió la modificación de la ley 18.857 que dijo lo siguiente: “Art.10. *Se concede acción penal para impetrar la averiguación de todo hecho punible y sancionar en su caso, el delito que resulte probado.*

En el proceso penal podrán deducirse también, con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios causados.

En consecuencia, podrán intentarse ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”.

Se indica que las condiciones en que debe desenvolverse la acción civil deducida dentro del proceso penal para que sea de competencia del juez del crimen, son las siguientes: a) Debe fundarse en los perjuicios patrimoniales causados directa e inmediatamente por las propias conductas de los procesados o que sean consecuencias próximas o directas de aquellas; b) El juzgamiento de la pretensión civil del actor no puede extenderse a extremos ajenos a las conductas que constituyen el hecho punible. c) El hecho punible es la visión procesal penal o adjetiva de la tipicidad penal. d) La tipicidad penal es la causada por los agentes delictuales. Se concluye que el juez del crimen carece de competencia para conocer de acciones civiles indemnizatorias o reparatorias que proceden de hechos distintos de los propios que causaron la tipicidad. Se añade que de las normas constitucionales en que se funda la demanda civil en cuanto al Fisco, los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política y el artículo 4° de la Ley N°18.575, que según la demandante establecerían la responsabilidad directa del Estado, que sería una responsabilidad orgánica y objetiva, en cuyo estatuto sería irrelevante la presencia de dolo o culpa. Lo cierto es que el Estado y sus órganos sólo pueden causar algún perjuicio mediante “la falta de servicio público”, que es de carácter autónoma en relación con la teoría civilista de la responsabilidad extracontractual. De lo expuesto aparece que los fundamentos de la acción civil de la demandante descansan en los siguientes principios jurídicos:1)La acción interpuesta es una acción constitucional destinada a reclamar contra la Administración del Estado.2)Se invoca una falta de servicio público, vale decir, que el Servicio funcionó mal, no funcionó o lo hizo tardíamente. 3)Los perjuicios de las víctimas son imputables a la propia Administración por el funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos. 4)Se trata de una responsabilidad directa del Estado. De ello aparece que para resolver la procedencia de acoger o rechazar la

acción civil deducida no deberá el Tribunal decidir en base al juzgamiento” *de las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal*”. La supuesta responsabilidad deberá buscarse en hechos extraños al comportamiento de autores o cómplices, por lo que el enjuiciamiento deberá necesariamente extenderse a extremos distintos a los del citado artículo 10, excediéndose de la limitación impuesta por el legislador. En estas circunstancias, se añade, no se dan los supuestos necesarios previstos en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. Se alude a la sentencia de 28 de octubre de 2002 del Ministro en Visita Extraordinaria don Patricio Martínez (secuestro y homicidio del conscripto Soto Tapia).

Se hace presente que en relación a los hechos que se señalan en la demanda su parte se atenderá a aquellos que resulten legalmente acreditados.

En subsidio de la incompetencia alegada, opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios y en solicitar que por encontrarse prescrita, se rechace la demanda con costas. Se persigue la responsabilidad extracontractual del Estado de Chile por hechos ocurridos en 1974. Los hechos que habrían causado el daño, homicidio calificado de la Sra. Lumi Videla Moya y el secuestro del Sr. Sergio Pérez Molina y el perjuicio reclamado, se sustentarían en el dolor causado a los demandantes por ese homicidio y esa desaparición, ocurrida según la demanda durante el mes de septiembre de 1974. La acción ejercida tiene una clara connotación patrimonial y como tal está sujeta al plazo de prescripción especial contemplado en el artículo 2332 del Código Civil que es de 4 años, contados desde la perpetración del acto que causa el daño.

Aún en el evento de entender suspendida la prescripción por la imposibilidad de ocurrir a los tribunales antes de 1991, época del reconocimiento del Estado de las violaciones de derechos humanos acaecidos bajo el régimen del gobierno anterior, mediante la pública entrega del “Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación”, la prescripción se encuentra cumplida a la fecha de notificación de la demanda, contado el plazo desde el 4 de marzo de 1991, fecha de dicha entrega y reconocimiento, ya que la demanda fue notificada a su parte el 14 de noviembre de 2006, más de 15 años después que se iniciara el cómputo de la prescripción. En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años, contemplada en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil. Agrega que la prescripción es una institución universal y de orden público. Las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra, se han estimado siempre de aplicación general a todo derecho y no sólo al derecho privado. Entre esas normas está el artículo 2497 que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado. La prescripción resguarda un valor fundamental para el funcionamiento de la sociedad: la seguridad y la certeza jurídica. La imprescriptibilidad, en cambio, es excepcional y requiere siempre declaración explícita que, en este caso, no existe. Menciona varias sentencias de la Excma. Corte Suprema sobre esta materia, entre otras, en los procesos “Domic Bezic, Maja y otros con Fisco”; “Pizani y otra con Fisco”, “Cortés con Fisco de Chile” y “Manríquez Ulloa, Silvia y otros con Fisco de Chile”. Se transcriben los fundamentos 13º a 19º del primer fallo. Y otros del resto de los casos mencionados.

Sin perjuicio de estar prescrita la acción, invoca la inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado. Hace presente las siguientes consideraciones: a) La Ley 18575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado es un cuerpo legal muy posterior a los hechos de la demanda, por lo que no corresponde invocarla. b) Los principios básicos sobre responsabilidad estatal se encuentran en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de 1980, de su lectura resulta que tal responsabilidad surge sólo cuando los órganos no someten su acción a la Constitución y a las leyes o actúan fuera de su competencia. Ello excluye

la tesis de la responsabilidad objetiva del Estado. c) El sistema de responsabilidad extracontractual del Estado de Chile se encuentra establecido de manera general en el artículo 42 de la Ley 18.575 que incorpora los conceptos de falta de servicio y falta personal, lo que descarta la idea de responsabilidad objetiva, que sólo exige que se acredite la relación de causalidad entre el hecho y el daño, siendo indiferente la existencia o inexistencia de culpa o dolo. d) Por expresa disposición del artículo 18 de la ley 18.575 las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad quedan excluidas de la aplicación del artículo 42 de la misma ley, lo que hace necesario determinar la normativa aplicable al caso concreto. Como las respectivas leyes orgánicas de aquellas no regulan esta materia, corresponde recurrir al derecho común que, en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en el Título XXXV del Código Civil y de acuerdo a esas normas la responsabilidad extracontractual es de carácter subjetivo. En este caso se trataría de una acción indemnizatoria destinada a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado y para que ella opere se requiere que el acto u omisión dañoso haya sido ejecutado por alguno de sus órganos, dentro del ejercicio de sus funciones y que hayan actuado con culpa o dolo.

En cuanto a que los actores demanden, a título de indemnización por daño moral, la suma de quinientos millones de pesos para cada uno, hace presente que a diferencia del daño material, que se refiere a la lesión o detrimento inferido a un bien con significado económico o pecuniario, el daño moral existe cuando el bien lesionado es de naturaleza extramatrimonial y, por lo mismo, no apreciable en dinero. La indemnización en el daño moral está dirigida a dar, a quien ha sufrido el daño, sólo una satisfacción de reemplazo, dado que el daño moral mismo no desaparece por obra de la indemnización y, por ende, ella no puede ser estimada como una reparación compensatoria. De ahí se sigue que toda vez que se reclaman indemnizaciones desmedidas, en el hecho, más que obtener una satisfacción, se pretende un incremento patrimonial. Se agrega que los demandantes se refieren al daño moral sin mucha detención a los extremos fácticos de la causa, en consecuencia, les corresponderá probar la afección, su entidad y magnitud y las consecuencias que de ellas se han derivado. Por ello, se pide que si se rechazan las excepciones opuestas, la indemnización pretendida sea reducida. Se acompaña copias de las sentencias antes mencionadas, que conforman un “Cuaderno Separado”.

Septuagésimo noveno.-Que, a fin de resolver la excepción de incompetencia absoluta opuesta por la defensa del Fisco de Chile, en lo principal de su contestación de la demanda de fojas 2630, como se ha razonado en casos semejantes, debe considerarse, en primer lugar, el tenor literal del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, antes de la modificación introducida por el N°7 del artículo 1° de la Ley N° 18.857, de 6 de diciembre de 1989:

“De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable; y puede nacer acción civil para obtener la restitución de la cosa o su valor y la indemnización establecida por la ley a favor del perjudicado”.

Ahora bien, en razón de la referida modificación, el texto actual del precepto consigna:

“Se concede acción penal para impetrar la averiguación de todo hecho punible y sancionar, en su caso, el delito que resulte probado.

“En el proceso penal podrán deducirse también, con arreglo a las prescripciones de este Código, las acciones civiles que tengan por objeto reparar los efectos civiles del hecho punible, como son, entre otras, las que persigan la restitución de la cosa o su valor, o la indemnización de los perjuicios causados.

“En consecuencia, podrán intentarse ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias

próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”.

Octagésimo.- Que, de conformidad con el tenor actual del precepto, se puede colegir que las condiciones en que debe deducirse la acción civil, dentro del proceso penal, aparecen limitadas, en cuanto a su amplitud y extensión, si se comparan con la redacción, en términos genéricos y amplísimos, del texto anterior.

Es así como sólo podrá accionarse civilmente ante el Juez del Crimen en cuanto se fundamente la demanda en los perjuicios patrimoniales causados directa e inmediatamente por las conductas de los procesados o bien, que sean consecuencias próximas o directas de dichas conductas. Esto es, si la ley otorga, en forma excepcional, a un juez especial- cuya misión es juzgar ilícitos penales- la facultad de conocer las responsabilidades civiles que emanen de los mismos hechos punibles, la norma es de aplicación restrictiva.

Por ende, la acción civil no puede extenderse a extremos ajenos a “...*las conductas que constituyen el hecho punible*”, descritas, en este proceso, en los fundamentos tercero y cuarto y que constituyen el enfoque procesal penal de la tipicidad de que se trata.

Ahora bien, tal tipicidad no es sino la materialización de las conductas dolosas de los partícipes en el ilícito.

Octogésimo primero.-Que, de acuerdo con lo razonado, no procede sino concluir que el Juez del Crimen, cual es el caso del Ministro de Fuero que suscribe, está inhabilitado, por falta de competencia, para conocer de acciones civiles indemnizatorias o reparatorias que procedan de hechos distintos de aquellos que provocaron la tipicidad antes mencionada.

En el caso de estudio, se fundan las acciones deducidas en la responsabilidad objetiva y directa del Estado, esto es, en circunstancias ajenas al comportamiento de los autores de los ilícitos que se persiguen, excediendo, por ende, la limitación impuesta por el legislador en el texto del citado artículo 10.

Octogésimo segundo.- Que, como hemos razonado en casos similares, debe considerarse, además del tenor literal del citado artículo 10, las disposiciones del artículo 172 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto precisa que “*El tribunal que conoce del proceso criminal es competente para resolver acerca de la responsabilidad civil que pueda afectar a terceros a consecuencia de un delito...*” - que no ha sido modificado por la ley N°19.665(D.O.09.03.00)-y la del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, que señala “*La acción civil puede entablarse contra los responsables del hecho punible, contra los terceros civilmente responsables y contra los herederos de unos y otros*”, normas que deben, para estos efectos, estimarse derogadas en forma tácita, en los términos del artículo 52 del Código Civil, por la referida modificación del artículo 10 del citado Estatuto de Enjuiciamiento Criminal.

Octagésimo tercero.- Que, tal derogación no puede, además, sino estimarse como adecuada y coherente si se considera la doctrina de los autores procesalistas en cuanto estima que distorsiona la función primordial del Juez del Crimen, de establecer los hechos punibles y la responsabilidad de los partícipes, la de también conocer y resolver acciones civiles, sin limitación alguna.

Octagésimo cuarto.- Que, corrobora este aserto la norma del artículo 59 del Código Procesal Penal en cuanto establece la facultad de la víctima de entablar en el proceso penal las acciones “...*que tuvieran por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible...*” pero sólo respecto del imputado, excluyendo la intervención de terceros, sea como civilmente perjudicados sea como civilmente responsables, las que “...*deberán plantearse ante el tribunal civil que fuere competente...*”.

Octagésimo quinto.- Que, en consecuencia, procede **acoger** la excepción de incompetencia absoluta del Tribunal, opuesta por el Fisco de Chile, respecto de la demanda civil deducida en autos, la que deberá plantearse ante los tribunales de la jurisdicción civil que correspondan.

Octagésimo sexto.- Que, de conformidad con lo resuelto, resulta improcedente emitir pronunciamiento respecto de las restantes excepciones y alegaciones opuestas por el Fisco de Chile, al contestar la demanda civil, en lo principal de fojas 2630, ni tampoco ponderar la prueba rendida por las partes, mantenida en el respectivo Cuaderno de Documentos.

Octogésimo séptimo.- Que en cuanto a los restantes demandados, a fojas 3015 se estimó extemporánea la contestación a la demanda civil por parte del apoderado de Miguel Krassnoff (7° otrosí de fojas 2928) y a fojas 3139 se tuvo por evacuadas, en rebeldía, dichas contestaciones por parte de los apoderados de Francisco Ferrer Lima y de Cristoph Willeke Floel.

Octogésimo octavo.- Que, a su respecto, cabe señalar al tenor de lo antes razonado en autos que Miguel Krassnoff ha resultado ser autor tanto del homicidio calificado de Lumi Videla como del secuestro calificado de Sergio Pérez y, por su parte, Francisco Ferrer Lima y Cristoph Willeke Floel coautores del primero de tales ilícitos.

Octogésimo noveno.- Que, procede señalar que en virtud de lo preceptuado por el artículo 2324 del Código Civil *“El que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito.”*

Nonagésimo.- Que, en atención a la relación de parentesco existente entre los querellantes Lautaro Robín Videla Moya y Eduardo Enrique Pérez Molina, hermano e hijo, respectivamente, y las víctimas de homicidio calificado de Lumi Videla Moya y de secuestro calificado de Sergio Pérez, sobre los cuales han depuesto en autos respecto de la indemnización del daño moral que se demanda Marcela Rosa Vergara Cornejo(3420), Carmen Gloria Pizarro Hinestrosa (3422), Norman Alberto Partarrieu Padilla(3425), Erick Nelson Amigo Palacios(3427) y Andrés Pascal Allende(3430), debe estimarse acreditado el daño moral que ha causado a aquellos, en un caso, la desaparición del padre y, en el otro, la muerte de una hermana, en virtud de la incertidumbre de sus paraderos durante un largo lapso, la noticia mendaz a su respecto y, en fin, la aflicción propia de una pérdida de un ser querido; este daño, como se ha dicho, no es cuantificable cabalmente, pero por imperativo procesal es preciso para el sentenciador señalar una cifra a título de indemnización, actuando con prudencia, considerando la actual realidad económica y las cantidades fijadas por la jurisprudencia mas reciente, por lo cual se estima adecuado, disponer que se acoge la demanda del primer otrosí de fojas 2571 sólo en cuanto se fija, por tal concepto, la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos), para cada uno de los demandantes, suma que será reajustada según la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la ejecutoria del presente fallo hasta su pago íntegro, mas las costas de la causa.

Nonagésimo primero.- Que, tal suma procede imponerla a los acusados a título de indemnización por el daño moral causado por los delitos de secuestro y de homicidio, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal en cuanto permite al juez que conoce del proceso penal resolver sobre acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el

fundamento de la respectiva acción civil, obligue a juzgar las mismas conductas que constituyeron el hecho punible objeto del proceso penal.

Nonagésimo segundo.-Que, por otra parte, al tenor de lo que dispone el artículo 2317 del Código Civil en cuanto a que *"Si un delito o cuasi delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasi delito..."*, se resuelve que la suma regulada, a título de indemnización por el daño moral causado a ambos querellantes, deberá ser pagada solidariamente por los acusados Miguel Krassnoff Martchenko, Cristoph Georg Paul Willeke Floel y Francisco Maximiliano Ferrer Lima.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1º, 11 N° 6, 14,15, 16, 25, 28, 29, 50, 51, 59, 68 incisos 1º y 2º, 141 y 391 N°1 del Código Penal; 10, 108, 109, 110, 111, 434, 456 bis, 457, 459, 473, 477, 478, 481, 482, 488, 493, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 509 y 533 del de Procedimiento Penal, 375 y 379 del Código de Procedimiento Civil, artículo 1º del Decreto Ley N°2.191 y artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, **SE DECLARA:**

I)Que se condena a **Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda**, en calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de Sergio Pérez Molina, perpetrado a contar del 22 de septiembre de 1974, a sufrir la pena de **diez años y un día de presidio mayor en su grado medio** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

II)Que se condena a **Miguel Krassnoff Martchenko** en calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de Sergio Pérez Molina, perpetrado a contar del 22 de septiembre de 1974, a sufrir la pena de **cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

III)Que se condena a **Ciro Ernesto Torr  Sáez**, en su calidad de autor del delito de secuestro calificado en la persona de Sergio Pérez Molina, perpetrado a contar del 22 de septiembre de 1974, a sufrir la pena de **cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

IV) Que se condena a **Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda**, en su calidad de autor del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya el 03 de noviembre de 1974 a sufrir la pena de **quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

V) Que se condena a **Miguel Krassnoff Martchenko** en su calidad de autor del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya el 03 de noviembre de 1974 a sufrir la pena de **diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo** y a las

accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

VI) Que se condena a **Cristoph Georg Paul Willeke Floel**, en su calidad de autor del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya el 03 de noviembre de 1974 a sufrir la pena de de **diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

VII) Que se condena a **Francisco Maximiliano Ferrer Lima** en su calidad de autor del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya el 03 de noviembre de 1974 a sufrir la pena de de **diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

VIII) Que se condena a **Marcelo Luís Moren Brito**, en calidad de autor del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya el 03 de noviembre de 1974, a sufrir la pena de de **diez años y un día de presidio mayor en su grado máximo** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

IX) Que se condena a **Basclay Humberto Zapata Reyes** en su calidad de cómplice del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya, el 03 de noviembre de 1974, a sufrir la pena de **cinco años y un día de presidio mayor en su grado máximo** y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

X) Que **se absuelve** a **Ciro Ernesto Torré Sáez** de la acusación deducida en su contra en cuanto a considerarlo como autor del delito de homicidio calificado cometido en la persona de Lumi Videla Moya.

XI) Que **se acoge** la excepción de incompetencia opuesta por el Consejo de Defensa del Estado, en lo principal de su contestación de fojas 2630, respecto de la demanda de indemnización de perjuicios deducida por los querellantes Lautaro Robín Videla Moya y Eduardo Pérez Molina.

XII) Que **se acoge** la demanda de indemnización de perjuicios deducida por Carlos Urquieta Salazar por los querellantes Lautaro Videla Moya y Eduardo Pérez Molina, en el primer otrosí de fojas 2571 en contra de Miguel Krassnoff Martchenko, Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Cristoph Georg Paul Willeke Floel sólo en cuanto se les condena a pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral provocado a los familiares de las víctimas, la

suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos), para cada uno de los demandantes, suma que será reajustada según la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la ejecutoria del presente fallo hasta su pago íntegro, mas las costas de la causa y que deberá ser pagada solidariamente por los demandados.

XIII) Las penas impuestas a los condenados, que no serán objeto de las medidas alternativas de la Ley N° 18.216, atendidas sus respectivas cuantías, se les comenzará a contar a; Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda; Miguel Krassnoff Martchenko; Marcelo Luis Moren Brito; Basclay Zapata Reyes; Francisco Maximiliano Ferrer Lima; una vez que cumplan las penas impuestas, respectivamente, en la causa rol N° 2.182-98, episodios Villa Grimaldi, cuadernos “Miguel Ángel Sandoval”, “Diana Frida Arón” y “Dagoberto San Martín” y causa rol N° 1643 “Tucapel Jiménez”.

En cuanto a Cristoph Georg Paul Willeke Floel y a Ciro Ernesto Torré Sáez, se les comenzará a contar desde que se presenten o sean habidos para ello.

XIV) Respecto de los abonos a que alude el artículo 503 del Código de Procedimiento Penal, en la especie debe considerar lo siguiente:

- 1) A Ciro Ernesto Torré Sáez se le reconoce el lapso correspondiente entre el 28 de febrero de 2006 hasta el 08 de septiembre de 2006, periodo en que estuvo ininterrumpidamente privado de libertad en esta causa, según aparece de los certificados de autos que rolan a fojas 1802 y 2488, respectivamente.
- 2) A Cristoph Georg Paul Willeke Floel, se le reconoce el lapso comprendido entre el 28 de febrero de 2006 hasta el 22 de mayo de 2006, periodo en que estuvo ininterrumpidamente privado de libertad, según aparece de los certificados de fojas 1801 y 2212, respectivamente.
- 3) A Francisco Maximiliano Ferrer Lima, se le reconoce el periodo comprendido desde el 28 de febrero de 2006 a la fecha en que ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad en esta causa, según consta de certificado de fojas 1803.
- 4) A Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Marcelo Luis Moren Brito y a Miguel Krassnoff Martchenko no se les considerarán abonos puesto que se encuentran ininterrumpidamente privados de libertad en virtud de la sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en el episodio “Sandoval Rodríguez”, desde el 28 de enero de 2005, fecha en que se les comenzó a imputar la pena a la que fueron, respectivamente, condenados.
- 5) A Basclay Zapata Reyes, no se le considerarán abonos.

Notifíquese personalmente a los sentenciados y para ello:

- 1) Cítese a este Tribunal a la audiencia del día jueves 26 de julio de 2007 a las 09:00 horas, bajo apercibimiento de rebeldía, Cristoph Georg Paul Willeke Floel, por intermedio de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército y a Ciro Ernesto Torré Sáez, a la misma audiencia por intermedio del Departamento Jurídico de Carabineros de Chile.
- 2) Designase como secretaria ad hoc a doña Valeska Villalón Agüero a fin de notificar a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, a Miguel Krassnoff Martchenko, a Marcelo Luis Moren Brito, a Francisco Maximiliano Ferrer Lima y a Basclay Humberto Zapata Reyes en el lugar en que cumplen condena, estos es en el Centro de Cumplimiento Penitenciario “Cordillera” y “Punta de Peuco”, respectivamente. Debiendo constituirse en dichos centros el día jueves 26 de julio de 2007 a las 12:00 horas.

3) Notifíquese a los apoderados de las partes querellantes y al abogado del “Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio del Interior” por el Receptor de turno del presente mes de julio.

Consúltese, si no se apelare.

Regístrese, cúmplase, en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes tribunales en que se tramitan procesos en contra de los sentenciados para informarles sobre las decisiones del presente fallo y, en su oportunidad, archívense

Rol 2182-1998

“Villa Grimaldi”

(Lumi Videla Moya y otro)

DICTADA POR DON ALEJANDRO SOLIS MUÑOZ, MINISTRO DE FUERO.

En Santiago a veintitrés de julio de dos mil siete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.